



© Armando Bartra  
Febrero 2019

Descarga gratis éste y otros libros en formato digital en:  
**[www.brigadaparaleerenlibertad.com](http://www.brigadaparaleerenlibertad.com)**

Cuidado de la edición: Alicia Rodríguez.  
Diseño de interiores y portada: Daniela Campero.

**@BRIGADACULTURAL**

**LAS NUEVAS LUCHAS POR LA TIERRA  
DEFENDIENDO EL TERRITORIO  
Y EL PATRIMONIO  
(2000-2015)**

ARMANDO BARTRA



## Preámbulo

*El primer combate que los belicosos yaqui tuvieron contra las fuerzas españolas fue el 5 de octubre de 1533. Los españoles, al mando de Diego de Guzmán, habían llegado el día 4 a la margen izquierda del río Yaqui: pasaron dicho río el día 5 y después de algunas horas de marcha vieron en la llanura una multitud de indios que venía a su encuentro arrojando puños de tierra hacia arriba, templando los arcos y haciendo visajes. El jefe de ellos, cuando estuvo a corta distancia de los españoles, trazó con el arco una raya muy larga en el suelo, se arrodilló sobre ella, besó la tierra, después se puso en pie y empezó a hablar manifestando a los invasores que se volvieran y no pasaran la raya, pues si se atrevían a pasarla perecerían todos.*

Fortunato Hernández

*La guerra del Yaqui*<sup>1</sup>

Cuatrocientos setenta años después la raya sigue ahí. En mayo de 2013, la tribu yaqui instalaba un campamento sobre la carretera internacional 15, cerca de Vicam, exigiendo la cancelación del Acueducto In-

---

<sup>1</sup> Fortunato Hernández, *La guerra del Yaqui*, Gobierno del Estado de Sonora, Hermosillo, 1985, p. 133. 134.

dependencia que conduciría rumbo a Hermosillo 75 millones de metros cúbicos de agua del río Yaqui almacenada en la presa Álvaro Obregón, dejando sin riego suficiente a los pobladores originales y otros agricultores, en beneficio de los capitalinos pero sobre todo de empresas como Ford, Apasco, Heineken, Coca Cola, Pepsico y Big Cola.

No importa si lo de la raya en el suelo y el “no pasarán” es leyenda o verdad, el hecho es que los yaquis llevan cinco siglos batallando por su sierra, por su valle, por su río, por el derecho a gobernarse a su modo y por su existencia como pueblo. En el arranque del México independiente se dejaron usar militarmente por conservadores y por liberales, entre otras cosas porque mientras duraran los conflictos entre los grupos dominantes sus tierras no eran amenazadas, pero en los ochenta del siglo XIX, cuando el gobierno de Porfirio Díaz empezó a promover la colonización económica del valle, la tribu se puso en pie de guerra empleando las armas de sus enemigos y tácticas aprendidas en el ejército. Y así siguieron hasta 1940 en que el presidente Cárdenas les reconoció una parte de lo que exigían, la propiedad de 36 mil hectáreas en forma de ejidos y la mitad del agua de la presa Álvaro Obregón. Al firmar el acuerdo no dieron las gracias, simplemente dijeron que habían “ganado la guerra”.

No la habían ganado del todo y después han tenido que seguir pugnando por su existencia. El combate más reciente, contra el Acueducto Independencia, se

inscribe en la nueva oleada de movimientos en defensa de tierras, aguas y otros recursos naturales; generalización de la lucha por lo que hoy llamamos territorios, que es nacional pero también internacional.

## **Una batalla global: la defensa del terruño y el patrimonio**

*Y de repente un día entra una topadora y se encuentra que por donde tiene que hacer una locación petrolera está mi casa. Y ahí comienzan los problemas, porque justamente nosotras no nos vamos a ir a vivir a la luna, o a otro lado que no sea donde siempre hemos estado. Entonces nuestra lucha es fuerte.*

Mujer mapuche<sup>2</sup>

En el tercer milenio los mexicanos y mexicanas del campo siguen luchando por la tierra como lo han venido haciendo los últimos quinientos años. Cuando la conquista algunos desafiaron la invasión, durante el siglo XIX participaron en las guerras de Independencia y más tarde, en estados como Yucatán, Sonora y lo que ahora son Jalisco y Nayarit, se alzaron contra el ninguneo, la exclusión y los emergentes latifundios. El movimiento protagonizado por los indios coras y encabezado por Manuel Lozada “El tigre de Álica”,

---

<sup>2</sup> Citada en Carmen Cariño. “En defensa de los recursos naturales y el territorio”, La Jornada del Campo, 44, 21/5/11

que se despliega a fines de los sesenta del siglo XIX en el entonces Cantón de Jalisco, fue políticamente confuso pero claridoso en sus decires:

No estamos conformes, porque se nos ve como extranjeros en nuestra propia Patria, razón de que nuestros terrenos están usurpados por los grandes propietarios, y aunque se nos ha ofrecido hacer que se nos devuelvan, jamás lo hemos conseguido<sup>3</sup>.

En el arranque del siglo XX tomaron las armas exigiendo tierra y libertad. Consiguieron la primera pero no la segunda pues los gobiernos posrevolucionarios cambiaron parcelas por sumisión política. Cincuenta años después, en los setenta de la centuria pasada, sus hijos y nietos, que ya no habían alcanzado ejido, forcejearon para lograr que se reanudara el reparto agrario. Dos décadas más tarde, en los noventa, los indios se alzaron por dignidad y por el derecho a gobernar en sus territorios.

Así, durante los siglos XIX y XX, las mujeres y hombres rurales batallaron de distintos modos por tierra y por libertad. Y en eso siguen. Sólo que hoy el combate más visible es defensivo y se libra en los llamados territorios: espacios en disputa donde las comunidades indígenas y mestizas tratan de preservar su patrimonio y su vida, amenazados por codiciosas corporaciones.

---

3

Citado en Jean Meyer, *Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821-1910)*, Sep Setentas, SEP, 1975, p. 104.

Es como si cinco centurias más tarde el saqueo iniciado en la Conquista y continuado en la Colonia se reavivara. Pero ahora la rapiña ya no es obra de encomenderos, hacendados y finqueros sino de las grandes empresas y sus cómplices en el gobierno.

Las dentelladas más lesivas al patrimonio de los pueblos vienen de las minas, las presas, las carreteras, la urbanización salvaje, el gran turismo... Pero lo que realmente está en juego no son sólo los territorios específicos que interesan directamente a ciertos capitales, sino la propiedad social de la tierra, principio que ha sido piedra angular del México rural durante la última centuria. Los poderes económicos y políticos nacionales e internacionales van sobre el usufructo campesino de las parcelas familiares y las tierras del común, una conquista y un derecho que son partes sustantivas del pacto social resultante de la revolución agraria de 1910 formalizado en la Constitución de 1917.

Cuando América Latina regresa a un capitalismo, ciertamente sostenido en la valorización de los recursos naturales, pero también acotado y redistributivo, y mientras algunos países del subcontinente exploran los caminos del posdesarrollo impulsando lo que llaman economía plural y socialismo comunitario, los gobiernos de México se empeñan en llevar a sus últimas consecuencias el modelo de capitalismo desmecatado y gandalla dominante en el último tercio del siglo pasado.

La administración de Peña Nieto, con la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó en 2012 a la Presidencia de la República, busca llevar a su término el ciclo neoliberal iniciado hace 30 años, consumando íntegramente la privatización de los recursos naturales, de las actividades económicas estratégicas y de los servicios sociales. Y más que en la minería o el petróleo, que en la salud o en la educación, el corazón de la contrarreforma está en acabar con la propiedad social de la tierra y con su apropiación colectiva por las comunidades.

En lo tocante al campo, el ciclo neoliberal empezó con la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución, que al relativizar la condición inalienable de los ejidos y comunidades permitía transitar de la propiedad social colectiva al pleno dominio individual y de ahí a la venta. Conversión privatizadora favorecida por acciones jurídicas como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), y por políticas agrícolas pro empresariales que desalientan a la pequeña y mediana producción agropecuaria expulsando del campo a los campesinos. Por esos mismos años la reforma a la Ley minera, que concede a la actividad extractiva prioridad sobre cualquier otra, evidenciaba que los grupos de poder habían tomado la decisión de imponer la valorización privada capitalista de los recursos naturales, sobre la apropiación nacional operada por el Estado y, en el caso de la tierra, sobre el usufructo campesino. Veinte años después, el ciclo está concluyendo con la reforma

energética que por una parte privatiza la extracción de combustibles fósiles y la generación de energía, al ceder las rentas a los particulares, y por otra conculca el derecho de los campesinos a las tierras al llevar a sus últimas consecuencias el principio, ya establecido en la Ley minera, de que las actividades asociadas con el petróleo y la electricidad tienen prioridad sobre cualesquiera otras.

El siguiente párrafo proviene de la ley reglamentaria de la energía geotérmica, pero se reproduce sin cambios en las que se refieren a otras formas de generar y transmitir energía eléctrica y a la extracción de petróleo y gas. De ellas se dice que:

son de utilidad pública, preferente sobre cualquier uso o aprovechamiento del subsuelo, y procederá la ocupación, afectación superficial, ya sea total, parcial, simple limitación de los derechos de dominio o la expropiación, previa declaración de utilidad pública<sup>4</sup>.

Lo que falta ahora es incorporar a las leyes y procedimientos agrarios, los cambios necesarios para que se facilite aún más el tránsito de la propiedad ejidal colectiva al pleno dominio individual privado, establecido en la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional e impulsado durante tres décadas mediante programas de titulación. Lo que supone facilitar el procedimiento

---

<sup>4</sup> Víctor Ballinas, "La industria de hidrocarburos con prioridad sobre cualquier otra, prevé proyecto de ley", La Jornada 10/06/14.

y, sobre todo, restarle atribuciones a la asamblea y al Comisariado. Por si quedara alguna duda de que el cometido de la mudanza rural que planteó el gobierno de Peña Nieto es llevar a término lo que se propuso la modificación constitucional de 1992, separando a los campesinos de la tierra y acabando definitivamente con la propiedad social, tenemos las declaraciones de Mireille Roccatti, abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el primer foro temático para la reforma del campo.

Hablamos de una reforma constitucional para (...) darle (*al ejido*) flexibilidad dentro de sus asambleas para que puedan disponer de sus parcelas, pues desde la reforma al artículo 27 constitucional es bajo el número de personas que han podido desincorporar sus tierras de manera legal; lo han hecho de manera clandestina, con contratos privados y a bajos precios, pero no tienen la certeza jurídica del pleno dominio sobre la tierra<sup>5</sup>.

En México, como en América Latina, es patente la resistencia popular al despojo. Pero la renovada expansión del capital sobre tierras y otros bienes que fueron comunes es un fenómeno global, y también lo es la protesta de los afectados.

---

<sup>5</sup> <http://www.vanguardia.com.mx/elcampoconproblemascronicosperonoestadestruidosagarpa-2016263.html>

El acaparamiento, concentración, financiarización y extranjerización del suelo están asociados con la expansión de la minería, las urbanizaciones, las represas, las carreteras, el gran turismo y otros negocios, pero el hambre de tierras para siembra es el más voraz. Desde 2007 la crisis agrícola hizo evidente que – en un contexto de cosechas erráticas por el cambio climático – la expansión de la demanda alimentaria, forrajera y de biocombustibles no podía ser satisfecha por el modelo agroalimentario prevaleciente. Y así, un ámbito que por décadas había sido comparativamente poco atractivo para el gran dinero, devino promisorio fuente de ganancias y sobre todo de rentas. Arrancó entonces una rebatiña planetaria por la tierra; carrera de ratas alentada por organismos multilaterales como el Banco Mundial, en la que participan con igual entusiasmo gobiernos, empresas y fondos de inversión. Entre 2006 y 2010 la extensión de tierras compradas cada año se triplicó hasta llegar a 10 millones de hectáreas<sup>6</sup>, pero para Oxfam el trasiego es aún mayor, pues dicha agencia calcula que entre 2001 y 2010 fueron adquiridas o rentadas por los grandes compradores nada menos que 227 millones de hectáreas<sup>7</sup>.

Una parte de los grandes compradores son gobiernos a los que mueven urgencias territoriales de diferente orden. A unos los motiva la insuficiente disponibilidad nacional de tierra y agua respecto

6 Ver *The Race for Land. Afrikagrupperna, Forum Syd, Swedish Cooperative Centre*, Estocolmo, 2012, p. 12.

7 Ver “*Our Land, Our Lives*”. *Time Out on the Global Land Rush* <http://www.oxfam.org>.

de la demanda alimentaria de su población, tal es el caso de los gobiernos de Corea del Sur, India, Egipto, Emiratos Árabes y Arabia Saudita; este último país es un inmejorable ejemplo de este tipo de incentivo pues importa el 96% de sus alimentos. Otros encabezan países con economías expansivas y abundancia de recursos financieros de inversión, que buscan extender su influencia económica, sus redes de abasto de materias primas y sus mercados. Tal es el caso de China, que es básicamente autosuficiente en alimentos, pero incursiona territorialmente en África, Asia y América Latina, continentes donde ha comprado grandes extensiones de tierra, aunque también adquiere petróleo y materias primas varias; además de que canaliza créditos, financia y realiza obras de infraestructura, establece agroindustrias, vende maquinaria y equipo, transfiere conocimiento tecnológico... Por si fuera poco, el país más poblado del mundo *exporta* contingentes de sus propios ciudadanos<sup>8</sup>.

El sueco Henning Mankell no es sociólogo sino literato, pero ha vivido muchos años en Mozambique y conoce de cerca la lógica del expansionismo chino sobre el continente negro, lo que a mi ver justifica citar una de sus novelas, relato imaginativo donde sin embargo la ficción se entrevera con la realidad.

Dice Yan Ba: En la lucha por cubrir nuestras necesidades de materias primas y, desde lue-

---

<sup>8</sup> Gérard Chouquer, *The global issue of land grabbing*, Publi-Topex, París, 2012, p.16-29.

go, también de petróleo, llevamos varios años estableciendo relaciones cada vez más fuertes y profundas con muchos estados africanos. Hemos sido generosos concediendo créditos y donaciones, sin inmiscuirnos en los sistemas políticos de dichos países. Somos neutrales, hacemos negocios con todos (...) A diferencia de nuestro país, el continente africano está poco poblado. Y hemos comprendido que, dándose esta circunstancia, podemos hallar al menos parte de la solución a los problemas que amenazan nuestra estabilidad. El hecho de que existan similitudes aparentes no significa que vayamos a exponer al pueblo africano a una segunda invasión colonialista. Lo único que perseguimos es resolver un problema al tiempo que damos nuestro apoyo a estas gentes. En las desiertas llanuras, en los fértiles valles que rodean los grandes ríos africanos, trabajaremos la tierra trasladando allí a millones de nuestros campesinos pobres (...) De este modo cultivaríamos la tierra africana al tiempo que eliminaríamos la amenaza que se cierne sobre nosotros. Sabemos que habremos de enfrentarnos a la oposición (...) del resto del mundo que creará que china ha pasado de apoyar la lucha contra el colonialismo a convertirse en país colonizador (...) Ahora el continente negro va a convertirse en fundamental para el desarrollo

de China, tan vez incluso a la larga en un satélite chino...<sup>9</sup>

Y así es. En 1999 vivían en África unos 100 mil chinos, en 2013 había alrededor de un millón. Un ejemplo de los problemas que genera esta invasión silenciosa son los choques sangrientos que han tenido con los campesinos locales los miles de pequeños mineros de Shanglin que fueron trasladados a Ghana para desarrollar labores extractivas. En América Latina China incrementa rápidamente su inserción: Venezuela, que en 2013 le debía unos 40 mil millones de dólares, le exportaba ingentes cantidades de petróleo; igualmente cuantiosa es la deuda de Ecuador con el gigante asiático, que tiene ahí fuertes inversiones; Nicaragua le concesionó por medio siglo un nuevo canal interoceánico que las propias empresas chinas construirán; en México, pese a las protestas de los empresarios locales y de muchos nacionales, avanza el proyecto Dragon Mart, un Centro de Distribución de Productos Chinos sólo comparable con el que ese país tiene en Dubái, que debe ser la base desde la que se desparramen las mercancías chinas por todo el continente; el enclave contaría con almacenes, área comercial, hotel y viviendas, instalaciones que ocuparían unas 400 hectáreas, y llevaría a Cancún a 2, 500 chinos entre habitantes y empleados diversos<sup>10</sup>.

9 Henning Mankell, *El Chino*, Tusquets, México, 2010, p. 242-247.

10 Claudio Lomnitz, *China y el nuevo nacionalismo latinoamericano*, La

Y del mismo tamaño que el despojo es la oposición que despierta. La resistencia a la expoliación territorial capitalista es hoy un fenómeno global, transclasista y multiétnico, aunque se intensifica entre los pobres de la periferia y en particular entre las poblaciones originarias, con quienes los saqueadores se ensañan. Según el Atlas de Justicia Ambiental<sup>11</sup>, que para fines de 2014 había capturado información sobre cerca de dos mil conflictos territoriales en todo el mundo, alrededor del 40% de estos involucran poblaciones indígenas y entre el 15 y el 20% han tenido éxito en interrumpir los proyectos agresivos, lo que representa un porcentaje alentador. Sin embargo el costo ha sido alto: un informe de la organización Global Witness<sup>12</sup>, que se ocupa únicamente de acciones en defensa de la naturaleza, obtuvo datos verificables sobre cerca de un millar de ambientalistas muertos por causa de su lucha, de mediados de 2013 a mediados de 2014.

En el continente americano las inconformidades se han multiplicado en los últimos tres lustros, haciendo de la defensa territorializada de bienes comunes —naturales, socioeconómicos y culturales—, una de las vertientes más concurridas del conflicto social del siglo XXI. En Chile la etnia mapuche mantiene su ancestral lucha por el territorio ahora mordido también por grandes empresas mineras; en Argentina los

---

Jornada, 16/10/13.

11 [www.ejatlas.org](http://www.ejatlas.org).

12 <http://www.globalwitness.org/deadlyenvironment/>

pobladores de Neuquén se oponen a la técnica del *fracking* que emplea ahí la Chevron; en Tolima, Colombia, se batalla contra la Anglo Gould Ashanti; fracasado el proyecto de que se compensara a Ecuador por no extraer petróleo en el bloque ITT del Parque Nacional Yasuní, el gobierno ha decidido autorizar su explotación, medida a la que se oponen organizaciones indígenas y ambientalistas; en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), en la amazonia boliviana, comunidades y ecologistas rechazan la carretera Villa Turani-San Ignacio de Moxos; en Cajamarca, Perú, se combate contra la empresa Yanacocha; en Nicaragua, se resiste al proyecto de un nuevo canal transístmico; en el estado brasileño de Pará los ecologistas y defensores de derechos humanos se oponen a la construcción de la presa Belo Monte sobre el río Xingú, que sería la tercera más grande del mundo y pondría en riesgo la existencia de pueblos indígenas de la zona como los kayapó, arara, jurtuna, araweté, xikrin, ariní y parakañá; en Brasil, Argentina y otros países del cono sur, hay un movimiento contra el proyecto de interconexión del Amazonas, el Orinoco, el La Plata y otra docena de ríos, y así<sup>13</sup>. Atendiendo a una sola amenaza, la que representa la minería, a fines de 2013 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), hizo un recuento de los conflictos

13 Ver Joan Martínez Alier, "Grandes proyectos inútiles impuestos", La Jornada, 05/06/13; y Joan Martínez Alier, "Postmortem Yasuní ITT", La Jornada, 8/8/13.

que genera, según el cual los países con mayor incidencia son Perú y Chile, cada uno con 33 confrontaciones de la población con las empresas del ramo, y Argentina y México, con 26 casos cada uno<sup>14</sup>.

Es este un trajín contestatario continental que por su composición mayormente rústica da fe de que en Nuestra América colonizada y clasista uno de los sujetos sociales más tenaces y persistentes es el que resulta de la fusión de lo campesino y lo indígena; una bifronte entidad societaria en que se entreveran el derecho a la tierra que se gana con el trabajo y el derecho a la tierra que otorga la ocupación ancestral.

De esta basta confrontación, que bien podríamos calificar de civilizatoria, hay que dar cuenta documentándola pero también poniendo en claro lo que está en juego y lo que hay detrás: la racionalidad sistémica que subyace en la nueva ofensiva territorial del gran dinero y la trascendencia y significado de los movimientos que la resisten. Empezaré por la reseña de algunas de las luchas territoriales activas en México durante el tercer lustro de este siglo, que a mi ver ilustran bien la índole del conflicto.

---

14 Susana González, "México uno de los países de América Latina con más problemas con mineras: Cepal", La Jornada, 20/10/13.



## Movimientos territoriales en México: un recuento

*Queremos defender este lugar sagrado (...) que no se saque el corazón y la sangre de Wirikuta, porque está vivo. Si lo hicieran, el pueblo wixárika desaparecería.*

Palabras del *maráakame*, Cerro del Quemado,  
Wirikuta, San Luis Potosí.

Minería a cielo abierto que deja a su paso titánicos tajos; exploración y explotación altamente contaminantes de combustibles fósiles, ahora también mediante fractura hidráulica de esquistos; grandes presas, carreteras y ductos que desplazan pueblos, alteran cuencas y desquician ecosistemas; silvicultura depredadora que arrasa bosques y selvas, lo que da lugar a deslaves y reduce la infiltración de la lluvia propiciando erosión hídrica y eólica del suelo con el consecuente azolve de los ríos, que a su vez ocasiona inundaciones; reducción de la diversidad maicera a través del secuestro, alteración y privatización de su genoma; urbanizaciones desmedidas y emprendimientos turísticos invasivos; ocupación de los espacios del pequeño comercio por las grandes tiendas departamentales; invasión del paisaje urbano por la publicidad comercial y política; desposesión del tiempo de ocio y sus lugares domésticos y comunitarios por los medios electrónicos de comunicación masiva que usufructúan el espectro

electromagnético; minería de datos en el ciber territorio practicada, entre otros, por los espías del imperio; privatización de las playas y el paisaje; mercantilización del patrimonio cultural material e inmaterial; saqueo cinegético y pesquero; concentración de tierras agrícolas; acaparamiento y contaminación del agua dulce; pérdida de poblados, cultivos y tierras saldo de eventos meteorológicos que el deterioro intencional de los ecosistemas, la pobreza y la imprevisión transforman en desastres sociales; cárteles de la droga que imponen su ley sobre extensos territorios... Todos los despojos del despojo: la nueva cabeza de Medusa, la multiforme maldición del milenio.

La expoliación se concreta por lo general en acciones o eventos localizados, que chocan con formas preexistentes de apropiación del espacio y, en particular, de usufructo territorial. Así, de mil maneras, las comunidades rurales y urbanas vemos amenazado nuestro hábitat por una legión de poderosas y predatorias empresas. Corporaciones a las que casi siempre respalda el gobierno, no sólo porque la teología de la neoliberalización llama a privatizar sin medida ni clemencia, también porque los funcionarios saltan jubilosos de los cargos públicos a los consejos de administración de los negocios que beneficiaron. Capitales intrusos que, a primera vista, no están tan interesados en explotar nuestro trabajo como en expropiar nuestros bienes patrimoniales y, si es necesario, expulsarnos de la tierra interrumpiendo o desquiciando los

intercambios sociales, laborales y simbólicos que nos unen con el lugar que habitamos. Y éste es un acto de violencia, de violencia extrema.

No sólo los pueblos indígenas y otros pobladores seculares, todos los vivientes ocupamos un lugar sobre la tierra; todos nos inscribimos en relaciones georeferenciadas por las que al habitar, trabajar y significar el entorno mantenemos física y metafísicamente la vida; todos, sin excepción, participamos de nexos sociales situados por los que refundamos a diario el cosmos y le restituimos el sentido a las cosas. Si se rompe este vínculo mágico, si somos expulsados de nuestro lugar o se destruyen las condiciones que nos permitían permanecer, se rompe real y simbólicamente el equilibrio del mundo.

Todos preservamos el orden cósmico de a poquito, con los pequeños ritos privados y sociales de los que está empedrada la cotidianidad, pero los wixárika asumen la compartida responsabilidad cósmica de manera excepcionalmente entusiasta, generosa y colectiva, además de periódica, ritual y estetizada. Así, las peregrinaciones que 30 *mara'akate* o jicareros realizan todos los años al cerro sagrado de Wirikuta, donde a través de visiones propiciadas por el largo viaje, el ayuno y el *hicuri* o peyote, recrean el mundo de la luz, son eventos que algún modo nos incumben a todos, por muy agnósticos que algunos seamos<sup>15</sup>.

15      Johanes Neurath, "Wirikuta y la búsqueda colectiva de visiones", La

Pero la peregrinación anual de los chamanes huicholes está en riesgo y por ende también peligran la armonía cósmica. Grandes partes del Desierto del Amanecer, que por decreto estatal es Área Natural Protegida, que se lo considera Área de Importancia para la Preservación de las Aves, que desde 1988 fue incorporado por la Unesco a la Red Mundial de Lugares Sagrados Naturales y que desde 2004 está en lista de espera para ser reconocido como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, fue cedido en 2009 por el presidente Felipe Calderón a la minera First Majestic Silver, que tiene 22 concesiones que abarcan seis mil 327 hectáreas<sup>16</sup>, y a la Revolution Resources, cuyo Proyecto Universo, está previsto para ocupar 60 mil hectáreas, la quinta parte de la reserva<sup>17</sup>.

Aunque divididos por un siglo de disputas territoriales, representantes de los 45 mil wixárika que habitan partes de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, se congregan año tras año para cumplir el compromiso que tienen con ellos mismos, con nosotros y con el Universo. Y en 2013 lo hicieron también para defender sus territorios sagrados. El Frente Tamatsima Wahaa puso en acción a los indígenas, pero movilizó igualmente a un amplio segmento de la opinión pública integrado por quienes sabemos que permitir la des-

---

Jornada del Campo n. 55, 28/03/12

16 Columba Vértiz de la Fuente, "Documenta Vilchez la lucha huichol contra las mineras", Proceso, n. 1960, 25/05/14.

17 Tracy L. Barrett. "Mensaje de los dioses: unirse para defender la cima del sol", La Jornada del Campo n. 54, 17/07/12.

trucción de la base territorial del imaginario wixárica y con ella la destrucción de los huicholes como pueblo, es aceptar que se violente el orden cósmico: un delicado equilibrio sostenido sobre la pluralidad dialogante de las culturas. Primero se fueron sobre el Desierto del Amanecer y si los dejamos después se irán sobre los territorios significativos de todos los demás. Por fortuna de momento los detuvimos gracias a un amparo judicial interpuesto por la comunidad en 2013.

### *Minería tóxica*

La amenaza minera que aún pende sobre Wirikuta es apenas un caso entre muchos. Desde los noventa del siglo pasado los precios de los minerales se elevaron desmesuradamente —en diez años la cotización de la plata se multiplicó por ocho— desatando un prolongado *boom* extractivo tanto de metales industriales como hierro, cobre y aluminio, como de metales preciosos. La extracción minero-metalífera es uno de los negocios globales con mayor concentración de capital: diez empresas controlan el 77% del cobre de todo el mundo, mientras que en el aluminio la concentración en el decil más alto es de 71%, de 67% en el hierro y de 60% en el oro<sup>18</sup>.

En América Latina y en especial en México, la expansión de la minería resultó aún más arrasadora que en el resto del mundo, sobre todo en oro, plata,

18 Horacio Machado, et al, *15 mitos y realidades de la minería transnacional*

cobre y zinc<sup>19</sup>. Entre 2005 y 2012 la minería mexicana creció a un promedio anual de 5.4% y la tasa venía aumentando, pues en el último año considerado la expansión fue de 9.5%<sup>20</sup>. En este lapso México pasó del treinta, al cuarto lugar en el *ranking* minero mundial y en menos de cinco lustros la extracción de oro se multiplicó por tres. Esto se explica por los buenos precios internacionales, pero fue propiciado por la Ley minera de 1993 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor al año siguiente. Nueva normatividad que le abrió paso a la inversión extranjera en un recurso que es de la nación y que no puede explotarse sin que medien concesiones. Y es que la Ley otorga prioridad a la extracción de metales sobre cualquier otra actividad económica y ha sido manejada con tanta laxitud que actualmente se han entregado permisos de exploración sobre cerca de un 20% del territorio mexicano, concesiones que son prácticamente a perpetuidad, pues tienen una duración de 50 años y pueden prorrogarse por otros 50<sup>21</sup>.

Entre 2000 y 2011 el gobierno otorgó más de 27 mil concesiones. Y faltan muchas más, pues el presidente de la Cámara Minera de México ha declarado *en la Argentina*, Editorial El Colectivo, Buenos Aires, 2011, p. 18.

19 Carlos Rodríguez Walenius, "El México bárbaro de las mineras canadienses y las comunidades rurales", en Carlos Rodríguez Walenius y Ramses Arturo Cruz Arenas (coordinadores) *El México bárbaro del siglo XXI*. UAM-X, 2013, p. 143-165.

20 Susana González, "México uno de los países de América Latina con más problemas con mineras", *La Jornada*, 20/10/13.

21 Carlos Rodríguez Walenius, "Dominio del terreno campesino por mineras canadienses", *La Jornada del Campo*, n 40, 15/01/11.

que 60% del país tiene potencial para esta actividad. La mayor parte de las autorizaciones se han dado a empresas trasnacionales, principalmente de Canadá, en donde están registradas el 75% de las mineras, pues sus laxos reglamentos, facilidades financieras y complicidad política y diplomática con éstas, cuando en otros países son demandadas por sus desmanes, hacen del de la hoja de maple el paraíso de las trasnacionales extractivas, lo que Sacher y Beneault llaman un “estado minero”<sup>22</sup>.

En México las mineras registradas en Canadá tienen 202 concesiones, el 67% del total; las estadounidenses 51; las australianas 7; las chinas también 7; las japonesas 6; las de Gran Bretaña 4; las empresas mexicanas tienen 14 concesiones y otros países tienen una o dos cada uno. A mediados de 2013, 287 corporaciones con capital extranjero operaban 853 proyectos extractivos, sobre todo de oro y plata. Empresas que explotan nuestro trabajo, pues los mineros mexicanos ganan 16 veces menos que los estadounidenses y canadienses, y que destruyen nuestro medioambiente, pues el 80 % son tajos a cielo abierto que dejan la tierra envenenada y cubierta de cráteres lunares. El reciente *boom* minero recuerda lo que sucedió en los años de la Colonia y después durante el porfiriato, pues los 52 millones de hectáreas que entre 2000 y 2012 los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón concesionaron a las corporacio-

---

22 William Sacher y Alain Deneault, “Canadá, paraíso judicial para trasnacionales mineras”, *La Jornada*, 13/10/13.

nes extractivas, equivalen a las 50 millones que entre 1883 y 1906 —y mediante las compañías deslindadoras— el gobierno de Porfirio Díaz entregó a los terratenientes nacionales y extranjeros<sup>23</sup>. Gracias a esta cesión, en una década se ha extraído dos veces y media la cantidad de plata que los españoles sacaron durante tres siglos y casi el doble del oro que se llevaron<sup>24</sup>.

El saqueo es de los trabajadores y de la naturaleza, pero también del país, pues las contribuciones que dejan las mineras son ínfimas y representan apenas el 2.9% de todos los ingresos fiscales. En el caso de las canadienses, el impuesto sobre las ganancias es en México de alrededor de 0.07%, mientras que en su país las contribuciones son de 25.3%, casi 362 veces más<sup>25</sup>. Un estudio de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas realizado en 2013, muestra con ejemplos la renuncia del gobierno mexicano a retener una porción significativa de la renta minera: la First Majestic Silver, con cuatro mil hectáreas en Coahuila, tuvo una utilidad bruta anual de mil 464 millones de pesos y pagó 68 mil 160 de impuestos; la Timmis Gould con 70 mil 986 hectáreas en Sonora, ingresó dos mil millones de pesos y pagó 890 mil; también en Sonora la Aurico Gould con tres mil 665 hectáreas, ingresó 933 millones y pagó 129 mil 154; la Fortuna Silver Mines y la Continuum Resources, con 30 mil

23 Carlos Fernández Vega, "México SA", La Jornada, 27/12/13.

24 Ver Observatorio Social de México. *Informe ciudadano del estado que guarda la Nación*. México, Septiembre, 2013.

25 Carlos Fernández-Vega, "México SA", La Jornada, 7/10/13.

hectáreas en Oaxaca, ingresaron dos mil 124 millones y pagaron cuatro millones 252 mil; la Agnico-Eagle Mines, con 56 mil hectáreas en Chihuahua, ingresó cinco mil 716 millones y pagó 954 mil 240... La diferencia con lo que pagan en su país de origen es abismal, pues la misma Agnico-Eagle que en México pagó menos de un millón de impuestos por una ganancia de casi 6 mil millones, en sus minas de Quebec, que abarcan 796 hectáreas, ganó dos mil 203 millones, pero pagó 262 millones 260 mil pesos a esta provincia, y 352 millones 618 mil pesos de un impuesto a la minería sobre utilidades brutas<sup>26</sup>.

Entre ejidos y comunidades, los núcleos agrarios de propiedad social disponen en México del 53% de la tierra y otra parte importante está en manos de propietarios privados minifundistas, de modo que la mayor parte de los metales que ambicionan las mineras están bajo poblados, milpas, huertas y potreros campesinos. En un informe del Consejo Económico y Social de la ONU, del 14 de febrero de 2013, se reconoce que esta situación multiplica “los frentes de contacto entre la minería y los pueblos” y precisa el contenido de las fricciones:

Uno de los temas de conflicto entre las empresas mineras canadienses, por un lado, y las sociedades locales y grupos ambientalistas, por otro, es

---

26 Roberto Garduño. “México convertido en paraíso fiscal para las mineras canadienses”, La Jornada, 6/10/13.

el de los pasivos ambientales: estos residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el ambiente o la salud humana, que quedan como remanentes de la actividad minera<sup>27</sup>.

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 2013, concluye que después de Perú y Chile, —que tienen cada uno 33 conflictos mineros—, son Argentina y México —que tienen 26—, los lugares donde hay más choques debido a la extracción de minerales. Las empresas más confrontadas son Minera San Javier, subsidiaria de la Metallica Resources New Gould; Grupo Frisco, de Carlos Slim; Gold Group; Ferro Gusa Carajás; Minefinders Corporation of Vancouver; Continnum Resources Minera Navidad; Minera El Rosario; Great Phanter Resources Limited y Media Luna<sup>28</sup>. Por su parte la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, en un informe de 2013, registró 25 conflictos con mineras en los que están involucradas comunidades indígenas: siete en Oaxaca, tres en Puebla, tres en Jalisco, dos en Chiapas y en diez estados: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guerrero y Morelos, un conflicto en cada uno<sup>29</sup>.

Eckart Boege calculó que de las concesiones mineras, cerca de dos millones de hectáreas están so-

27 <http://cdpim.gob.mx/extractivas.pdf>.

28 Susana González. “México uno de los países de América Latina con más problemas con mineras” Cepal, La Jornada 20/10/13.

29 Arturo Rodríguez García, “El incendio nacional”, Proceso, n. 1961, 01/06/14.

bre territorios indígenas, lo que representa el 17% del total del área en posesión de comunidades originarias, afectando sobre todo a rarámuris, zapotecas, chatinos, mixtecos, coras y tepehuanes<sup>30</sup>. Dato sin duda alarmante, pero en la perspectiva de las resistencias hay que tener presente que el resto de los permisos de exploración está sobre tierras que pertenecen a campesinos mestizos o que son ocupadas por comunidades en que estos coexisten con pobladores indígenas. De modo que los movimientos contra las expropiaciones son casi siempre pluriétnicos y con frecuencia multclasistas. Baste mencionar que los lugares sagrados en que los wixárica realizan su peregrinación anual son territorios de campesinos mestizos y que sin su solidaridad activa, o cuando menos su neutralidad y anuencia, la lucha netamente identitaria de los huicholes se hubiera debilitado.

Pese a la complicidad del gobierno con las mineras, el que más de la mitad del territorio mexicano sea de propiedad social y que la Constitución y algunas leyes la protejan, es sin duda un inconveniente para las corporaciones. Un obstáculo que en 2013 los diputados del PRI se aprestaban a remover modificando la Ley de expropiación y otros ordenamientos, con el fin de que “los proyectos no sean afectados severamente por la constante imposición de litigios en contra de los procedimientos de expropiación”, según

---

30 Eckart Boege, “Minería: el despojo de los indígenas de sus territorios en el siglo XXI”, *La Jornada del Campo* n. 69, 15/06/ 13.

reza un dictamen que para diciembre de ese año ya estaba listo, que por el momento detuvieron algunos diputados de la oposición<sup>31</sup>. Sin embargo la lógica de facilitar las privatizaciones se volvió a imponer en 2014 a través de las leyes reglamentarias de la reforma energética constitucional, normas secundarias que establecen lo que ahora se llama, siguiendo el modelo colombiano, “servidumbre de hidrocarburos y de electricidad”, por la cual si un núcleo agrario cuyas tierras son requeridas para un emprendimiento energético no llega a un acuerdo con el demandante en un plazo perentorio, un juez puede obligarlo a vender al precio que fija la empresa interesada, con lo que se pasa por encima del derecho agrario establecido en el artículo 27 constitucional.

La expansión de la minería y en particular de la aurífera, ha sido favorecida por sistemas que permiten extraer el metal de formaciones con muy baja concentración. Baste señalar que para obtener una onza de oro (31 gramos) se producen en promedio 80 toneladas de desechos sólidos. Para eso se hacen enormes tajos a cielo abierto (*open pit mining*) que pueden tener más de mil 500 metros de diámetro y hasta mil de profundidad, en los que se remueven millones de metros cúbicos de tierra que procesada en patios de lixiviación o flotación, arroja pequeñísimas cantidades del metal

---

31 Víctor Ballinas y Andrea Becerril, “Se planea cambiar la ley expropiatoria en favor de trasnacionales: Camacho Solís”, La Jornada 5/12/13.

dorado. La operación de una mina de este tipo, que emplea miles de toneladas de explosivos y millones de litros de agua, deja como saldo grandes cráteres de enorme diámetro y cientos de metros de profundidad, así como depósitos de residuos tóxicos llamados “petateras” o “jales” que con frecuencia generan derrames o filtraciones de compuestos azufrados, ácido sulfúrico, cianuro, arsénico y metales pesados<sup>32</sup>. Esto ocurrió en 2012, en la reserva de la biósfera de la Sierra de Manatlán, donde se rompió la cortina contenedora de los residuos tóxicos de la mina Peña Colorada, ocasionando un desastre ecológico, y ocurrió de nuevo en agosto de 2014 cuando la minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, propiedad de Germán Larrea, derramó 40 millones de litros de agua contaminada con arsénico, cadmio, cromo, mercurio y cobre en los cauces de los ríos Bananuchi y Sonora.

El asunto del agua empleada en la lixiviación es particularmente sensible, pues muchas minas están en zonas semiáridas o desérticas y para operar necesitan ingentes cantidades del vital líquido que dejan altamente contaminado. Así, por ejemplo, para extraer una tonelada de cobre se emplean en promedio 80 mil litros de agua y más aún para obtener pequeñas cantidades de oro. La minera Mazapil, de Zacatecas emplea 95 millones de litros diarios de agua, la San Xavier, en San Luis Potosí, 32 millones diarios, y así.

Ésta última, la San Xavier, dramatiza la perversa transición tecnológica hacia procedimientos cada

vez más geocidas, así como la creciente resistencia que esto genera.

San Pedro era pueblo minero desde 1592 cuando a San Luis se le puso Potosí, en referencia al pasmoso Potosí boliviano. Y lo fue hasta 1994 en que la American Smelting and Refining Company dio por terminada la extracción, despidiendo a miles de trabajadores. Por décadas la comunidad sobrevivió con una población muy mermada, hasta que en 1995 se les acercó la minera canadiense Metallica Resources ofreciendo reanudar la explotación y generar empleo. Al principio la perspectiva sedujo a los sanpedreños, pero luego descubrieron que con los nuevos sistemas a cielo abierto iba a desaparecer el emblemático cerro de San Pedro, que incluso figura en el escudo de San Luis Potosí, y que por las explosiones resultarían dañados el pueblo y su templo del siglo XVII. Y la gente dijo que no. En 1997 se organizó en San Pedro el Frente Amplio Opositor a la mina San Xavier, iniciándose una larga batalla política y legal, que finalmente ganaron los vecinos al conseguir un fallo judicial a favor de la suspensión. Por desgracia para entonces su entrañable cerro ya había desaparecido<sup>33</sup>.

Las 64 pedreras, casi todas proveedoras de Cemex, que están acabando a grandes mordiscos con las montañas de los alrededores de Monterrey y amenazan la reserva ecológica Sierra de Picachos, son combatidas por el Comité Ecológico pro Bienestar y también

33 Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO)/Rema, "Cerro de

por la Asociación Ecológica de la Sierra de Picachos, impulsada por el empresario Alfonso Barragán, dueño de gran parte de las tierras de la reserva, en lo que es un ejemplo no excepcional de cómo la defensa de la naturaleza puede hacer coincidir a personas y grupos sociales habitualmente distantes y contrapuestos<sup>34</sup>.

En esto de aceptar la minería, la gente está pensándolo dos veces y poco a poco va cambiando de idea. Durante la colonia y después, numerosos grupos de indios y mestizos fueron arrastrados a socavones y sometidos a una explotación feroz. A eso no se acostumbra nadie pero con el tiempo, de grado o por fuerza, muchos se volvieron mineros y hasta adecuaron su imaginario colectivo a la nueva condición.

Los pueblos originarios saben que abajo está el inframundo, el lugar de los muertos: Mixtlán, para los aztecas, Xibalbá, para los mayas. Sin embargo después de la conquista los nuevos amos se dijeron dueños del subsuelo, impulsando — donde los había — la extracción de metales preciosos. Y en el pensamiento de las comunidades autóctonas vueltas mineras los viejos dioses de abajo dejaron provisionalmente su lugar a nuevas deidades.

A Capulalpan, Oaxaca, la explotación del oro y la plata llegó en el siglo XVIII, y pronto los indios que trabajaban en el socavón descubrieron que el nuevo

San Pedro: breve reseña de sus luchas”, en *La Jornada del Campo*, 20/4/13.

34 Sanjuana Martínez. “Pedreras tienen a Monterrey “en la cima” de la contaminación”, *La Jornada*, 11/8/13.

dios del inframundo era El Catrín<sup>35</sup>, quien a cambio de bonanza exigía sacrificios humanos en forma de accidentes fatales. Sin embargo, escribe Salvador Aquino que recogió la historia, la mudanza de representaciones no fue completa pues

mientras que en el imaginario de los obreros el subsuelo pertenecía a El Catrín, el territorio, el lugar donde llevaban a cabo su vida cotidiana, pertenecía a otra dimensión. A lo largo del territorio de Capulalpan existen sitios sagrados, lugares de peticiones de lluvia, sitios donde generaciones de comuneros han trabajado dando tequios, lugares de cultivo, sitios antiguos de la memoria de la fundación de la comunidad<sup>36</sup>.

En los últimos años, exploraciones de Asarco, Continuum Resources Sundance y otras mineras concluyeron que, empleando procedimientos novedosos, en Capulalpan aún hay oro y plata que extraer. Pero los comuneros ya lo pensaron mejor y en noviembre de 2012 decidieron en asamblea que no aceptaban la explotación de minerales en su territorio. Después de 200 años de dominio, los tiempos del El Catrín terminaron: Salvador Aquino escuchó decir a los vecinos

---

35 Sobre El Catrín ver Alicia M. Barabas (coordinadora), *Diálogos con el territorio. Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México*, INAH, 2003, p. 19.

36 Salvador Aquino, "La leyenda de El Catrín. No a la extracción de oro y plata, sí a la vida", *La Jornada del Campo*, n 67 20/4713

que en el subsuelo ya no reina más el dios de los mineros sino San Mateo, patrón de los capulquenses. Rectificación con la que quizá no se restaura del todo pero sí se remienda un poco el desgarrado imaginario que dejaron en los indios formas particularmente cruentas de sometimiento colonial como fue, y es, la minería.

En México la mayor parte del territorio pertenece formalmente a comunidades agrarias. Lo que vale para la superficie donde —como acabamos de ver en el caso de Capulalpan— la gente aun ejerce un dominio laboral, habitacional y simbólico. Pero no vale para el subsuelo, que es propiedad de la nación representada por el Estado. De modo que el destino de lo que está abajo no lo deciden las comunidades sino el gobierno en turno, que es quien valora las solicitudes —o los embutes— y otorga los permisos tanto de exploración como de explotación. Sin embargo, para operar una mina hay que ocupar también la superficie y las explotaciones a cielo abierto llegan a emplear miles de hectáreas, de modo que las mineras tienen igualmente que negociar con los dueños de la tierra.

Adicionalmente los pueblos indígenas pueden usar como recurso jurídico su derecho a la consulta y consentimiento previo, garantías que les reconocen tanto la Constitución como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este derecho lo pueden ejercer frente a las autoridades administrativas y si no encuentran respuesta satisfactoria

pueden llevarlo a los tribunales, que ocasionalmente fallan a su favor. Pero esto no es suficiente, pues el gobierno alega que al no existir una Ley reglamentaria el derecho no es aplicable, es decir que lo principal no impera porque falta lo secundario<sup>37</sup>.

A veces lo que se demanda es sólo un pago por el uso del suelo y una compensación por las afectaciones. Tal es el caso de la empresa canadiense Goldcorp, que desde 2009 tiene en Zacatecas la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina, con dos tajos abiertos, el mayor de los cuales es un cráter con un perímetro de 3.5 kilómetros y una profundidad de 450 metros que pronto se incrementará hasta 600. Para abrir Peñasquito, que así se llama, la empresa ocupó más de 5 mil hectáreas propiedad de los ejidatarios de El Vergel, Cedros, Mazapil y Cerro Gordo, y para procesar las 550 mil toneladas de tierra que diariamente remueve, emplea millones de litros de agua extraídos de pozos que afectan la capacidad de riego de los agricultores. Fue necesario que el 17 de junio de 2013 los afectados, representados por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, tomaran la mina, para que Goldcorp aceptara entregar 50 millones de pesos al ejido El Vergel por las mil hectáreas que le ocupó durante cuatro años, y se comprometiera a que, a partir de 2014, pagará un millón de dólares al año

---

37 Ver Francisco López Bárcenas y Mayra Eslava. "El mineral o la vida. La legislación minera en México", Coapi, México, 2011, y Francisco López Bárcenas. "El derecho de los indígenas a la consulta y las políticas de gobierno", La Jornada 1/10/13.

por el derecho a ocupar las tierras y aguas necesarias para la mina<sup>38</sup>.

Sin embargo éste es un caso extraordinario, por lo general las mineras entregan cantidades ínfimas a los dueños de la tierra. Así la mencionada Goldcorp transfería el 2.6% de su ingreso a las comunidades guerrerenses afectadas por la mina Filo Bermejil, y antes de la movilización de 2013 entregaba a los ejidatarios zacatecanos del entorno de Peñasquito apenas el 0.065% de lo que la gigantesca mina le dejaba<sup>39</sup>. En cuanto a los derechos que las mineras pagan al Estado por los permisos de exploración, son igualmente simbólicos: \$500 por hectárea cuando la concesión es de entre 100 y 500 hectáreas, mil quinientos pesos cuando es mayor, y nada cuando es menor.

Pero además es frecuente que las compensaciones acordadas no se concreten. En 2013 ejidatarios de San Luis Potosí bloquearon la carretera a la mina La Pila porque la empresa Logistics Park, que la explota, negoció con ellos la entrega de 30 millones de pesos por concepto de derecho de paso, dinero que nunca pagó. Esta lucha es buen ejemplo de cómo las resistencias territoriales prohíjan amplios frentes regionales, pues la apoyan la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); el Comité Cívi-

---

38 Alfredo Valadez, "Goldcorp indemnizará con \$50 millones a ejidatarios zacatecanos", *La Jornada* 32, 31/7/13.

39 Carlos Rodríguez Wallenius, "Ganancias extraordinarias de la minería en México", *La Jornada del Campo* n. 67, 20/4/13.

co Potosino, agrupación de larga data; y el Comité de Movimientos Alianza Popular<sup>40</sup>.

Tampoco a los campesinos de Potrero de Cancio, en Sinaloa, les cumple la minera Paradox Global Resources que desde 2006 extrae hierro en sus tierras. Y es que pese a haber sacado 350 mil toneladas de mineral, los 5 millones de dólares convenidos nunca se pagaron ni tampoco se llevó a cabo la prometida introducción de servicios públicos en el pueblo. Por estas razones en agosto de 2013 los ejidatarios bloquearon durante 15 días el acceso a la mina<sup>41</sup>. Saldo de la medida de presión fue una acción policiaca que dejó 30 detenidos de los cuales, para 2014, todavía permanecían en la cárcel 17.

Hay ocasiones en que los afectados no negocian pagos o compensaciones sino que de plano reniegan de las minas, como los wixárika. Entonces se generan choques fuertes y a veces cruentos.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, integrada por campesinos indígenas y mestizos de siete municipios de la región Costa-Montaña, de Guerrero, se enfrenta a la minera británica Hochschild Mining, en particular resisten los *me'phaa* de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso, a quienes les afectaría sus lugares sagrados. Mientras tanto las comunidades de Mezcala, Carrizalillo

40 Vicente Juárez, "Ejidatarios de La Pila bloquean vía en San Luis Potosí", *La Jornada*, 28/9/13.

41 Javier Valdez, "Investigan presuntas anomalías en la detención de 27 labriegos que bloqueaban mina en Choix", *La Jornada*, 28/9/13

y Xochiapa, también de Guerrero, se confrontan con Goldcorp. Las razones del movimiento las expone Agapito Cantú Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel: “Vivimos de la agricultura. No somos como otros pueblos que se van a otros lugares a trabajar. Eso quisiera el gobierno. Que les dejáramos el espacio (...) para los empresarios mineros. Decidimos pelear”<sup>42</sup>.

La gente de Zimapán, Hidalgo, lucha contra la Carrizal Mining. La Coordinadora de Pueblos Unidos de Ocotlán, Oaxaca, batalla contra la Fortuna Silver. En Chicomuselo, Chiapas, la bronca es con la Blackfire, en el ejido La griega, de Chicomuselo, y en el mismo municipio, pero en el ejido Monte Sinaí, el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz García”, se enfrenta a la minera Montecristo 114. En Morelos el Movimiento de Pueblos y Ciudadanía Unida, repudia a la Esperanza Silver. Ejidatarios de La Sierrita, en Durango, van contra la minera Exellon Resources. En Veracruz hay un movimiento contra la minera Caballo Blanco.

En Puebla, donde se han otorgado 90 concesiones mineras que amenazan a la población de 31 municipios, los habitantes de Tetela de Ocampo apoyados por contingentes solidarios de otros estados, clausuraron una mina de Frisco, que opera ahí desde 2009 y en 2012 empezó a construir instalaciones para una

---

42 Gloria Leticia Díaz, “San Miguel el Progreso. Rebelión antiminera”, *Proceso* n 1935, 1/12/13.

explotación a cielo abierto. El movimiento, encabezado por el grupo que se hace llamar Tetela hacia el futuro, es buen ejemplo de que las luchas territoriales localizadas van induciendo convergencias nacionales, pues congregó a cinco mil personas, unos provenientes de la Sierra Norte de Puebla pero otros venidos de Veracruz y hasta de Chiapas<sup>43</sup>.

No todo es resistencia, siempre hay algunos que ven en la llegada de las grandes empresas la posibilidad de recibir un pago por su tierra o de conseguir empleo. Esto no sólo por las presiones y los cantos de sirena a los que éstas recurren: algunas mineras contratan sociólogos y antropólogos para identificar a los actores locales y convencerlos de la bondad de sus proyectos, también por lo luidos que están los tejidos comunitarios del mundo rural. Vivir de la agricultura es hoy un milagro, de modo que ya son pocos los que creen que las viejas estrategias campesinas les servirán para salir adelante y hay veces que los proyectos externos en vez de reforzar las solidaridades comunitarias fracturan a los pueblos.

En muchos casos las mineras negocian con las comunidades dueñas de la tierra un pago por el uso de la superficie, pero esto puede crear problemas aún mayores. En Aquila, Michoacán, desde hace un cuarto de siglo un grupo de mineras extraen hierro de Las Encinas, primero fue Hylsamex y desde 2005 la ita-

---

43 Javier Puga, "Habitantes de Tetela, Puebla, clausuran mina de Frisco", *La Jornada* 20/9/13.

lo-argentina Ternium. Los terrenos bajo los cuales se desarrollan los trabajos son comunales, pues en 1980 les fueron reconocidas 20 mil 654 hectáreas a 344 poseedores ancestrales de origen nahua. Y desde 2000 habían negociado que Hilsamex entregara mil pesos anuales a cada comunero. La empresa no cumplió y tampoco Ternium. En 2003 un grupo encabezado por José Ramírez Verduzco reclamó, pero ese mismo año el líder fue asesinado. En 2004 se movilizaron de nuevo los dueños de la tierra, hasta que debido al cohecho de 40 comuneros por la minera, la demanda de desactivó. En 2011, después de imponer un paro de tres meses en la mina Las Encinas, acción que la policía federal fracasó en dismantelar por la fuerza, Ternium se vio obligada a acordar un pago a la comunidad 3.8 dólares por tonelada extraída. La empresa incumplió el compromiso, pero en cambio sí divulgó la falsedad de que cada derechooso recibía 18 mil pesos mensuales de regalías, dando lugar a que el cártel de narcotraficantes conocido como Los Caballeros Templarios empezara a exigir un pago de dos mil pesos mensuales o más a cada uno de los comuneros. “¡Pagan o se mueren!” les dijo el capo local Federico González Medina, conocido como *El Lico*<sup>44</sup>. La enseñanza es que la negociación del pago de regalías es un proceso tortuoso, que por lo general las empresas no cumplen lo acordado, que con frecuencia la ambición divide a los

44 Napoleón Gómez Urrutia, “En Aquila: empresa minera que alienta el conflicto social”, *La Jornada*, 22/8/13. Ver también Patricia Dávila, Michoacán: “Los nahuas de Aquila atacados desde todos los frentes”, en *Proceso*, n. 1962,

grupos y que en tiempos del *narco* el movimiento de dinero, o la presunción de que lo hay, resulta un rumor extremadamente peligroso.

Finalmente a mediados de 2013 un grupo de comuneros decidió armarse para resistir las exacciones de los delincuentes, mientras otros que se sentían amenazados por la fuerza de autodefensa, abandonaban la comunidad. En agosto de 2013 rondaban por Aquila decenas de hombres pertrechados y encapuchados y había un centenar de personas desplazadas por amenazas de muerte. El 14 de ese mes policías y militares detuvieron y desarmaron a 45 personas de las cuales, según la propia comunidad, 40 son auténticos autodefensas y cinco son Templarios. Al día siguiente los comuneros secuestraron a un contingente de cien soldados como medida de presión para negociar la excarcelación de los detenidos<sup>45</sup>. El 20 de agosto un millar de policías estatales irrumpió en la comunidad, ocupó los lugares públicos, amenazó y golpeó a los que resistían y asesinó a los autodefensas Salvador Ramos y Jacinto Alejandro Martínez. En noviembre, tres funcionarios de la empresa comunal que opera 12 tractocamiones que dan servicio a la mina, fueron secuestrados y dos meses después no habían aparecido<sup>46</sup>. En enero de 2014 se formó en Aquila una nueva

08/06/14. Los datos que sobre este caso aportan las diferentes fuentes no siempre coinciden, pues se trata de información obtenida en entrevistas.

45 Ernesto Martínez Elorriaga, "Niegan éxodo por la violencia en Aquila", *La Jornada*, 9/8/13, y "En Aquila nos armamos contra el crimen organizado", *La Jornada*, 16/8/13.

46 Ernesto Martínez Elorriaga, "No hay rastro aún de tres funcionarios

defensa comunitaria armada a la que una parte del pueblo no reconoce<sup>47</sup>. Cuando escribo esto, en julio de 2014, el conflicto sigue.

La minera canadiense Esperanza Silver quiere explotar a cielo abierto el oro y la plata que contiene el cerro El Jumil, que está a tiro de piedra del monumento arqueológico de Xochicalco y en una zona en parte boscosa y en parte agrícola que sería devastada. El Movimiento Morelense en contra de las Concesiones Mineras de Metales Preciosos se opone, sin embargo la comunidad de Tetlama está dividida y la mayoría es favorable al proyecto. Los argumentos de quienes dicen en sus pancartas “Sí a la mina”, son reveladores de lo mucho que se ha desgastado la esperanza en ciertas localidades: de lo triste y raído de las utopías que les quedan. Y es que una mina que arrasaría 700 hectáreas de campos agrícolas, desmontaría 170 hectáreas de selva y ensuciaría diariamente 760 mil metros cúbicos de agua, les parece aceptable porque “nos ofrecen un pozo de agua, y eso el gobierno nunca lo ha hecho”, su argumento mayor es: “¿Qué prefieres, 500 mineros o 500 delincuentes?”, y su respuesta a quienes alertan contra las sustancias tóxicas empleadas en la lixiviación es “el cianuro no mata”<sup>48</sup>.

A veces la minería no agrede directamente a las comunidades sino al medio ambiente. La Reserva

---

de Aquila levantados el 25 de noviembre”, *La Jornada* 8/12/13.

47 Patricia Dávila, Michoacán, “Los nahuas de Aquila atacados desde todos los frentes”, en *Proceso* n. 1962, 8/6/14.

48 Angélica Enciso, “Minera canadiense en busca de oro y plata pone en riesgo la zona de Xochicalco”, *La Jornada*, 6/8/13.

de la biósfera El Triunfo, ubicada en la Sierra Madre de Chiapas, es de lo poco que nos queda de bosque de niebla y cobija a una enorme diversidad biológica, incluyendo especies endémicas como el pavón cornudo. Pero el valioso reservorio está amenazado por 7 concesiones mineras que piensan extraer titanio, oro, cobre y barita, cinco de las cuales: – Las golondrinas, Los cacaos, Titán, La libertad y Cristina –, están a menos de dos kilómetros de donde empieza la zona núcleo. Contra las concesiones se movilizan los ambientalistas de la Alianza Sierra Madre de Chiapas<sup>49</sup>.

La resistencia a la extracción agresiva de minerales amenaza intereses extremadamente poderosos. Empresas que se enriquecen a tasas impensables en otros negocios, que sólo se obtienen en actividades rentistas como la minería y la especulación financiera. Dos casos mexicanos sirven de ejemplo: según la revista *Forbes*, entre 2006 y 2012, Germán Larrea, rey del cobre, incrementó su fortuna de mil millones de dólares a 16 mil 700 millones, y Alberto Baillers, rey de la plata, pasó de tener dos mil 800 millones de dólares a 18 mil 200, el primero con un crecimiento de 1,750%, y el segundo de 550%<sup>50</sup>. ¿Dónde quedó para ellos la “tendencia decreciente de la tasa de ganancia”?

Pero la resistencia de los afectados no sólo pone en peligro una fuente de enriquecimiento desme-

---

49 Moisés Zúñiga Santiago, “Mineras ponen en peligro bosque de niebla en Chiapas”, *La Jornada* 30/9/13.

50 Carlos Fernández-Vega, “México SA”, *La Jornada* 27/12/13.

surada, en última instancia cuestiona un modelo de desarrollo y un modo de producir. Así las cosas, los asesinatos de luchadores se han multiplicado, como es frecuente en movimientos que ponen en riesgo negocios de miles de millones de dólares pero también los dogmas de fe de la modernidad. En la larga historia de resistencia a la minera Tierra Colorada han caído 35 compañeros y en 2013 desaparecieron tres. En Chiapas asesinaron al líder Mariano Abarca, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que luchaba contra la canadiense Blackfire, un crimen que la fundación Otros Mundos Chiapas, atribuye a la minera y del que hace cómplice a la embajada de Canadá<sup>51</sup>. En Oaxaca dieron muerte a Bernardo Vázquez Sánchez, que se metió con la Fortuna Silver. En mayo de 2014 fue asesinado Ramón Corrales Vega, que en 2013 encabezara el bloqueo a la mina Paradox, en Sinaloa, y que vivía escondido desde que a resultas de esa acción 30 de sus compañeros fueron encarcelados<sup>52</sup>. Y así.

La otra cara de la moneda es una solidaridad cada vez más extensa, como la que se expresa en la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, éste último agrupa a medio centenar de organizaciones de México, pero también de Honduras, Costa Rica, República del Salvador, Panamá y Estados Unidos.

51       Ciro Pérez, "La embajada de Canadá 'cómplice' en asesinato de luchador social chiapaneco", *La Jornada*, 22/8/13.

52       Javier Valdez Cárdenas, "Matan a líder campesino, opositor a la minera Paradox en Sinaloa", *La Jornada* 25/5/14.

Las formaciones regionales cuyos territorios y recursos amenazan la minería son casi siempre complejas y de composición socioeconómica diferenciada. Pero los grandes proyectos afectan de una u otra forma a todos sus integrantes provocando sorprendentes reacomodos en los alineamientos sociales.

Habitualmente las empresas y el gobierno hacen ofertas de empleo y desarrollo buscando convencer a los más frágiles de que el proyecto es benéfico. Y en ocasiones lo consiguen, dividiendo el frente interno del ejido, la comunidad o la región. En compensación a veces sucede que también los acomodados o aun los ricos locales se sienten amenazados y buscan sumarse a la resistencia, si no es que ellos mismos la encabezan, generando acciones colectivas como las que el boliviano Luis Tapia, pensando en los que despliegan los pueblos originarios, ha llamado movimientos societales<sup>53</sup>, pues en ellos convergen en toda su diversidad sociedades regionales enteras. Colectividades que en este caso están conformadas por sectores habitualmente divergentes y hasta contrapuestos. Ya mencioné lo ocurrido en la reserva de Sierra de Pichachos, en Nuevo León, y en la mina La Pila, en San Luis Potosí, pero hay otros ejemplos.

En Baja California Sur, la mina Paredones Amarillos, de la Vista Gould, autorizada por el gobierno

---

53 Luis Tapia Mallea, "Lo político y lo democrático en los movimientos sociales", en Luis Tapia (coordinador), *Democracia y teoría política en movimiento*, CIDES-UMSA, La Paz, 2009, p. 117.

desde 1997, amenaza con 67 millones de kilogramos de arsénico el área protegida Sierra La Laguna. Debido a las protestas de la población, en 2010 la Semarnat canceló el proyecto, pero la empresa le cambió el nombre y reanudó el trámite ahora como Minera Concordia, y cuando se la volvieron a rechazar se asoció con el grupo Invecture, y rebautizó el proyecto como Los Cardones... Pese al travestismo empresarial, la oposición ciudadana se mantiene, integrada por pobladores de los municipios de La Paz y Los Cabos, que en 2009 crearon el Frente Medioambiente y Sociedad del que forman parte ciudadanos de a pie pero también asociaciones de médicos, de abogados, de ingenieros y numerosos empresarios, sobre todo del sector turístico. Participan igualmente los combativos maestros de la sección democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), compartiendo trincheras con los trajeados socios del Club de Leones<sup>54</sup>.

En la Sierra Norte de Puebla las amenazas empresariales son recurrentes y también las grandes convergencias para resistirlas. Las más recientes iniciaron a fines de 2012 cuando el Consejo Tiyat Tlali convocó a un foro en Amatlán para informar de la existencia de un gran plan regional que incluye 22 proyectos mineros servidos por seis obras hidroeléctricas diseñadas para proporcionarles agua y energía, además de la construcción de varias de las llamadas Ciudades Rurales donde se concentraría la población

presuntamente desplazada. Específicamente empresas como JDC Minerales, de nacionalidad china, que con una concesión que le fue otorgada en 2012 amenaza ya la integridad de Tlamanca, en el municipio de Zautla. Dos meses después del Foro, en diciembre de ese año, alrededor de 6 mil personas provenientes de 32 comunidades se concentraron en Tlamanca para marchar a las instalaciones de la mina a la que dieron 24 horas para salir<sup>55</sup>. En este caso la palanca inmediata del repudio popular a la minera fue un sentimiento cuestionable pero, a la postre, eficaz: la animadversión de orden racista a las personas de origen chino que la empresa llevó para que realizaran labores de prospección.

La activación popular rápida y potente que encontramos en la Sierra Norte no se explicaría si en la región no hubiera experiencias previas de resistencia a amenazas externas, como el movimiento local que impidió la instalación de una tienda departamental de Walmart en Cuetzalan y el que evitó que Televisa registrara y comercializara las fiestas tradicionales dedicadas a San Miguel Arcángel. La más importante hasta ahora ha sido la que protagonizó la Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad (Cordesi), organización que surge en 2008 para enfrentar un proyecto de "Turismo de naturaleza", diseñado por la Universidad Anáhuac e impulsado desde 2007 por la

---

55

Rosa Herminia Guadalupe Goveia y Rafael Revilla, "Proyectos de muerte en la Sierra Norte", *La Jornada del Campo* n. 67, 20/4/13

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI) y la delegación poblana de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Según el documento que lo justifica, la intención es formular “una propuesta que venda la naturaleza, el paisaje de los hombres y las tradiciones de la historia...”<sup>56</sup>

El proyecto, que abarca 11 municipios serranos con población nahua, totonaca y mestiza, incluye el desarrollo de infraestructura turística y la edificación de una gran Ciudad Rural en el llano, cerca de Libres, pero sobre todo supone el cambio de uso del suelo y el cambio de propiedad sobre la tierra. En esta tesitura la CDI comenzó a inducir la compra para fines turísticos de terrenos con manantiales y caídas de agua ubicados en el valioso ecosistema llamado bosque de niebla.

Y los masehuales y coyomes de la sierra se alzaron. No sólo se pusieron en pie de lucha añejas y experimentadas organizaciones campesindias como la Cooperativa Tosepan Titataniske, Cadem y Masehual Sihuamej; también lo hicieron los comités municipales del agua, diversas empresas asociativas de servicios y numerosos empresarios turísticos que veían amenazado su negocio, entre ellos los hijos de algunos de los caciques regionales más connotados. Sorpresas que da la vida.

La Cordesi diseñó un proyecto alternativo, que llamaron Turismo con identidad, y que, siendo plu-

---

56 Mayolo Hernández, *Buena vida Territorialidad y turismo en la Sierra Norte de Puebla*, tesis en curso, Maestría en Desarrollo Rural, UAM-X.

riétnico y multclasista, asumía la indianidad regional como eje aglutinador de los tan diversos. En Cuetzalan, epicentro del movimiento, el cabildo abierto del municipio aprobó en 2010 la realización de un Ordenamiento Ecológico Territorial, ejercicio participativo que además de confeccionar un útil documento técnico sirvió para ir conformando un nuevo y polifónico sujeto regional y para construir un espacio compartido que en verdad va más allá de las delimitaciones administrativas o agroecológicas<sup>57</sup>.

### *Tierra quebrada*

La exploración y extracción de hidrocarburos por Petróleos Mexicanos es una práctica en extremo agresiva tanto con el medio natural como con los pueblos agrícolas, ganaderos o pesqueros. Por ello ha sido confrontada una y otra vez por comunidades rurales agraviadas por derrames y explosiones, en acciones colectivas que buscan impedir los trabajos, o cuando menos, que la empresa responsable del daño lo compense debidamente.

A fines del siglo pasado los tabasqueños rurales afectados por Pemex se alzaron repetidamente

---

57 Alejandra Meza Velarde, "Estado y capital, amenazas para Cuetzalan", *La Jornada del Campo* n. 40 15/1/11, de la misma autora "Defensa del territorio: masehuales y coyemes de Cuetzalan", *La Jornada del Campo* n. 44 21/5/11, y Masehuales y coyemes de Cuetzalan. Respuesta social: construcción de procesos de defensa del territorio, en Carlos Rodríguez Walenius y Ramses Arturo Cruz Arenas (coordinadores) *El México bárbaro del siglo XXI*, UAM-X, México, 2014, p. 169-183.

contra la paraestatal y hoy otros se aprestan a resistir. Tal es el caso del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CDHHSO), que desde 2006 previene contra el Proyecto Aceite Terciario del Golfo, que se desarrollaría sobre mil 800 kilómetros cuadrados del paleocanal de Chicontepec, afectando a 16 municipios de Puebla y Veracruz<sup>58</sup>. Actualmente la exploración y explotación de hidrocarburos se practica en 300 municipios de 12 estados, lo que representa alrededor de 400 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, y si avanza la explotación del gas y el aceite no convencionales la afectación será aún mayor.

La extracción de los hidrocarburos clásicos está llegando a su límite y en México se agotaron los grandes campos petroleros como Cantarell, que desde los ochenta del pasado siglo y por 30 años fue la mayor palanca de la economía nacional. La alternativa, dicen algunos, es el gas-aceite *shale* que se obtiene por fractura hidráulica o *fracking*, de formaciones rocosas porosas llamadas lutitas. Para 2014 Estados Unidos había excavado por este sistema unos 70 mil pozos y, con la reforma constitucional sobre temas de energía que permite en nuestro país la explotación privada de los hidrocarburos, se piensa que para 2016 las corporaciones habrán perforado en México entre 10 mil y 20 mil pozos, para acceder a los cinco millones de metros cúbicos de gas *shale*, cifra que se supone es la de

---

58 Mauricio González, "Ponerle límite a la extracción petrolera", *La Jornada del Campo* n 44, 21/5/11.

nuestras reservas. Y ésta es una nueva colosal amenaza para los territorios comunitarios, porque el sistema de extracción por quebrantamiento del suelo rocoso es soezmente agresivo.

El *slickwater hydraulic fracturing*, conocido familiarmente como *fracking*, es un método que mediante la inyección de agua, arena y otras sustancias en piedras porosas conocidas como esquistos bituminosos o lutitas, permite extraer gas llamado *shale* y eventualmente petróleo, aunque con rendimientos técnico económicos muy inferiores al de los hidrocarburos convencionales.

El petróleo fácil brota por sí mismo de los pozos y sólo al disminuir la presión hay que inyectar hidrógeno o agua para que salga el resto. Naturalmente éste fue el primero que se explotó y desde los sesenta del pasado siglo la producción creció a 8% anual, sin embargo a mediados de los setenta se hizo más lenta y para el fin de siglo se estancó. Así el crudo que se cotizaba en 25 dólares el barril, rebasó los 100 y se ha mantenido fluctuando alrededor de esa cifra. De esta manera se volvieron rentables los pozos submarinos a gran profundidad y la obtención de gas por fractura hidráulica.

Alguien pudiera pensar que lo importante es que haya hidrocarburos, donde quiera que ellos estén. Pero lo cierto es que en términos energéticos el milagro petrolero que hizo posible al capitalismo moderno ha terminado. En los años 30 del pasado siglo

el petróleo que se obtenía en Texas multiplicaba por 100 la cantidad de energía empleada en sacarlo, en los 70 ya sólo se multiplicaba por 15 y hoy la quema de los hidrocarburos no convencionales apenas triplica la cantidad de energía necesaria para extraerlos.

Así en 80 años el precio del petróleo se disparó, al tiempo que se desplomaba su eficiencia energética. Eso sin contar con la multiplicación de los impactos socio ambientales negativos que conlleva su extracción.

Veamos más de cerca el caso del gas *shale*, un providencial milagro según los optimistas. En el *fracking* la distancia entre pozo y pozo es en promedio de alrededor de un kilómetro y sólo el 20% de los explorados es aprovechable. Además de que su producción declina entre el 30 y el 50% anual, de modo que se abandonan en menos de 4 años. En cada pozo se inyectan unos 30 millones de litros de agua y cerca de 300 mil litros de químicos. Parte de estos tóxicos, que mezclados con el líquido regresan a la boca del pozo, se depositan en grandes tinajas —frecuentemente con filtraciones— en espera de que se les trate. Limpieza que resulta difícil debido a la agresividad de las sustancias que contienen, por lo que en ocasiones simplemente se encapsulan inyectándolas en el suelo. Cada pozo es alimentado de agua por unos tres mil viajes realizados por pipas con capacidad para 10 mil litros cada una. Además de que para conducir el gas se necesitan ductos. Así, las áreas donde se practica

el *fracking* están llenas de tinas con agua de retorno y cruzadas por una maraña de caminos y tuberías.

Pero lo peor ocurre bajo la tierra. “Todo mundo en la industria sabe que las perforaciones de gas contaminan el agua subterránea”, dice el inversionista petrolero James Northrup. Y es que el agua inyectada a 70 atmósferas de depresión rompe frecuentemente la cobertura de cemento de los pozos, mientras que las fracturas de los esquistos se extienden también a los mantos freáticos. Así, por una u otra vía, los tóxicos inyectados, los metales pesados del subsuelo y los hidrocarburos que se liberan de su prisión rocosa envenenan las aguas profundas. Pero igualmente llegan a los pueblos y las tierras de siembra y pastoreo de la superficie. Además de que gran parte del gas *shale* se escapa a la atmósfera y recordemos que se trata de metano cuyo efecto invernadero es 20 veces mayor que el del bióxido de carbono. Por si fuera poco está probado que la fractura hidráulica de rocas bituminosas produce temblores de tierra<sup>59</sup>. ¡Un verdadero milagro energético!

La buena noticia es que al parecer el *fracking* no es rentable. “La industria sufre una deuda enorme, mientras los ingresos continúan siendo desalentadores”, dice la agencia Bloomberg<sup>60</sup>. Y lo cierto es que la

---

59 Sobre *fracking* ver Luca Ferrari. “Pico del petróleo convencional y costos del petróleo, no convencional (*fracking*)”, en Benjamín López Montoya (coordinador) *Impacto social y ambiental del fracking*, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México, 2014, p. 23-39.

60 <http://www.bloomberg.com/news/2014-05-26>.

producción estadounidense de gas *shale* que había crecido mucho entre 2004 y 2008, se estancó después por causa del precio. La mala noticia es que las fracturas hidráulicas continuarán si no hacemos algo por detenerlas, pues la real astringencia energética alimenta los movimientos especulativos del capital financiero, que gana invirtiendo en tierras con presunto potencial gasífero, se exploten o no.

Si las metas que se han anunciado para México se cumplieran, en dos años tendríamos en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, unos 20 mil kilómetros cuadrados –cerca del 1% de la superficie del país– transformados en zona de guerra: altamente contaminados, sacudidos por temblores de tierra y cubiertos por estrecha retícula de caminos, gasoductos, depósitos de gas, plantas de conversión y tinas con venenosas aguas de retorno. Sólo para los colosales requerimientos hídricos de estos pozos haría falta que una inmensa flotilla de miles de pipas con capacidad de 10 mil litros cada una realizara 60 millones de viajes.

Para enfrentar la amenaza de la fractura hidráulica, un grupo de ciudadanos integró la Alianza Mexicana contra el Fracking, de la que forman parte asociaciones civiles como Greenpeace, El poder del consumidor, Grupo de Estudios Ambientales y la Red Mexicana de Acción por el Agua.

## *Aguas capturadas*

En el recorrido por el despojo minero, por las luchas a las que da cobertura la Red Mexicana de Afectados por la Minería y por la amenaza de la que alerta la Alianza Mexicana Contra el Fracking, llegamos al tema del agua y las hidroeléctricas; presas que sirven a los fines del negocio minero pero también a otros intereses.

Los grandes embalses que durante el pasado siglo se multiplicaron en todo el mundo, generan gases de efecto invernadero: el 18% del total de dióxido de carbono lanzado a la atmósfera y 104 millones de toneladas de metano que como dijimos es aún más nocivo. Pese a ello, los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio le dan respaldo internacional a la generación de energía hidroeléctrica, porque efectivamente es menos contaminante que la que se genera quemando hidrocarburos. Y en México se multiplican los proyectos para edificar grandes presas. Igual que prolifera la lucha contra ellas por parte los pueblos que se ubican en la zona del embalse de modo que serían inundados, y de quienes están en las cuencas que se verían severamente alteradas al bloquearse el curso de las aguas.

No sólo los proyectos de nuevas presas son una amenaza, también lo son las ya existentes. Según la Auditoría Superior de la Federación, de las más de cinco mil presas y bordos que hay en el país al menos

115 representan riesgo pues tienen fallas por simple antigüedad o por falta de mantenimiento; y de éstas, 57 están en nivel de alerta. A esto hay que añadir el manejo irresponsable de los desfuegos, que con frecuencia se contienen para no generar por cuenta propia una energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe, por ley, comprar cara a los generadores privados.

Hay en el mundo cerca de mil millones de personas sin acceso al agua potable, pero con frecuencia la forma de hacérselas llegar es más dañina que la propia sed. A Guadalajara, capital de Jalisco, le hace falta más agua, y para procurársela se planeó levantar la presa Arcediano, sobre el Río Santiago. Casi todos los pobladores de lo que sería el embalse fueron obligados a salir, menos doña Lupita Lara que, como el escribiente Bartleby, de Herman Melville, dijo que no, que ella no se iba. Y no se fue. Por fortuna la obra fue cancelada cuando se descubrió que el Santiago es un río muy contaminado y sus aguas no son potables. En la rectificación influyó la presión ejercida por el Frente Amplio en Defensa del Agua y contra la Privatización, constituido en Jalisco en 2012. También en ese estado, la oposición organizada en el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, logró que un juez ordenara suspender la construcción de la presa El Zapotillo que, entre otros, inundaría el pueblo de Temacapulín, fundado en el siglo VI por los tecuexes.

La oposición a las presas por los que fueron o iban a ser desplazados debido a los embalses, tiene historia. En Oaxaca se recuerda la resistencia a la Presa Cerro de Oro y en La Montaña de Guerrero, la lucha contra la que se iba a hacer en San Juan Tetelcingo y que a principios de los ochenta del siglo pasado movilizó en su contra a 22 comunidades integradas para el efecto en el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas. Gracias a tres multitudinarias marchas de La Montaña a la Ciudad de México, la formulación de un Plan alternativo de desarrollo regional y la exitosa apelación al Banco Mundial que iba a financiar parte de la obra, esta amplia convergencia indígena logró detener el proyecto. En 1991 la organización nahua impulsó la creación del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, que tres años después sería uno de los primeros en apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)<sup>61</sup>.

Regresando al presente, los huicholes y coras de San Luis Potosí se resisten a los grandes embalses que los amenazan, pues la presa Las Cruces sobre el Río San Pedro-Mezquital, que planea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afectaría tierras de cinco municipios entre ellas sitios sagrados de los wixárika<sup>62</sup>.

En Oaxaca otras etnias originarias, los mixtecos y los chatinos, se organizaron en el Consejo de Pueblos

61 Armando Bartra (Coordinador), *Crónicas del Sur. Utopías campesinas en Guerrero*, Editorial ERA, México 2000, p. 52, 53.

62 Juan García, "Rechazo al proyecto Las Cruces", *La Jornada del Campo*, n. 57, 23/6/12.

Unidos en Defensa del Río Verde (Copudever), para detener las presas Ixtayutla y Paso de la Reina. Claridosas, como siempre, las mujeres del Consejo dicen:

La desviación del cauce natural del río afectaría toda forma de vida en la cuenca. La pérdida de tierras atentaría contra la vida, pues en ellas habitamos, de ellas comemos, ahí están nuestros antepasados y nuestros lugares sagrados<sup>63</sup>.

Otros pueblos que habitan, trabajan y tienen a sus muertos en lugares amenazados por presas, son los que afectarían los 112 proyectos que la CFE ha diseñado para Veracruz, entre ellos Zongolica, sobre el Río Apatlahuaya; Jalcomulco, sobre el Río Pescados-La Antigua; Tlapacoyan y Atzalan, sobre el Río Bobos-Nautla. En el mismo estado, la hidroeléctrica El Naranjal, sobre los ríos Blanco y Metlac, requeriría un canal de 22 kilómetros a cielo abierto y afectaría a pobladores de cinco municipios, que para impedirlo formaron el colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, que desde 2011 tiene frenada la obra<sup>64</sup>.

De entre estas amenazas destaca la defensa de sus aguas que están haciendo los pueblos ribereños del río La Antigua, que se verían afectados por una represa que planea el gobierno del estado en asociación

63 Citado en Ana María García Arreola, "Lucha contra la Presa Paso de la Reina y por la autonomía", *La Jornada del Campo*, n. 57, 23/6/12.

64 Gabriela Sainz, "La hidroeléctrica El Naranjal", *La Jornada del Campo*, n. 57, 23/6/12.

con la trasnacional brasileña Odebrecht Participacoes e Investimentos, y que almacenaría 135 millones de litros destinados a la ciudad de Xalapa a la que llegarían por bombeo. El proyecto fue aprobado por el Congreso del estado en 2013, pero se oponen a él el Comité de Pueblos Unidos Contra las Presas, el Movimiento en Defensa contra la Presa de Jalcomulco, la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados, así como el movimiento Pueblos Unidos en Defensa de La Antigua.

El 14 de marzo de 2014, unos ocho mil habitantes de siete municipios veracruzanos marcharon a la capital, Xalapa, al ritmo de tambores y trompetas, disfrazados como botargas y portando globos verdes y azules en una acción airada pero festiva a la que llamaron Carnaval Vida Agua y Alegría. En una de las mantas del campamento que instalaron en la congregación de Tuzamapan se lee: "Disculpen las molestias, estamos salvando la vida". Dice uno de los activistas:

Aquí nadie se ha rajado. Nos estamos jugando nuestro patrimonio, la vivienda, el trabajo por el cultivo de limones en las áreas verdes cercanas al río y la pesca, así como la seguridad en tiempos de lluvias<sup>65</sup>.

El 13 de marzo la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del río Los Pescados sentó un precedente jurídico

---

65 Noé Zavaleta "Comuneros de Veracruz frenan al 'Goliath brasileño'", *Proceso* n. 1956, 27/4/14.

co al presentar en el juzgado una demanda de acción colectiva por “acción de obra peligrosa”, en la que se exige suspender el ingreso de maquinaria y parar los trabajos de construcción de la presa Jalcomulco.

En 2014 se creó en el mismo estado la convergencia llamada La Asamblea Veracruzana de Inicativas y Defensa Ambiental (Lavida) que, entre otras afectaciones se opone a las grandes hidroeléctricas.

La presa Pilares, a construirse sobre el río Mayo en el municipio sonoreense de Álamos y que afectaría tierras patrimoniales de los guarijíos, está siendo resistida por una parte de los mil 200 miembros de esta etnia, pues de hacerse quedaría bajo el agua Mesa Colorada, cabecera de la comunidad donde están sus panteones y se celebran anualmente sus ritos. El embalse afectaría igualmente a particulares y ejidatarios de Topiyeca, Chorijoa y Sejaqu, con los que el gobierno del estado ya negoció. También lo hizo con algunos líderes de la tribu, a los que ofreció menos de cinco millones de pesos por las casi mil hectáreas que les serían afectadas, pero la mayor parte de la etnia no reconoce el acuerdo<sup>66</sup>.

La presa Las Cruces, a construirse en el municipio de Ruiz, al norte de Nayarit, anegaría pueblos, afectaría la pesca riverense e inundaría 11 sitios sagrados de coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros, por ello se opone a la obra el Consejo Intercomunita-

---

66 Ulises Gutiérrez Ruelas, “Pagó Padrés 50 centavos por metro cuadrado a ejidatarios por tierras para presa”, *La Jornada* 2/10/13.

rio por un Río Libre, apoyado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y por investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit<sup>67</sup>.

No sólo los indios, también los mestizos son afectados por las grandes represas y se rebelan contra su construcción. Miles de agricultores de los municipios de Rosales, Julimes, Delicias, Meoqui, San Francisco de Conchos y Saucillo, en Chihuahua, formaron un frente contra la cortina de La Boca, que se alza en el río Conchos, pues dejaría sin agua las presas de La Boquilla y Las Vírgenes, de las que depende el riego que les permite cultivar.

Decir La Parota es recordar una lucha larga, difícil y hasta ahora exitosa. En 2003 el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, expulsa del sitio a la CFE, que había emprendido la construcción la hidroeléctrica sin consultar a los posibles afectados. La Comisión soborna y divide a las comunidades y en 2005 asesinan a Tomás Cruz Zamora, que se oponía al proyecto; en 2006 matan a Eduardo Maya Manrique, por la misma razón; y en 2007 ejecutan a Benito Cruz Jacinto. Con todo, el Consejo resiste y escala el conflicto buscando solidaridad nacional e internacional y apelando a organismos multilaterales como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Diez años después la obra estaba deteni-

---

67 Myriam Navarro, "Presa Las Cruces afectará pesca y 11 sitios sagrados, advierten pobladores", *La Jornada* 23/02/14.

da<sup>68</sup>. Sin embargo hasta ahora los esfuerzos de quienes pararon la presa, por generar en la cuenca preservada un desarrollo rural alternativo que le dé sentido estratégico a la lucha, reteniendo a la gente en la región, no ha tenido el mismo éxito. Lo que nos habla de la gran capacidad de convocatoria que tienen las resistencias y de lo difícil que es hacerlas proactivas<sup>69</sup>.

Con todo, el balance de la oposición a las grandes presas es positivo. Cuando escribo esto están paradas en Guerrero, La Parota y San Juan Tetelcingo; en Oaxaca, Paso de la Reina; en Nayarit, La Cruces; en Chiapas, Itzantún y Chinin; en Veracruz, El Naranjal. Se sigue resistiendo en las chiapanecas Boca de Monte-Tenosique, y Chicoasén II-Copainalá, en la Bicentenario y la Pilares, de Sonora, así como en El Zapotillo, de Jalisco. Y hay también presas terminadas, como Picachos, en Sinaloa, que fue inaugurada en 2009, pero donde algunas de las 800 familias que fueron desplazadas, siguen protestando<sup>70</sup>. Matiza el optimismo el que los triunfos en tribunales logrados por las comunidades, con frecuencia no son respetados y pese a la suspensión decretada por un juez, las obras siguen. Tal es el caso de la presa El Zapotillo,

---

68 CECOP; "Oposición a la Presa La Parota. Nueve años de resistencia ejemplar", *La Jornada del Campo*, n 57, 23/6/12.

69 Alejandra Toscana Aparicio y Javier Delgado Campos, "Escala y conflicto social. El caso de la hidroeléctrica la Parota, Guerrero", en Carlos Rodríguez Walenius y Ramses Arturo Cruz Arenas (coordinadores), *El México bárbaro del siglo XXI*, UAM-X, 2014, p. 219-245.

70 Scott S. Robinson, "Megaproyectos: presas, minas y demás", *La Jornada del Campo*, n 57, 23/6/12.

de Jalisco, que debía estar parada, pues como vimos el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarajo ha ganado media docena de juicios de nulidad y amparos y tres suspensiones provisionales vigentes, y sin embargo en 2014 la obra seguía su curso<sup>71</sup>.

Resultado moderadamente alentador que no hubiera sido posible sin convergencias como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. La red, que hoy tiene grupos en 17 estados, se formó en 2003 y desde entonces organiza encuentros anuales. El de 2013, realizado en Jalapa, Veracruz, tuvo que lamentar — airadamente — el asesinato por lapidación, de Salomón Vázquez Ortiz, integrante de la organización local Defensa Verde: Naturaleza Verde y opositor al proyecto hidroeléctrico El Naranjal y Bandera Blanca, en la región de Zongolica.

También ha mejorado la correlación de fuerzas a favor del movimiento, la participación en espacios internacionales como los Foros Mundiales del Agua.

Cierro la sección represas del apartado sobre la defensa del agua, con un testimonio: la crónica del encuentro realizado el 30 y 31 de agosto de 2014, en la comunidad de Olintla, Puebla, relato en primera persona que busca transmitir algo del ánimo y la textura vital de estos movimientos.

Éramos un chingo; un *zontli*, hubiera dicho Aldegundo, joven y sabio nahuatlato de Cuetzalan que iba al

---

71 Francisco López Bárcenas, "Autoritarismo gubernamental y judicialización de los derechos", *La Jornada*, 12/6/14.

volante de la camioneta que nos llevó a Olintla, comunidad otomí de la sierra nororiental de Puebla, donde las redes en lucha contra las presas y en defensa de los ríos realizaban una nueva reunión internacional. Encuentro latinoamericano de las resistencias por el que esta vez se dejaron caer unas 400 personas: en la numeración vigesimal de los nahuas veinte veintes, cifra significativa cuyo signo es *zontli*: una cabellera ciertamente tan poblada como nuestra nutrida convención.

Por el camino, además de contarme que en la escuela de la Cooperativa Tosepan Titataniske a los niños de primaria y secundaria no sólo se les enseña el náhuatl junto con el castellano, sino también el sistema vigesimal de por acá junto con el decimal que impuso occidente, Aldegundo me explica que en su cultura los lugares no se ubican geográficamente en relación con los cuatro puntos cardinales. Para nosotros, dice, valen el Este y el Oeste, es decir los rumbos por los que sale y se mete el sol, pero en lugar del Norte y el Sur la otra referencia es arriba y abajo, pues el mundo se divide en niveles. Y recorriendo los escarpados caminos de la sierra uno tiene que convenir en que les asiste la razón.

Pero los de Olintla no son nahuas sino orgulloosamente totonacos. Y el municipio cobró notoriedad porque fue ahí donde por primera vez en la región la gente detuvo la maquinaria que iba a iniciar los trabajos de una gran presa hidroeléctrica que, además de inundar tierras de labor, descompondría la cuenca

y sería punta de lanza de las empresas mineras que ya pusieron el ojo en el Totonacapan. La amenaza era de por sí grave, pero como es habitual en estos casos a ella se sumó el agravio, pues el camino que iban a hacer las máquinas, los del pueblo llevaban años de solicitarlo inútilmente a las autoridades, mismas que lo autorizaron de inmediato en cuanto lo requirió la hidroeléctrica.

El precursor movimiento de los de Olintla fue decisivo, me dice Leonardo, quien como parte de la Tosepan ha estado cerca del proceso. Y es que los comuneros de la localidad le pusieron el cascabel al gato y después de su acción exitosa los totonacos, nahuas y mestizos de la sierra concluyeron que si la población de un municipio pequeño y aislado pudo parar a las constructoras, ¿a poco los demás no iban a poder? En cambio si las máquinas hubieran pasado en Olintla, éste podría haber sido el hilo por el que se iría toda la madeja y quizá hoy los megaproyectos serían dueños de la región.

El hecho es que la resistencia cundió en la sierra poblana. Como lo testimonia la numerosa presencia de gente local en un encuentro internacional donde también hay representantes de toda la República y de otros países latinoamericanos como Guatemala, Argentina y Brasil.

Olintla es pueblo chico, la gente es pobre y los congregados somos muchos, pero la generosidad de las comunidades es proverbial y en el deportivo don-

de comemos hay tamales, mixiotes y café para todos. Además seguramente el Señor del Gran Trueno, el Dueño del Monte o algún otro dios totonaco intercedió por nosotros y el clima es benévolo; pese a que en la sierra de por sí diluvia y estamos en agosto, este fin de semana no llovió, de modo que la enorme lona amarilla tendida a un costado de la plaza sólo protege de los rayos del sol al *zontli* de participantes que ahí nos arracimamos.

La gran lona cobija a los defensores de los ríos pero también — me dicen los que son de ahí — a unos cuantos personeros de los caciquillos locales que merodean atentos a lo que se habla y posiblemente abrumados por lo nutrido de la concurrencia. Y es que los que se sentían dueños de las tierras y de la gente se están quedando solos.

Aquí, como en muchos otros municipios donde los lugareños no se enteraron de las reformas políticas de las últimas décadas, sólo hay dos partidos: PRI y PAN. Y el alcalde que dio luz verde a la presa era del PAN, de modo que el de ahora que — es del PRI — se tuvo que alinear con los opositores y, aunque no está presente en la inauguración del evento manda un saludo con un propio. Hasta los adherentes a una organización priista tan poco recomendable como Antorcha Campesina, que tiene presencia en la comunidad, en lo tocante a este tema se han mantenido neutrales. Y es que por estos rumbos los vientos de la resistencia soplan con fuerza y el costo de confrontarlos es muy alto.

Como siempre en los encuentros convocados por redes temáticas, la banda oenegenera se dejó caer por Olintla con su vendimia de folletos, DVDs y artesanías con cuyas ventas se ayudan para completar lo del viaje. Sin embargo en las intervenciones — que un preñidísimo serrano bilingüe traduce al totonaco o al castellano, según sea la lengua que emplea el orador — domina con mucho el discurso de los locales y en particular de las mujeres: una, en totonaco, dice que hay que resistir a los megaproyectos, pero también a los programas gubernamentales clientelares como Oportunidades, ahora Prospera; otra, en castellano, nos cuenta que hace unos años su esposo se enfrentó a los caciques y la familia tuvo que salir del pueblo, pero ahora ella está de regreso y dispuesta a continuar la lucha. Y es que en la defensa de los territorios las mujeres van por delante.

La gente de por acá hace milpa para comer y en las huertas que generan ingresos monetarios tiene café, pimienta, plátano y otros frutales, productos que en muchos casos hay que sacar a lomo de bestia. Los arrieros, cuyas interminables recuas de mulas cruzan el pueblo, nos recuerdan lo escarpado del lugar en que nos encontramos. Y nos recuerdan también que estamos en el México profundo, que el Totonacapan y la zona náhuatl de las sierras norte y nororiente de Puebla son mundos rurales de hondas raíces, sociedades fuertemente cohesivas donde el entrevero de indígenas y mestizos que resultó de una historia difícil se resiste con todo a ceder sus espacios vitales.

Pero no todas las afectaciones hídricas son por presas. Otras amenazas penden también sobre el agua dulce, que es privatizada de muchas maneras y por diferentes actores. Uno de ellos, la Nestle Waters, que desde 2010 tiene una concesión para explotar los manantiales del eje neovolcánico transversal y específicamente los que se originan en el Iztaccíhuatl. A la usurpación del líquido por la trasnacional se ha opuesto el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire. Convergencia que también rechaza la construcción de un gasoducto y un par de termoeléctricas, que afectarían poblaciones de Puebla, Tlaxcala y Morelos.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), conformado en el Estado de México por los habitantes de San Salvador Atenco, es emblema de resistencia territorial, y en los años recientes su lucha se ha tenido que enfrentar a la Comisión Nacional del Agua y a presiones tramposas sobre los recursos hídricos de los que dependen los cultivos de sus integrantes.

En 2006 el Subcomandante Marcos, del EZLN, llamó al Frente de los atenguenses “el Séptimo de caballería”, porque siempre cabalgaba en defensa de los pueblos que eran acosados, no por apaches sino por megaproyectos y privatizaciones. Y efectivamente, el FPDT ha colaborado decisivamente en hacer de movimientos reactivos y localizados, una extensa red nacional de solidaridades.

En 2003 el Frente había logrado que se derogara un decreto presidencial de 2001 por el que cin-

co mil 400 hectáreas pertenecientes a 13 ejidos de los municipios de Texcoco y Atenco, serían expropiadas para construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras el sonado triunfo, la organización se mantuvo activa respaldando otras luchas e impulsando proyectos de desarrollo en el Valle de Texcoco, por lo que permaneció en la mira tanto del gobierno federal como del estatal, cuyas intenciones había frustrado. En 2006 el FPDT sufrió una feroz agresión por parte de la fuerza pública y la mayor parte de su directiva fue encarcelada. Ya recuperaron su libertad, pero ahora la amenaza viene por parte de la Comisión Nacional del Agua que, amparándose en un proyecto de Zona de Mitigación y Rescate Ecológico, promueve una plena titulación de las parcelas ejidales que facilite su enajenación a favor de empresas como Alter Consultores, que trabaja para la española OHL Concesiones.

El 1 de septiembre de 2014 en su segundo Informe de Gobierno, el Presidente Peña Nieto confirmó lo que muchos suponíamos: la actual administración piensa revivir el viejo plan suspendido hace 14 años, de construir en Texcoco un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México<sup>72</sup>, pero ahora asociado a un gran proyecto de habitación, comercio, turismo y recreación llamado Ciudad Futura, al que pretenden disfrazar con el ropaje del rescate ambiental. Para vencer la resistencia que hace tres lustros los obligó a recular,

---

72 Mayra Terrones, "Atenco sigue en pie", *La Jornada del Campo* n 44, 21/5/11.

los promotores del megaproyecto se han empeñado en dividir al ejido de San Salvador Atenco, que fuera matriz de la resistencia, clausurando los pozos de riego de los que depende la agricultura local, comprando terrenos a los derechosos de convicciones más frágiles e infiltrando en la región a Antorcha Campesina, una organización de corte gangsteril y triste memoria, alguna vez independiente pero que ahora milita en las filas del PRI. El 7 de junio de 2014, en una amañada asamblea ejidal a la que no dejaron entrar a los opositores, el grupo de ejidatarios vinculado al gobierno logró que en 15 minutos y sin debate acordara pasar sus tierras al “pleno dominio”, con lo que ahora pueden ser vendidas sin más trámite<sup>73</sup>. Todo indica que el procedimiento es un anticipo de lo que nos espera si el gobierno de Peña Nieto logra la aprobación de una anunciada pero aún no plenamente explicitada “reforma del campo”.

Una lucha más directamente asociada con los recursos hídricos es la de los pequeños y medianos agricultores de Chihuahua organizados en El Barzón y el Frente Campesino Democrático, que reivindican el agua de riego acaparada por los poderosos agricultores menonitas mediante represas no autorizadas y pozos clandestinos. La confrontación ha sido cruenta y ya dejó dos muertos: Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís.

En 2013 el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, concesionó por 25 años el servicio de aguas

del municipio a una empresa privada. A partir del Foro “Agua derecho de todos o negocio de unos cuantos”, ahí realizado, se formó Chiapanec@s en defensa del agua, agrupación que ha presentado un proyecto alternativo basado en la gestión social del vital líquido.

En la Delegación Xochimilco, a las orillas de la Ciudad de México, el pueblo San Lucas Xochimanca posee una presa ancestral construida hace alrededor de 600 años por los antiguos xochimilcas y nahuatlacas. El almacenamiento, que fue rehabilitado en 1945 con trabajo comunitario de los pobladores, guarda unos 600 millones de litros de agua provenientes de los ríos San Lucas y Santiago, y hasta hace poco en él se podía nadar y pescar, además de que era hábitat de fauna endémica. Esto terminó porque desde los ochenta del siglo pasado el río Santiago es vertedero de aguas negras de un penal, el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Por la restauración de la vida en la represa y contra la contaminación, se integró desde 2010 el Comité San Lucas Xochimanca<sup>74</sup>.

En 1540 a. c. Yavé separó las aguas del Mar Rojo para que pasaran Moisés y los israelitas; en 2009 Luis Luege Tamaro, de la Comisión Nacional del Agua, separó las del acuífero del Valle de Vizcaíno para que Germán Larrea y su Grupo México pudieran explotar mil millones de toneladas de cobre. La mina Los Arcos está en Baja California, en la frontera con Baja

---

74 Sandra Plata, “San Lucas Xochimanca por rescatar su presa”, *La Jornada del Campo*, n. 80, 17/5/14.

California Sur, y su problema es que se ubica en pleno desierto y para sacar el metal se ocupan 9.46 millones de metros cúbicos de agua al año, volumen que de ser extraído mataría de sed a los pobladores de Valle de Vizcaíno, a los agricultores y las cooperativas pesqueras. Pero Luege encontró el remedio: sobre el papel y por decreto dividió en dos el acuífero que comparten los estados peninsulares y rebautizó como Llanos de Berrendo a la parte que queda en Baja California, que es donde está la mina. El Comité Técnico de Aguas Subterráneas de Valle de Vizcaíno, que representa a los pobladores, denuncia la colusión del funcionario federal y el Grupo México:

La Conagua convirtió un acuífero interestatal en dos donde, por arte de magia, del paralelo 28 hacia el sur, ya no hay disponibilidad de agua, y del paralelo 28 hacia el norte, hay tal cantidad que la empresa minera puede explotar anualmente 9.66 millones de metros cúbicos, como si los acuíferos fueran divisibles por líneas imaginarias<sup>75</sup>.

Lo cierto es que el paralelo 28 no tiene existencia física y pese al decreto el acuífero es uno, de modo que si la mina comienza a extraer el líquido se los quitará a los habitantes del Valle de Vizcaíno. Sólo que los afectados no se van a dejar. Organizados en torno al Comité han emprendido la resistencia.

75 Carlos Fernández-Vega, "México S A", *La Jornada* 7/7/14.

La mina del grupo México durará 20, tal vez 50 años, pero a nosotros y nuestras generaciones futuras nos desgraciará la vida mucho, pero mucho más tiempo. Los pobladores de Valle de Vizcaíno no dejaremos que esto suceda, vamos a luchar muy duro por nuestro ambiente, nuestra agua, nuestra sobrevivencia, nuestras familias...<sup>76</sup>

A estos movimientos hay que agregar, entre otras, la lucha ya reseñada al principio que sostienen los pueblos yaquis de Sonora contra el Acueducto Independencia, canalización que al trasladar a Hermosillo una alta proporción del líquido reduce sustancialmente el caudal del que dispone la tribu. Y también la que sostienen los mazahuas del Cutzamala contra la Comisión Nacional del Agua y en defensa de sus recursos hídricos hoy usufructuados por la Ciudad de México y su zona metropolitana, lucha a la que me referiré más adelante al abordar el protagonismo femenino en la defensa del territorio.

En defensa del vital líquido se integró la Red Mexicana de Acción por el Agua, que en 2014 impulsaba una campaña nacional “Agua para todos, agua para la vida”, que vincula la defensa del acceso al agua como derecho humano con la defensa de otros recursos naturales y del territorio. La Red promueve, por iniciativa ciudadana, una Ley general de aguas

con enfoque socio-hídrico-ambiental que sustituya a la actual Ley de aguas nacionales, frenando los intentos gubernamentales de imponer una reforma de corte privatizador y extractivista, mediante el habitual albazo legislativo<sup>77</sup>.

### *Tajos carreteros*

Y cuando no son aeropuertos, como el que amenaza de nuevo a los pueblos del valle de Texcoco, son carreteras, como la autopista Silao-San Miguel Allende, en Guanajuato, cuya construcción fue anunciada en 2013 y que dañaría áreas patrimoniales de la etnia ñañú, la zona arqueológica de Cruz del Palmar y la ruta de 100 capillas de indios del siglo XVI, y a la que se opone el Frente pro Patrimonio.

En el Estado de México comuneros de La Concepción Xochicuautla y San Francisco Xochicuautla, organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra, están en contra de la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, que dañaría las áreas naturales protegidas del Parque Otomí-Mazahua y Bosque de Agua.

En Morelos, el Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán, compuesto por algunos de los que hace años evitaron la construcción de un club de golf hídrica-

---

77 Ver el número 80, 17/05/14, de La Jornada del Campo cuyos coeditores fueron Elena Burns y Pedro Moctezuma Barragán del grupo promotor de la campaña Agua para tod@s, Agua para la vida, y cuyo tema es *El buen gobierno del agua ¿Agua pasa por tu casa?*

mente insostenible, resiste la ampliación de la carretera La Pera-Tepoztlán, por la empresa Tradeco. En octubre de 2013 los inconformes lograron que un juez parara la obra en tanto “no se resuelva en definitiva el juicio de amparo, ya que está causando daños irreversibles al equilibrio ecológico, suelos, mantos freáticos, aire, y como consecuencia de ellos se afecta la salud de todos los pobladores de la región”. Ya puestos a hacer, ahora demandan juicio político al gobernador Graco Ramírez, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien a toda costa quiere realizar la obra<sup>78</sup>.

### *Urbanizaciones invasoras*

Las agresivas constructoras de vivienda o de infraestructura turística, también generan oposición. Al proyecto inmobiliario Reserva Santafé, en La Marquesa, Estado de México, se opone la comunidad Atarasquillo, porque barrería con el sitio sagrado otomí Nacelagua. En Morelos, los comuneros de Tejalpa, municipio de Juitepec, rechazan la urbanización de alrededor de 70 hectáreas del Área Natural Protegida El Texal.

En Jalisco, los ejidatarios de José María Morelos, se oponen al megaproyecto turístico Chalacatepec, que se levanta al sur del centro turístico de Puerto

---

78 Rubicela Morelos, “Paran obra de autopista La Pera Tepoztlán”, La Jornada 20/10/13.

Vallarta, en el municipio de Tomatlán, sobre tres mil hectáreas que la Procuraduría Agraria arrebató al núcleo ejidal<sup>79</sup>.

En Rebalsito de Apazulco, en la costa de Jalisco, la Pesquera Ejidal Tenacatitla se resiste a ser desalojada de sus puntos de pesca y de venta, por un proyecto turístico.

Dicen que quieren construir un megadesarrollo tipo Cancún —denuncia una pobladora—. Con campos de golf que van a ocupar las tierras del ejido. Ahí van. Pero a mí no me van a callar con poquito<sup>80</sup>.

La oposición al proyecto de urbanización y desarrollo de infraestructura turística: hoteles, condominios, campo de golf..., sobre dos mil 300 hectáreas de plantación, con el que el Grupo Lazga, de Carlos Lagos Yagües acabaría con la mitad de los prestigiados viñedos de Valle de Guadalupe, en Baja California, es muestra de que la resistencia territorial se extiende a casi todas las clases, pues lo animan los empresarios vitivinicultores integrados en la agrupación Por un Valle de Ver-

---

79 Matilde Pérez, "Procuraduría Agraria otorga ilegalmente 3 mil hectáreas a megaproyecto turístico en Jalisco", *La Jornada* 14/10/13.

80 Aura Helena Ramírez, "Resisten los hombres del mar", *La Jornada del Campo*, n. 44 21/5/11, y "Privatización y despojo de territorios costeros en el estado de Jalisco. La barbarie del turismo en El Rebalsito de Apazulco y la Bahía de Tenacatitla", en Carlos Rodríguez Walenius y Ramses Arturo Cruz Arenas (coordinadores) *El México bárbaro del siglo XXI*, UAM-X, 2014, p. 331-367.

dad, quienes además de movilizarse ya interpusieron un amparo judicial<sup>81</sup>.

En 2012 un proyecto turístico a desarrollarse en Ensenada, Baja California, y llamado Cabo Cortés, fue suspendido, pero en 2014 apareció de nuevo rebautizado como Cabo Pulmo. La intención es construir hoteles con capacidad de unos 22 mil 500 cuartos en la zona colindante con la reserva natural del mismo nombre, que sería irreversiblemente dañada por el mega desarrollo. Al proyecto se opone la fundación Costa Salvaje, encabezada por el famoso luchador... de los encordados conocido como el Hijo del Santo<sup>82</sup>.

Con la acuacultura, la industria contaminante, los puertos y otras amenazas, el gran turismo es un peligroso destructor de manglares, ecosistema del que el país tiene 770 mil hectáreas, de las que sin embargo se pierden anualmente mil 500, de modo que somos el mayor destructor de manglares después de Colombia. La Red Manglar México se ha propuesto defender este prodigioso hábitat de biodiversidad.

La amenaza del gran turismo también pende sobre las comunidades de la región del Xinantécatl o Nevado de Toluca, que por decreto inconsulto pasó de Parque Nacional a Área Natural de Protección de Flora y Fauna. Los pobladores, organizados en el Frente en Defensa del Xinantécatl, sospechan que se trata de reactivar el viejo proyecto de establecer un hostel

81 Nicté Madrigal, "Proyecto inmobiliario amenaza viñedos en Baja California", *La Jornada* 19/10/13.

82 Agencias, "El Hijo del Santo defiende reserva ecológica Cabo Pulmo", *La Jornada* 11/4/14.

alpino y hasta pistas de esquí, emprendimientos incompatibles con la vieja normatividad de los Parques, pero que la de las Áreas Naturales sí permite<sup>83</sup>.

Uno de los procesos de despojo más ofensivos de los años recientes es el intento de privatizar para fines turísticos una isla quintanarroense que forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam y cuyas tierras son ejidales. Los 12 kilómetros de playas de Holbox son ambicionados por el consorcio Península Maya Developments, cuyo proyecto llamado La Ensenada incluye 875 villas y condominios, tres hoteles, área comercial y un puerto. Para echarlo a andar en 2008 el consorcio empezó a comprar lotes a los ejidatarios y con engaños logró que también le cedieran sus derechos agrarios, lo que le permitió inscribir como ejidatarios a un grupo de prestanombres. Con ellos, la complicidad de las autoridades del ramo y el auxilio de la fuerza pública que impidió el paso de los auténticos holboxeños, los empresarios turísticos lograron que una asamblea amañada acordara dividir el ejido en cuatro: Holbox, Península Holbox, Isla Holbox y Punta Holbox, a cuyos presidentes controlan. Sin embargo los ejidatarios originales resisten apoyados, entre otros, por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que teme por el delicado ecosistema de la isla<sup>84</sup>.

---

83 Israel Dávila, "Organizaciones constituyen frente para salvar el Nevado de Toluca", *La Jornada* 9/11/13.

84 Sergio Caballero, "Isla Holbox. Crónica de un despojo," *Proceso* n. 1974, 31/8/14.

En Chiapas primero y después en Puebla se resiste a los desplazamientos que están ocasionando las llamadas Ciudades Rurales Sustentables que, además de diseñadas para liberar a los privatizadores territorios hoy poblados por campesinos, son urbanísticamente topes y recuerdan mucho las reducciones y congregaciones con que, primero las órdenes religiosas y luego el poder virreinal buscaban agrupar a la población autóctona para así controlarla mejor.

### *Los dueños del aire*

Los huaves de San Dionisio del Mar, los zapotecos organizados en la Asamblea Popular de Pueblos de Juchitán y la Asamblea Popular de Álvaro Obregón, convergencias regionales de larga trayectoria como Unión de Comunidades Indígenas de las Zonas Oriente y Norte del Istmo (UCIZONI) y diversos pueblos del Istmo de Tehuantepec, hoy agrupados en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), cuestionan el establecimiento en la región de los grandes molinos generadores de energía eléctrica.

Para 2014 había en el Istmo 20 parques eólicos, tres de la Comisión Federal de Electricidad, donde sólo se generan 187 megavatios, mientras que el resto, que genera dos mil 286 megavatios, está en manos de grandes empresas trasnacionales o mexicanas, corporaciones como Iberdrola, dueña de Parques Ecoló-

gicos de México, en La Ventosa, y Puerta del Viento, en Espinal, además de la española Gas Natural (antes Unión Fenosa), Mareña Renovables, Gamesa, Eoliatic del Pacífico, Eoliatic del Istmo, EurusAcciona, ACS Dragados, Fuerza del Viento Limpia, Fuerza Eólica de México, Desarrollos Eólicos de México, Proyectos Sureste, entre otras.

Independientemente de que el aire como fuente de energía es mucho menos contaminante que, por ejemplo, las termoeléctricas, el modo en que están implementando los parques eólicos las corporaciones y sus cómplices en el gobierno, atropella a los dueños de las tierras y violenta los derechos de las comunidades sobre sus territorios.

No sólo los huaves y los zapotecos del Istmo de Tehuantepec están siendo agredidos, en el otro extremo del país los 500 integrantes de la tribu Pai Pai que habitan en la parte alta de la sierra de Santa Catarina están en peligro de desaparecer como etnia, pues uno de sus representantes — que no sabe leer — fue engañado para que estampara su huella dactilar en un documento por el que la comunidad cede 62 mil hectáreas para una central de energía eólica. Otro caso es el de la empresa eólica Dragón, que pretende invadir tierras comunales en San Juan Volador, municipio de Pajapan, Veracruz<sup>85</sup>.

En México la generación y distribución de energía eléctrica era, según la Constitución, atribución ex-

---

85 Arturo Rodríguez García, "Las comunidades indígenas en riesgo por los megaproyectos", *Proceso* n 1924, 15/9/13.

clusiva del Estado. Pero las reformas a Leyes secundarias impulsadas en 1992, por el presidente Carlos Salinas, en 1997, por el gobierno de Ernesto Zedillo, en 2008, por la administración de Felipe Calderón, y remachadas constitucionalmente en 2013 y 2014, por la reforma energética privatizadora impulsada por Peña Nieto, autorizaron a particulares generar, la facultad de generar, cogenerar y autoabastecerse, con la garantía de que la Comisión Federal de Electricidad compraría sus “excedentes” de energía. Hoy una tercera parte de la energía eléctrica proviene de empresas privadas y, en lo tocante a la eoloeléctrica, de los alrededor de 2 500 MW que se producían en 2013, cerca de dos mil 300 se originaban en generadores privados, predominantemente extranjeros y ubicados casi todos en el Istmo de Tehuantepec, donde los 20 campos eólicos establecidos afectan una superficie de más de 50 mil hectáreas de tierras que en la mayor parte de los casos son ejidales o comunales. El plan es que para 2030 se generen siete mil MW, el 10% de la producción nacional, mediante cinco mil generadores sobre 150 mil hectáreas de tierras, hoy de propiedad social. El problema para el gobierno y las empresas es que la mayor parte de los comuneros y ejidatarios se oponen al proyecto y sobre todo a la forma inequitativa en que se ha venido imponiendo<sup>86</sup>.

## *Silvicultura predadora*

La defensa de los bosques es un combate de larga data que sigue vigente, y en el arranque de los setenta del siglo pasado la resistencia de las comunidades a los talamontes se hizo más visible. En Oaxaca, la comunidad de Macuiltianguis se venía inconformando desde 1966 con los usos de la empresa paraestatal Fábrica de Papel de Tuxtepec (Fapatux), pero para 1972 se suman a la protesta otros 13 pueblos, que paralizan la sierra Juárez impidiendo que se saque madera de unos bosques que formalmente son suyos pero que las comunidades no están en condiciones técnico-económicas de manejar. Este primer movimiento se debilita, pero un bloqueo posterior y más organizado obliga al gobierno a negociar. La reivindicación de los serranos es que las comunidades indígenas silvícolas dueñas de los bosques puedan aprovecharlos directamente mediante empresas asociativas, pero lo que está en el fondo es la defensa de la tierra y sus recursos, y —en positivo— el concepto de autonomía de base comunitaria, que intelectuales indígenas como Floriberto Hernández, Jaime Luna y Joel Aquino empezaban a rumiar<sup>87</sup>.

También en los setenta de la pasada centuria, se inicia formalmente en la sierra de Guerrero la lucha contra el saqueo de los montes propiedad de las comunidades, en este caso mestizas, que histórica-

---

87 Armando Bartra y Rosario Cobo, *La puerta del viento. Cerro de las flores, área comunitaria protegida*. Conamp, Instituto Maya, 2007 p. 45-47.

mente había corrido cuenta de empresarios rapaces como Melchor Ortega, dueño de Maderas Papanoa, a los que en 1972 se añade una paraestatal, la Forestal Vicente Guerrero, que supuestamente debía enfriarle el agua a la guerrilla del Partido de los Pobres, por entonces beligerante en la zona, absorbiendo y racionalizando el aprovechamiento de los bosques de la entidad, que hasta ese momento realizaban particulares. La empresa descentralizada solapa en realidad a los talamontes, de modo que los ejidos se organizan creando en 1980 la Coordinadora de Ejidos Forestales de la Costa Grande y en 1988 la Unión de Ejidos de Producción Forestal y Agropecuaria, General Vicente Guerrero, que como en otros sectores y otras regiones, buscan que las comunidades dueñas del bosque puedan “apropiarse del proceso productivo” maderero.

En 1995 el gobierno concede a la empresa estadounidense Bois Cascade, el derecho exclusivo de compra y explotación de la madera en la Costa Grande, y la trasnacional contrata con 25 comunidades una arrasadora extracción silvícola que para principios del siglo XI había ocasionado la pérdida de 90 mil hectáreas de bosque, el 40% del total. La respuesta la dan unas cuantas comunidades serranas a través de la Organización de Campesinos Ecologistas de Petatlán y Coyuca de Catalán, fundada en 1998. Combativa agrupación que después de inútiles reclamaciones decide — como antes lo habían hecho los oaxaqueños de la Sierra Juárez — bloquear la salida de madera. El go-

bierno y los caciques responden con represión: mueren asesinados Aniceto Martínez, Elena Barajas y Salomé Ortiz; otros como Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel son torturados por el ejército y encarcelados. Gracias a su lucha, la Bois Cascade sale de la región, pero aún más importante es que la organización serrana ayuda a darle rostro campesino a un movimiento ecologista que, como tal, era protagonizado casi exclusivamente por organizaciones de la llamada “sociedad civil”<sup>88</sup>.

Hoy los músicos son otros pero la tonada es la misma. Desde hace tiempo los talamontes se ensañan con los bosques de Zempoala y Huitzilac, entre los estados de Morelos y de México, las comunidades los protegen y por eso, en 2007, fue asesinado el activista Aldo Zamora. En abril de 2011, los comuneros purépechas de Cherán, Michoacán, emprendieron la defensa de sus bosques y de sus vidas contra organizaciones criminales que combinan el negocio del narcotráfico con el de la extracción de la madera.

Eran entre 150 y 200 camionetas —cuenta Jesús Silva Tomás, del Consejo de Bienes Comunes—. Alcanzaban a sacar dos viajes diarios, pues está relativamente cerca la carretera, cómo dos mil árboles verdes cada día. Y pues veíamos como se devastaba nuestro monte, sobre todo el que le llamamos “El San Miguel”. Me

tocó ver que esos, los talamontes, pasaban por el centro del pueblo aun cuando la calle era de sentido contrario. Pasaban y nadie decía nada. Al contrario, creo que hasta nos agachábamos para no tener problemas. Hasta que la gente se fue hartando. Y más cuando empezaron a derribar cerca del ojón de agua que nosotros conocemos como La Cofradía. Eso fue lo que hizo que nos levantáramos<sup>89</sup>.

Y “nadie decía nada” porque los rapamontes eran parte de “los malos”, “los armados”, “los mañosos”, grupos criminales fuertemente pertrechados que además del tráfico de drogas se apropian de recursos mineros y forestales sobornando y aterrorizando a la población. De ellos me ocuparé más adelante. Por el momento baste decir que, a la postre, los de Cherán no se dejaron. Hartos de esperar que la intervención de la fuerza pública les devolviera la seguridad, pusieron retenes armados a las puertas del pueblo y en las noches encendían fogatas donde los vigilantes velaban. Hoy Cherán es Municipio Autónomo y referente de todos los que resisten desde los territorios y, en mayo de 2014, se anotó un tanto de gran importancia para todas las comunidades indígenas que exigen que se haga valer su derecho a la consulta, cuando la Suprema Corte decidió que la reforma constitucional

89 Entrevista realizada por Mayra Terrones, para proyecto de Tesis de posgrado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

aprobada por el Congreso de Michoacán en marzo de 2012, debía ser anulada, pues no se había recabado el punto de vista de Cherán<sup>90</sup>.

### *Usurpación del territorio jurisdiccional*

La decisión purépecha de autogobernarse nos lleva al movimiento por las autonomías indígenas; un trajín que se traslapa con los de quienes desde los territorios buscan proteger su patrimonio. Defensores que no siempre son indígenas y no en todos los casos tienen proyectos autogestionarios de carácter socioeconómico o político, pero que serían impensables sin el fuerte impulso que la potente emergencia de las reivindicaciones autonómicas de los pueblos originarios —catapultados desde 1994 por la aparición del EZLN— le dieron a las demandas asociadas, si no con la autogestión de los territorios sí (cuando menos), con su defensa.

Dice la leyenda, casi mito fundacional, que en México los pueblos indios se levantaron de entre los “muertos chicos” —condición fúnebre en que los tenía la malhadada acción indigenista— gracias al primer Congreso Indígena Fray Bartolomé de las Casas, realizado en Chiapas en 1974. El hecho es que desde entonces comienza a cobrar visibilidad el activismo de organizaciones étnicas regionales en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz, entre otros estados.

---

90 Jesús Aranda y Ernesto Martínez Elorriaga, “Autoridades indígenas podrán impugnar leyes ante la Corte”, *La Jornada* 28/5/14.

Fuerzas locales que convergen en encuentros regionales y nacionales, y más tarde en el Consejo Mexicano 500 años de Resistencia Indígena y Popular. Pero la eclosión definitiva de los pueblos originarios como actor nacional protagónico ocurre en 1994 cuando, al calor de la efervescencia política creada por el EZLN, surgen la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anipa) y el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Autogobiernos de facto los hay desde 1994 en las regiones chiapanecas zapatistas que reconocen el mando del EZLN y también en las llamadas Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP), que dentro del mismo estado impulsan otras corrientes políticas. Sin embargo la emergencia de lo territorial como sustento del reconocimiento de los derechos autonómicos de los pueblos indios, tendrá que esperar a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, entre el EZLN y el gobierno federal, que incluyen, si bien de manera limitada, ciertas formas de autogobierno. Como es sabido el entonces presidente Ernesto Zedillo desconoció los acuerdos y un lustro después, en 2001, el poder Legislativo aprobó una caricatura de la llamada Ley Cocopa que recogía lo pactado en San Andrés.

Desde entonces el EZLN abandonó toda negociación con el Estado Mexicano y en congruencia CNI decidió replegarse a los territorios e impulsar desde ahí, “desde abajo”, la construcción de las autonomías, con lo cual brotaron por el país algunos municipios autónomos como Rancho Nuevo de la Democracia, en Gue-

rrero, y más tarde el de Cherán, en Michoacán. Pero el hecho es que cuando dejó de pelear el reconocimiento constitucional de los derechos étnicos, el movimiento indígena perdió visibilidad y presencia nacional.

Protagonismo que los pueblos originarios en alguna medida están recuperando, no tanto con la reivindicación de la autonomía en cuanto tal, como por su intenso activismo en la defensa territorial de los bienes comunes<sup>91</sup>. Así, el 17 y 18 de agosto de 2013, en San Cristóbal, Chiapas, se realizó un encuentro del CNI propiciado de nueva cuenta por el EZLN, **reunión nacional de representantes que se repitió con éxito en 2014**. No es seguro que la convergencia de pueblos originarios vaya a recuperar la prestancia que tuvo hasta hace diez años, pero lo cierto es que el tema dominante fueron los cerca de cien conflictos por el territorio y el patrimonio en que están involucradas las comunidades indígenas presentes en las reuniones<sup>92</sup>.

### *Invasión del genoma*

Además del territorio propiamente dicho, la gente defiende ámbitos no geográficos que metafóricamente podemos considerar territoriales. Por ejemplo, el *territorio genético* que erosionan empresas trasnacionales como Monsanto, Syngenta y DuPont al alterarlo a través de bioingeniería y privatizarlo mediante patentes.

91 Armando Bartra, *Los nuevos herederos de Zapata*. CNPA, Circo Maya, PRD, México, 2012, p. 225-236.

92 Gilberto López y Rivas, "La guerra contra los pueblos y sus resistencias", *La Jornada*, 12/9/13, p. 20.

“Nuestros mismos esfuerzos para producir cepas de alta productividad, tienen el efecto de reducir la variabilidad de una especie”, escribió Otto Frankel<sup>93</sup>. Pero eso, que siempre es grave y mucho más cuando el cambio climático mercadogénico hace ver la creciente importancia de la capacidad adaptativa de la diversidad genética, les importa un comino a las trasnacionales. El saldo de su desaprensiva codicia son semillas transgénicas que las grandes corporaciones buscan establecer comercialmente, poniendo en riesgo la diversidad de plantas como el maíz, del que México es territorio de origen.

En términos estrictamente territoriales la amenaza también es enorme pues sólo entre 2012 y 2013, diversos consorcios presentaron 14 solicitudes de autorización para sembrar maíz transgénico sobre cerca de seis millones de hectáreas de las mejores tierras del país en Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa y Baja California Sur. Para 2012 el permiso solicitado era para algo más de un millón 800 mil hectáreas y si consideramos que las semillas transgénicas que se emplearían son las de Monsanto, que se necesitan 80 mil para una hectárea y que cada bolsa de 60 mil cuesta hoy unos tres mil pesos, el ingreso por semillas del proyecto de plantación comercial del transgénico representa para la trasnacional un negocio de

---

93

Citado en Silvia Rodríguez, *El despojo de la riqueza biológica: de patrimonio de la humanidad a recurso bajo soberanía del Estado*, Itaca, México 2012, p 48.

cinco mil millones de pesos anuales a los que hay que agregar el costo del herbicida Roundup, también de Monsanto. La buena noticia es que el 17 de septiembre de 2013 a solicitud de un grupo de ciudadanos y organizaciones que presentó una acción colectiva contra Sagarpa, Semanat y las productoras de semillas, el Juzgado XII del DF dictó una suspensión como medida precautoria, de modo que a mediados de 2014, cuando escribo esto, las autorizaciones de siembra comercial de maíz transgénico habían sido frenadas judicialmente<sup>94</sup>.

“Si se controla el petróleo se controla el país; si se controla la comida se controla la población” dijo Henry Kissinger<sup>95</sup> y a este control corporativo mediante semillas genéticamente alteradas se resisten muchas comunidades, entre ellas el Grupo Vicente Guerrero, de Españita, Tlaxcala, que en 2011 logró que se aprobara en una Ley de Fomento y Protección al Maíz, que dificulta la siembra de transgénicos en ese estado<sup>96</sup>. En la misma línea se mueven convergencias nacionales de agrupaciones sociales, organizaciones civiles y académicos como la Campaña Sin maíz no hay País y la Red en Defensa del Maíz.

---

94 Mathieu Tourliere, “Golpe a Monsanto y sus transgénicos”. Proceso n. 1956, 2774/14.

95 Loc. cit.

96 Lourdes Rudiño, “De facto la Ley de Fomento y Protección al Maíz, de Tlaxcala, frena los transgénicos”, *La Jornada del Campo*, n. 44, 21/5/11.

## *Monopolio electromagnético*

Otro territorio disputado es el del espectro electromagnético, un bien propiedad de la nación que no puede ser empleado para transmisiones sin previa autorización gubernamental, pero que los gobiernos han entregado a los poderosos empresarios dueños de radios y televisoras.

Desde hace décadas las comunidades indígenas han defendido su derecho a ocupar una parte de este espacio, estableciendo numerosas radios comunitarias, unas autorizadas y otras que operan por la libre. Entre ellas la decana Radio Huayacocotla, en la Huasteca; Radio Ñomndaa y La Voz de los Pueblos, de Guerrero; La Voz que Rompe el Silencio y Radio Ikoots, de Oaxaca; La Voz de los Sin Voz, de Chiapas; Radio Xiranhua Kuskua, de Michoacán, entre muchas otras<sup>97</sup>.

En septiembre de 2013 se realizó en Tlahuilotepic, Oaxaca, la segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala, que contó con la participación de dos mil 700 personas, mil 300 de ellas comunicadores de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Panamá, Nicaragua, Uruguay y del país anfitrión. Ahí se reclamó el derecho de los pueblos a franjas del espectro electromagnético, a espacios de satélite y a *software* libre, pero sintomáticamente las demandas no se circuns-

97      Sofía Medellín, "Radios comunitarias alzan la voz contra la exclusión", *La Jornada del Campo*, n. 44, 21/05/11. Sobre el mismo tema ver "Yankuitlajtoli. Palabra nueva", *La Jornada del Campo* n. 72, 21/09/13.

cribieron al territorio comunicacional y a exigir que se considerara “el espectro electromagnético como bien común”, también repelaron contra mineras, petroleras y represas “que atentan contra la integridad de la vida y la espiritualidad de los pueblos”<sup>98</sup>.

### *Minería de datos*

Siendo el internet territorio franco por su accesibilidad y reciprocidad comunicativa, hoy sabemos que también ha sido penetrado por los poderes oscuros. Gracias a Edward Snowden se ha descubierto que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos recolecta información privada en nuestras comunicaciones en línea, de modo que los espacios abiertos de la red están siendo subrepticamente colonizados por el imperio.

“Posiblemente en un futuro – escribe Margaret Atwood – ya no se te permita ser quien crees que eres o siquiera quien pretendes ser, con base en la *minería de datos* obtenidos de tu presencia en línea”<sup>99</sup>.

### *El género y sus territorios*

Las mujeres del campo y la ciudad luchan de manera cada vez más organizada por todos sus derechos: los

98 Rosa Rojas, “Comunicadores indígenas demandan que se reconozca autonomía editorial de los pueblos”, La Jornada 14/10/13.

99 Citado en Naief Yehya, “Los ojos y oídos de nuestros juegos digitales”, La Jornada Semanal, n. 988, 9/02/14

sexuales y reproductivos pero también los económicos, sociales, políticos, ambientales, agrarios, culturales... Las mujeres luchan, en fin, porque el género que les tocó habitar no sea motivo de opresión, de minusvalía, de exclusión, de vergüenza. Porque la histórica maldición que pesa sobre las mujeres tiene que ver con su cuerpo, se monta sobre la biología.

El cuerpo femenino ha sido y es tierra de conquista: territorio invadido, usurpado, colonizado. Les vendaron los pies y el alma para que no pudieran caminar, les impusieron la burka para ocultar sus rostros y sus sentimientos, les extirparon el clítoris y los deseos para negarles el placer. El despojo que las mujeres sufren es —como todos— socioeconómico, político, cultural... pero el suyo es también un despojo psicosomático, un despojo a flor de piel. Entonces las mujeres necesitan defender el territorio último, el territorio más íntimo y entrañable; las mujeres necesitan emancipar y recuperar su cuerpo.

La terca desubicación de las —y los— feministas respecto de los alineamientos ideológicos tradicionales, forzó, a la postre, una afortunada redefinición de los espacios político-sociales por la cual el posicionamiento crítico respecto de la fractura de género devino por fin tan importante como el rechazo de la explotación asalariada y de la dominación colonial. Gracias al feminismo, la de etnia, la de clase y la de género son hoy tres vertientes inseparables de la emancipación humana.

Y en la emancipación de las mujeres es dimensión fundamental la reivindicación del cuerpo como territorio: del cuerpo biológico pero también el que Marx llamaba el “cuerpo inorgánico”, el entorno inmediato construido cotidianamente a través de lo que ahora nombran *cuidado* y que en el campo consiste en el hogar, el traspatio, la huerta, el mercado, la iglesia, el bosque, la cañada, el río, el ojo de agua...; el hábitat con rostro femenino que es el mismo, y no, que el de los varones y que los ámbitos colectivos de las familias, las comunidades y los pueblos, pues el territorio de ellas cuenta historias distintas, guarda secretos que sólo las mujeres conocen, tiene significados en clave de género.

Liberarse del fatalismo del cuerpo pasa también por cuestionar cierto neoindianismo que pretendiendo exaltar el valor de la mujer en verdad la constriñe y encajona. Y es que género no es destino sino campo de posibilidades. Las mujeres no están *hechas* para tener hijos —que es sólo una de sus opciones privativas—, de modo que asimilarlas simbólicamente con la fertilidad y con madre natura es biologicismo y sexismo; reverencial y pachamámico quizá, pero sexismo al fin.

La lucha de las mujeres rurales es un afluente decisivo del movimiento en defensa del territorio; frente reivindicativo en el que destacan el combate a la violencia de género y en particular a la siniestra ola de feminicidios, la exigencia de que se garantice el derecho igual de las

mujeres a la salud y de que se reconozcan sus derechos sexuales y reproductivos, y también lo que se ha llamado el ambientalismo con sesgo femenino.

Siempre estuvieron ahí, pero en 1980, con el Primer Encuentro Nacional de Mujeres, se hicieron más visibles. El protagonismo femenino rural se manifestó poco después, en 1984, gracias al Primer Encuentro de Mujeres Indígenas de Chiapas, al que siguen otros, como el de 1997, en el que participan 700 mujeres de 14 estados y donde se constituye la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Antes habían aparecido otras organizaciones supraestatales como la Coordinadora Interregional Feminista Rural (Comaletzin), la Red Nacional de Asesoras y Promotoras Rurales, la Red Género y Medio Ambiente... En 1994 la difusión por el EZLN de la Ley Revolucionaria de las Mujeres dotó de una plataforma de género al neoindianismo surgido en los noventa del pasado siglo<sup>100</sup>.

Del Río Bravo al Suchiate las mujeres se organizan para defender sus derechos en general y también los de sus territorios y su cuerpo. En Baja California las jornaleras migrantes indígenas formaron *Naxihina xinxe na xihí* (Mujeres en defensa de la mujer) que reivindica cuestiones laborales, pero igualmente una vida libre de violencia; en Guerrero las animadoras de la Casa de Salud de la Mujer, Manos Unidas, enfrentan entre otros el terrible flagelo de la muerte mater-

---

100 Ver Gisela Espinosa y Ana Lau Jaiven (coordinadoras). *Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010*. UAM-X, Itaca, México, 2011.

na; en Oaxaca el Centro para los Derechos de la Mujer *Näaxwiin*, trabaja por erradicar la violencia de género, y lo mismo hace *Ichikahualistli Suhuame* (La fortaleza de las mujeres) en Veracruz, y *Toj D'olal Puksi'lk'aal* (Sanando el corazón) en Yucatán<sup>101</sup>.

Mujeres son las mayores animadoras del Frente para la Defensa de los Derechos Humanos y Recursos Naturales del Pueblo Mazahua, que nace en 2003 a resultas de que el desfogue de la presa Villa Victoria, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, inunda 300 hectáreas de la región mazahua entre el Estado de México y Michoacán. El problema de fondo es que mientras que 500 millones de metros cúbicos de agua son trasvasados de la cuenca del Cutzamala al Valle de México para dar de beber a la metrópoli, los pueblos de ahí tienen sed. En reclamo de equidad hídrica se formó en 2004 un Ejército Zapatista de Mujeres Mazahuas en Defensa del Agua, armado con rifles de madera y encabezado por la comandanta Victoria, que logró forzar una negociación con las autoridades federales.

Los rústicos defienden de por sí los recursos naturales, pero la reivindicación campesina del medio ambiente empleando el término *ecologista*, es poco habitual. Sin embargo, como hemos visto, en 1998 se formó en la Costa Grande de Guerrero la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, para impedir que la trasnacional

---

101 Ver Gloria A. Carmona y Gisela Espinosa. *Vida y milagros de mujeres*, 6 volúmenes, UAM-X, 2013.

Boise Cascade siguiera saqueando el bosque. La depredación se detuvo, pero la organización fue reprimida y sus dirigentes asesinados o encarcelados. En 2002 un grupo de esposas, hermanas, hijas y compañeras de los varones que habían encabezado la organización ambientalista, conforma la Organización de Mujeres Ecologistas del Sierra de Petatlán (OMESP), que cambia el terreno en el que se había dado antes la defensa de la naturaleza, pasando de la violenta confrontación con los talamontes y el gobierno, a un trajín menos visible pero quizá más calador por el que se modifican profundamente las prácticas sociales.

Reforestación, viveros familiares, campañas de limpieza de calles, cañadas y fuentes de agua, separación y reciclamiento de basura, uso de abonos orgánicos, siembra de cercos vivos, veda a la cacería de ciertas especies animales, además de actividades de traspatio orientadas a fortalecer el autoconsumo y el intercambio comunitario de productos y saberes<sup>102</sup>.

Así caracteriza Lorena Paz Paredes, que recogió su experiencia, el sentido del espacio de las mujeres de la OMESSP:

---

102 Hilda Salazar, Rebeca Salazar y Lorena Paz Paredes. "Ambientalismo feminista", en Gisela Espinosa y Ana Lau Jaiven (coordinadoras.) *Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010*. UAM-X, Itaca, México, 2011, p. 333-359.

El territorio de las ecologistas es multidimensional. Abarca desde sus cuerpos y su subjetividad, hasta el entorno que las circunda y que nombran, transforman y rememoran. Desde la naturaleza domesticada con la que comparten las sorpresas cotidianas que les deparan los ciclos agrícolas alterados por el cambio climático, hasta los grandes siniestros y desastres ambientales: incendios, deslaves, crecientes y tormentas tropicales durante los que experimentan la cercanía de la muerte<sup>103</sup>.

Después de que en la Ciudad de México se incorporó a la ley el derecho de las mujeres al aborto durante las primeras 12 semanas del embarazo, en muchos estados del país la derecha está legislando para penarlo cualesquiera que sean las circunstancias de la preñez y con el argumento de “proteger la vida desde la concepción”. A esta regresión se oponen las mujeres organizadas y muchos otros ciudadanos. Pero algunas lo hacen de manera creativa. Así como en el siglo XIX ciertos pueblos que veían sus tierras de propiedad colectiva amenazadas por las leyes y políticas de desamortización de bienes en manos muertas, titulaban sus terrenos como propiedad privada para mantenerlos bajo su dominio. Así, al alba

---

103 Lorena Paz Paredes. *Ambientalismo, género y violencia. La Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero*, tesis de Doctorado en Desarrollo Rural por la UAM-X, 2014. p. 139.

del siglo XXI algunas mujeres que ven expropiado el derecho que tienen sobre sus úteros y vaginas por las leyes que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo, están tramitando ante la autoridad jurisdiccional el registro de sus cuerpos como propiedad privada. A mediados de 2014 unas 50 regiomontanas se apersonaron ante el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, con sendos documentos en los que se lee:

Solicito que sea registrada en este instituto la propiedad de mi cuerpo como parte de mi patrimonio tangible e intangible, del cual soy titular y sobre el que tengo autoridad y soberanía inalienables de acuerdo con las leyes...<sup>104</sup>

### *Narcoterritorios*

Por si los capitales que actúan cobijados por ley no fueran plaga suficiente, en los últimos cinco lustros invadieron hasta los últimos rincones del campo mexicano los capitales que lucran con la prohibición y obtienen rentas de la ilegalidad. En lo que va del siglo los cárteles de la droga irrumpieron masivamente en las comunidades rurales a veces expulsando a la gente de sus territorios, otras forzándola a entregarles dinero y otras más obligándola a trabajar en “el ne-

104 Sergio Ocampo y Erick Muñiz, “Rechazan legalizar el aborto en Guerrero”, *La Jornada*, 10/6/14.

gocio". Y es que en última instancia el crimen organizado hace lo mismo que los capitales convencionales sólo que a mano armada.

México está enfermo de violencia, dolencia que se agravó desde 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón quiso hacer frente a los cárteles de la droga con estrategias de guerra y provocó una interminable masacre que hasta 2012 había dejado más de 70 mil muertos y cerca de 300 mil desplazados, cifra que durante el gobierno de Peña Nieto se siguió incrementando, pues entre diciembre de 2012 y enero de 2014 se registraron alrededor de 21 mil homicidios más. Y si a los caídos en la "guerra contra el crimen organizado" se añaden las víctimas de homicidios dolosos, la cifra aumenta a cerca de 90 mil, lo que significa que en algo más de un lustro los afectados indirectos de este tipo de violencia fueron del orden de 360 mil, entre ellos unas 24 mil viudas y cerca de 50 mil huérfanos<sup>105</sup>. Y esto se expresa en una cruenta batalla por los territorios.

El moderno negocio del narco que en México traslada cocaína sudamericana y produce marihuana, heroína y metanfetaminas, mueve inversiones del orden de los 850 millones de dólares, genera alrededor de 600 mil empleos y controla un 71.5% del territorio nacional<sup>106</sup>. La *Canabis indica*, que es una de las drogas

105 Leticia Ramírez de Alva, "Índice de víctimas visibles e invisibles", citado en Gloria Leticia Díaz, "Las víctimas visibles e invisibles del sexenio", Proceso n. 1857, 3/6/12 p. 18-20.

106 Araceli Mondragón González, "México hoy: ¿Estado de derecho o

que está en su origen, se cultiva y consume por estos rumbos desde fines de la Colonia, pero que aquí se conoce como mota, grifa, mariguana o doña Juanita, no fue por sí misma la que gestó en nuestro país el moderno negocio del narco son factores exógenos los que impulsan aquí el globalizado y capitalista narconegocio, actividad que despegó durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que al obstruir las vías por las que circulaba la droga asiática, el conflicto bélico obliga a producirla en otras regiones. Y sobre todo porque, por esos mismos años, Estados Unidos decide producir en México la materia prima de la morfina que empleaban como anestésico los ejércitos aliados.

Como ahora, una parte de los narcóticos aquí cosechados se destinaba al consumo estadounidense, sólo que hace setenta años se trataba de un consumo legal. Por acuerdo binacional la “adormidera” empezó a cultivarse por el rumbo de Santiago de los Caballeros, a menos de una hora de la cabecera municipal de Badiraguato, Sinaloa, una zona remontada en la que dicho estado colinda con Durango y Chihuahua. Pero sucedió que al término de la guerra muchos de los que se habían enrolado en el cultivo de la amapola se negaron a dejarlo y se insertaron en el mercado ilegal. La región es lo que hoy conocemos como Triángulo Dorado, y los apellidos de las familias que decidieron seguir en el negocio son famosos, pues algunos de sus

---

‘estado de guerra’?”, en Gabriela Contreras Pérez, et. al. (coordinadores). No nos alcanzan las palabras. Sociedad, Estado y Violencia en México, México, UAM-X, Itaca, 2014, p. 43, 44.

descendientes fueron capos del narcotráfico. De ahí son Joaquín, “El Chapo”, Guzmán Loera, nativo de La Tuna; los hermanos Beltrán Leiva, de La Palma; Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, de Huixiopa. Y los históricos Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, de Nuevo Santiago de los Caballeros; Baltazar Díaz “El Balta”, de Bamopa; y los hermanos Emilio y Rafael Caro Quintero, de La Noria.

No es que la tierra, el agua y el clima del Triángulo Dorado hagan malos a sus hijos, es que la demanda estadounidense — primero legal y luego ilegal — los enganchó. Y como trasfondo del nefasto enrolamiento estuvo el conflicto bélico, una guerra mundial atroz que destrozaba los cuerpos y los espíritus de los combatientes haciéndolos depender de las drogas. Estupefacientes hoy satanizados y perseguidos y por tanto más lucrativos. Así, el recóndito Badiraguato devino emblema de las vilezas de la pasada centuria, un siglo ignominioso que no tiene para cuando terminar.

Es sintomático que hoy en México todos tengamos algo aterrador que contar sobre el narco. Yo, por ejemplo, sé de primera mano que cada una de las pequeñas y medianas unidades de transporte de pasajeros que da servicio en el denso corredor semi conurbado que va del DF a Cuautla, Morelos, entrega 30 pesos diarios al cártel de La familia michoacana, por el derecho a circular en su territorio. Los que pagan traen una calcomanía con las letras FM; los que no, están muer-

tos. En esa misma ruta no se puede poner un negocio modesto sin tributar entre 5 y 10 mil pesos mensuales por derecho de piso. Si no lo haces te queman el local o te lo rafaguean. Los que trabajan en el DF y viven en Chalco, Estado de México, cuando se les hace tarde para regresar mejor se duermen en el coche y esperan a que amanezca, porque viajar en la noche es asalto seguro... Y ésta es violencia light.

Estudios recientes sostienen que “regiones enteras de México están controladas por actores no estatales, como son las organizaciones multictriminales (*que*) han mutado de (...) cárteles de la droga a (...) motor de sociedades y economías alternativas”<sup>107</sup>. Esto ha llevado a expertos como John P. Sullivan – vinculado al Departamento de Estado de EU, pero solvente en lo suyo – a sostener que México es un “Estado fracasado” que en muchas zonas ha sido sustituido por un “estado criminal liberado” que ha establecido “soberanías paralelas”. Este mismo autor propone analogías sugerentes entre el orden creado por los cárteles de la droga y la dominación que en otros ámbitos ejercen los “señores de la guerra”, con las relaciones sociales propias del “período del feudalismo”<sup>108</sup>, un sistema cuya reproducción se sostuvo

---

107 Howard Campbell, citado en Marco Appel, “Ante el Estado fallido, narcoestado sustituto”, *Proceso*, n. 1853, 6/5/12.

108 John P. Sullivan, “De las guerras contra las drogas a la insurgencia criminal: los cárteles mexicanos, enclaves e insurgencia criminal en México y Centroamérica y sus implicaciones para la seguridad global”, citado en “La territorialidad de la dominación IV”, Carlos Fazio, *La Jornada*, 26/5/12.

sobre la coacción moral y material y no sobre el mercado y el Estado, aunque los hubiera.

Históricamente convulso y violento es el estado de Guerrero, un territorio desgobernado donde operan más de una docena de corporaciones armadas diferentes, cada una de las cuales dice encontrarse ahí para mantener el orden. Están el Ejército, la Marina, la Policía Federal, los judiciales, la Policía estatal, 75 policías municipales, varios cárteles de la droga, un par de guerrillas a las que a fines de 2013 se sumaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) y diversas autodefensas con varios miles de integrantes armados, entre las más importantes la Policía Comunitaria dependiente del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana que controla la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular.

El entuerto tiene historia. Así lo describe Abel Barreda, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”:

En las siete regiones de Guerrero, la violencia delincinencial se gestó en el seno de las instituciones policiacas y militares, las cuales urdieron negocios ilícitos con el patrocinio de los caciques. Los cuerpos policiales son parte del

entramado de la corrupción y en el caso de la Policía ministerial fue la punta de lanza para la infiltración del *narco* en las estructuras del Estado<sup>109</sup>.

La gente del campo ha tenido que aprender a sobrevivir en el mundo de los cárteles y en primer lugar en la narcoeconomía: según el ex presidente del Tribunal Nacional Agrario, Ricardo García Villalobos —que quizá exagera pero no demasiado— en el 31% de las tierras agrícolas se siembran plantas psicotrópicas y algunos hablan de unos 600 mil jornaleros trabajando esos cultivos<sup>110</sup>. En el campo los niños que llegan a los 12 o 15 años no ingresan a la adolescencia sino a la obsolescencia: ya están en edad de trabajar pero el desfonde productivo del agro los hace inútiles. Entonces se van al “gabacho”, a las ciudades o, de perdida, se enrolan en el *narco* que les ofrece una vida corta pero plena, pues a los sicarios se les respeta, o cuando menos se les teme. Así las cosas, en algunas regiones de Guerrero los proverbiales “hombres de maíz”, se están volviendo “hombres de maíz bola”, que así se conoce en La Montaña a la planta de la amapola.

Pero así como hay inclusión económica, también hay exclusión social y más gente ha sido expul-

---

109 Abel Barreda, “Guerrero bajo el cerco de las armas”, *La Jornada* 10/8/13.

110 Víctor Ronquillo, “La narcoagricultura, cáncer del campo mexicano”, *La Jornada del Campo*, n. 40, 15/1/11.

sada de su comunidad por el *narco* que por todas las presas y las minas juntas.

En julio de 2013, mil 300 personas, entre ellas 217 niños, escaparon de siete comunidades de los municipios guerrerenses de San Miguel Totolapan y Arcelia, para refugiarse en el atrio de la iglesia de San Miguel, en la cabecera de esta última circunscripción. Los desplazados huían de un grupo armado de 200 personas que recorría los pueblos dando tiros, tumbando puertas y quemando casas, al parecer porque algunas comunidades, antes arregladas con un cártel, habían decidido cambiar de bando. “Ahí quedaron mis plantas, mis animalitos, mis tierras; nos vinimos, no pudimos más...” dice don Ismael, de 72 años y hasta el día anterior vecino de El Cubo, municipio de San Miguel Totolapan<sup>111</sup>.

También en el municipio guerrerense de Petatlán, hay desbandada por el *narco*, pero ahí es silenciosa, es hormiga y por tanto no es noticia de ocho columnas. Así lo cuenta María con una elocuencia que ninguna sociología puede superar:

Yo creo que ya no hay comunidades. Sólo hay familias arrimadas, arrinconadas, bocabajeadas y silencias. Gente que ni siquiera puede hablarse, ayudarse. Porque la violencia nos desparta, nos quita hijos, sobrinos... ¿Y entonces?

---

111 Sergio Ocampo Arista, “Los sacó el pánico, nadie murió”: edil. La violencia no pasó a mayores, dice, *La Jornada*, 20/7/13.

¿Cómo vamos a estar unidas las familias, si ya metieron la podredumbre dentro? ¿Si ya pusieron a fuerzas el arma en manos del hijo, si ya le dieron una? Te dicen: “Nomás te callas, si llegan los encapuchados o la camioneta con los armados, baja los ojos y no digas nada, ándate derechita y a la mejor no le pasa nada a tu familia”. Entonces la gente sale, porque tiene miedo de que la maten. No le hace que piérdamos todo. Aunque sea nos queda la vida ¿no?...<sup>112</sup>

En México el Estado de Derecho no impera o impera bajo la forma de su interrupción, que diría Giorgio Agamben<sup>113</sup>. Es la nuestra una sociedad donde no por excepción sino por regla, el orden se preserva o modifica mediante acciones desarrolladas al margen de la Ley, por fuerzas extralegales que sin embargo tienen imperio de ley. Esto incluye la añeja prepotencia caciquil y el terror impuesto por los cárteles del *narco*, pero también la arbitrariedad con que el gobierno emplea tanto su poder burocrático como la fuerza pública, y se extiende igualmente al enriquecimiento ilícito consustancial a la cleptoburguesía mexicana. Prácticas metajurídicas que con frecuencia son violentas, muy violentas.

---

112 Lorena Paz Paredes, “Pueblos fantasmas y comunidades baldías en la sierra”, *La Jornada del Campo*, n. 60, 15/9/12.

113 Giorgio Agamben, *Profanaciones*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2005.

No se trata de anomia y violencia residuales, progresivamente sustituidas por el imperio de la legalidad. Al contrario, la violencia es creciente y en un asunto nodal como el narcotráfico tanto delincuentes como “autoridad” actúan al margen de la Ley, pues ni unos ni otros tratan a sus contrarios como ciudadanos con derechos sino como enemigos a exterminar, lo que resulta patente en el hecho de que cuando hay muertos en un enfrentamiento que se presume fue “entre narcos” ni la policía ni el ministerio público se preocupan por localizar, detener y juzgar a los culpables, al revés, se felicitan porque así hay menos delincuentes que aniquilar. Y si los poderes formales e informales no respetan la ley, la gente — sin necesidad de haber leído a Walter Benjamín<sup>114</sup> — concluye que lo más conveniente es crear su propio estado de excepción, tomando en sus manos la protección de familias, comunidades y territorios. La proliferación en 2012 y 2013 de policías y autodefensas comunitarias armadas, es la expresión más reciente de la reivindicación activa del territorio por parte de los pueblos. Pero el asunto tiene historia.

Desde 1994 en las zonas que estaban bajo control del EZLN, después en los municipios autónomos y más tarde en las amplias regiones gobernadas por las Juntas de Buen Gobierno, los neozapatistas de Chiapas

---

114 Walter Benjamín, *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*, Itaca, UACM, México, 2008, p. 43.

atienden por su cuenta las cuestiones de seguridad y justicia de decenas de miles de personas.

Un año después, el 15 de octubre de 1995, integrada por varios pueblos de la Montaña de Guerrero, se formó una Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que obedece a la Asamblea Regional, y de la que depende el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducción Comunitaria CRAC-PC. Hoy, con más de mil 200 policías que son electos públicamente por cada comunidad, procura seguridad a alrededor de 108 pueblos, en los que se ha reducido la criminalidad hasta en un 95%. El éxito de esta experiencia se explica por el control social que los pueblos ejercen sobre sus vigilantes y por el espíritu correctivo de la justicia que aplican. Así describen ellos mismos su labor:

Una policía comunitaria está integrada por los hombres y las mujeres más confiables de una comunidad. Uno no decide serlo; lo elige el pueblo en asamblea. Es un trabajo por el que no se recibe salario. La justicia comunitaria tiene por meta la reeducación de quienes cometen faltas, porque para nosotros no existen delitos, sino faltas leves o graves, y cuando ocurren éstas últimas el castigo lo pone la comunidad<sup>115</sup>.

---

115 Gustavo Castillo García. "Ser policía comunitario no es una elección, sino decisión de asamblea", *La Jornada*, 22/9/13.

A raíz del asesinato por el *narco* de Benjamín LeBarón y Luis Widmar Stubbs, en 2009 la comunidad mormona de Chihuahua decidió formar una autodefensa armada. En mayo de 2011, en Tetela del Volcán se integró el llamado Grupo Relámpago, formado por 200 personas entre las que hay campesinos, comerciantes y profesionistas que protegen una región de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Ese mismo año, también en Morelos, las comunidades de Ocozaltepec, Jumiltepec y Zacualpan formaron grupos de autodefensa. Y lo mismo sucedió en Cherán, Michoacán donde, como dijimos más arriba, la comunidad se armó para defenderse de los talamontes vinculados al *narco*. En el mismo estado hay experiencias semejantes entre nahuas de la costa, purépechas y mazahuas. En 2012, en la zona de Tantoyuca, Veracruz, se integró la Guardia Civil Huasteca.

A principios de enero de 2013, en la región de Costa Chica, cuatro comunidades agrupadas en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), decidieron tomar las armas para defenderse del *narco*. En unos cuantos días detuvieron a 54 personas acusadas de delincuencia organizada y para juzgarlas acordaron constituirse en “tribunal popular”, aunque a la postre los entregaron a las autoridades del estado. Ese mismo año, en Temalacatzinco, municipio de Olinalá, se formó la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular que, como las otras autodefensas armadas

de la entidad federativa, se ampara en el artículo segundo de la Constitución y en la Ley 701, de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

En Ayotitlán, Jalisco, desde 2012 están tratando de conformar una vigilancia comunitaria, como parte de la Organización de la Policía Comunitaria de todo el estado.

Por otra parte, en las comunidades indígenas donde se mantiene el sistema de cargos, los *topiles* o *polecías* sirven a su pueblo en funciones de seguridad y en algunas operan jueces indígenas.

En agosto de 2013, en dos estados distintos y casi simultáneamente, las autodefensas armadas se pusieron al tú por tú con el Ejército: en El Pericón, Guerrero, pobladores secuestraron a 100 efectivos militares que pretendían desarmar a los policías comunitarios y, poco después, en Aquila, Michoacán, localidad náhuatl de la que han tenido que salir alrededor de cien personas y donde la autodefensa comunitaria desarmó a la policía municipal, el Ejército detuvo a 45 vigilantes e incautó 70 armas, a lo que los vecinos respondieron reteniendo a 100 soldados con el fin de negociar la liberación de sus presos. A principios de 2014 los de Aquila anunciaron la creación de una nueva autodefensa comunitaria.

A fines de 2013 el gobierno federal comenzó a desarmar algunos grupos de autodefensa y a detener a sus dirigentes. Sintomáticamente sus acciones se

centraron en las regiones de La Montaña y la Costa Chica, de Guerrero, donde los guardias comunitarios de la CRAC-PC tienen consenso social, ha sido exitosa en su contención de la delincuencia y está más consolidada. Por si fuera poco, con la excusa del programa público de la Sedeso llamado Cruzada Nacional contra el Hambre y realizando tareas como cortar el pelo, distribuir alimentos y dar consultas médicas, los soldados están llegando a estas mismas poblaciones en una ominosa operación que utiliza la pobreza para remilitarizar el territorio. Resultado: multiplicación de los choques entre los cárteles del *narco*, entre el *narco* y el gobierno, entre las autodefensas ciudadanas y la fuerza pública...<sup>116</sup>

A principios de 2014, el exitoso avance de las autodefensas armadas que con la complicidad o pasividad del gobierno, expulsaron de amplias regiones de Michoacán al cártel de Los Caballeros Templarios, tema del que me ocuparé en el siguiente apartado, tuvo un efecto escaparate sobre las policías comunitarias de Guerrero, quienes pasaron de establecerse pausadamente en las comunidades que decidían organizarse de esa manera, a desarrollar una pequeña guerra de movimientos al modo michoacano para liberar de golpe a cerca de una decena de pueblos del control del *narco*. Así, el 23 de enero alrededor de mil integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadano aus-

---

116      Marcela Turati, "Militarización disfrazada de Cruzada contra el Hambre", *Proceso*, n. 1922, 1/9/13, p. 14-18.

piciado por la UPOEG, provenientes de Juan R. Escudero, Tecoanapa y Ayutla, emprendieron un operativo para tomar los poblados de El Ocotito, Mojoneras, El Rincón, Cajeles, Carrizal de la Vía, Dos Caminos, Buena Vista de la Salud y La Haciendita, en el municipio de Chilpancingo. Como parte de esa acción, en el rancho El Plan, próximo a Palo Blanco y a pocos kilómetros de la capital del estado, la policía comunitaria desmanteló un laboratorio donde se procesaba goma de opio. “Llegaron los libertarios que nos van a enseñar que más vale vivir de pie que morir de rodillas”, exclamo el viejo maestro de Mojoneras, Juan Espino Aguilar. Cuatro días después 500 soldados arribaron a El Ocotito con el propósito de desarmar a los policías comunitarios. Dos mil personas bloquearon la carretera federal México Acapulco y se interpusieron entre los militares y los comunitarios, para impedir que les quitaran el armamento. El Ejército se replegó<sup>117</sup>.

Con base en una revisión periodística, a mediados de 2013 José Gil Olmos intentaba dimensionar el problema. En el país, escribía, “hay más de 36 grupos de autodefensa ciudadana en ocho estados: 20 en Guerrero, cuatro en Michoacán, tres en Morelos, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de México y uno en Jalisco”<sup>118</sup>. Cuando redacto esto, a mediados de 2014, sin duda son más.

117 Sergio Ocampo Arista, “Policías comunitarios avanzan a más poblados de Guerrero; lanzan consignas contra Aguirre”, *La Jornada*, 27/1/14.

118 José Gil Olmos, “Michoacán, mucha fuerza, nula estrategia”, *Proceso* n. 1917, 28/7/13, p 14.

## *Tierra caliente*

El curso ascendente de las autodefensas armadas de Michoacán de principios de 1913 a mediados de 1914, lleva el sello peculiar de la región pero es también paradigmático del tipo de luchas que libran las poblaciones locales para recuperar territorios usurpados por el *narco*. Batallas contra un poder predador que viene de fuera y rompe el orden social preexistente desquiciando un estado de cosas que — aun si inicuo y ocasionalmente violento — era también familiar, previsible y consensual; poder vertical y prepotente que se impone rompiendo nexos horizontales, fidelidades antiguas y lazos solidarios.

Omnipresente en el campo mexicano, el cacicazgo es una relación social sin adjetivos, un orden patriarcal por el que toda comunidad o región que se respete debe tener un hombre fuerte: un padre atrabiliario o benevolente que meta en orden a su grey y la represente ante los poderes públicos, una figura de autoridad en la que por lo general se asocian riqueza económica y poder político.

Para el caso de Michoacán, me remito a los clásicos: San José de Gracia y San Garabato Cucuchán. Aunque Luis González nunca carga las tintas en la polarización social, quien lee *Pueblo en vilo*<sup>119</sup> conclu-

119 Luis González, *Pueblo en vilo*. Microhistoria de San José de Gracia. El

ye que en las décadas de los cincuenta y los sesenta del pasado siglo, últimos años que reseña la obra, los patriarcas de San José de Gracia fueron el padre Federico y don Bernardo González Cárdenas, quienes, sin tener autoridad formal, representaban al pueblo ante los gobiernos y, entre otras cosas, lograron que la tenencia de Ornelas se volviera municipio. En cuanto a la historieta canónica de Eduardo del Río, todo el que haya leído *Los supermachos*<sup>120</sup>, de Rius, sabrá que San Garabato no sería San Garabato sin el patrocinio de don Perpetuo del Rosal.

En sociedades rurales crecientemente polarizadas, como la nuestra, cacicazgo se ha vuelto sinónimo de explotación y dominación. Pero siendo un orden injusto el de los caciques es también un orden conocido, manejable y por ello tolerable. El imperio del *narco* es otra cosa. Lo ocurrido en el Michoacán de los cárteles y en particular el de Los Caballeros Templarios, es lo que Leonardo Sciascia llama sicilianización. Degradación consistente en que el sistema jerárquico ancestral y su sistema normativo consuetudinario dejan paso a una dominación impredecible, sangrienta y desmedida en sus exigencias. Además de inestable y cambiante, pues los cárteles pelean entre sí y a uno malo sigue uno peor, dado que los recién llegados necesitan demostrar a sangre y fuego que ahora son ellos los que mandan. No es casual que dos de las prácticas

---

Colegio de México, México, 1968.

120 Eduardo del Río (Rius), *Mis Supermachos*, Grijalbo, México, 1992.

territoriales más importantes del crimen organizado sean *vigilar* y *castigar*, coincidiendo con el título de un libro emblemático de Michel Foucault sobre la microfísica del poder<sup>121</sup>.

En la descripción que sigue, Sciascia bien podría estar hablando del Michoacán templario:

Yo entiendo por sicilianización (...) una caída del espíritu público (...) el predominio de los intereses particulares, que también pueden ser criminales. Y la mafia es un fenómeno de ese tipo (...) Antes cada pueblo tenía su capo mafia, su jefe, sus mafiosos, todos se conocían. Un pueblo sabía quién era el capo de la mafia, porque el capo era la persona a la que se podía uno dirigir para conseguir justicia; una especie de juez de paz. Ahora ya no se sabe. No se sabe quién es el capo, quiénes son los mafiosos<sup>122</sup>.

En Michoacán desde hace más de una década el *narco* es soberano, primero fueron Los Zetas, después La Familia Michoacana y más tarde Los Caballeros Templarios. Entre 2012 y 2013 este último cártel llegó a controlar la mayor parte de la entidad. Un estudio realizado por el agente federal de inteligencia Octavio Ferris, afirma que:

121 Michel Foucault, *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI, México, 1980.

122 Federico Campbell, "Federico Campbell y su diálogo con Sciascia", *Proceso*, n. 1947, 23/2/14.

Los Caballeros Templarios (...) tienen una organización “espejo” de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (...) Están divididos, igual que la Procuraduría michoacana, en siete subregiones, cada una de ellas con su jefe (...) A principios de 2013 controlaban 81 municipios, (...) los más importantes de la entidad, incluyendo (*la capital*) Morelia<sup>123</sup>.

Y esto sólo es posible porque los delincuentes tienen un enorme poder de fuego. Según un estudio sobre el tráfico a México de armas provenientes de Estados Unidos, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2007 había en nuestro país 15.5 millones de armas ilegalmente en manos de civiles, además de los 3.1 millones de armas debidamente legalizadas. En 2014 la cifra ya era de 20 millones, la mayor parte provenientes de EU. El informe establece también que el principal destino de las armas llegadas entre 2006 y 2010 fue Michoacán<sup>124</sup>.

El estado que nos ocupa da al Océano Pacífico, colinda con la Sierra Madre Occidental y tiene fronteras con Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Colima, Querétaro y Estado de México. Ahí se mueve cocaína por tierra y en lanchas con doble motor fuera de borda, en la sierra de Coalcomán se siembra marihuana con so-

123 Citado en José Gil Olmos, “Una plaza que ambicionan todos”, *Proceso*, n. 1917, 28/7/13.

124 <http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/6.Firearms.pdf>.

fisticados sistemas de riego y también amapola, de la que se extrae goma de opio, base de la morfina y la heroína. Michoacán es el segundo productor nacional de mariguana y amapola, pero sobre todo produce *crystal* y otras drogas sintéticas en verdaderas “fábricas de enervantes”, también llamadas “cocinas”, que a través del puerto de Lázaro Cárdenas reciben los precursores provenientes de Asia. Según la Marina Armada de México, la producción de metanfetaminas en la entidad se incrementó hasta en 1,200%, desplazando la siembra de plantas psicotrópicas<sup>125</sup>.

Pero la imagen de unos cárteles dedicados exclusivamente a la producción y tráfico de estupefacientes es ya anticuada; en Michoacán — como en casi todo México — el *narco* se diversifica. En una entidad federativa que aporta el 25% del mineral de hierro que se extrae en el país y en el que Los Caballeros Templarios gobiernan de facto, el cártel no podía dejar escapar el negocio de Vulcano. Cuando menos desde 2010, mediante amenazas o simples acuerdos comerciales, la empresa delincinencial comenzó a acopiar el material ferroso de minas situadas en Michoacán, pero también en los vecinos estados de Colima y Jalisco. Cientos de camiones lo concentraban en el pueblo de Arteaga, para de ahí llevarlo al puerto de Lázaro Cárdenas, donde se embarcaba rumbo a China. Se calcula que cada año zarpan de ese puerto unos 30 barcos lle-

---

125 José Gil Olmos, “Una plaza que ambicionan todos”, *Proceso*, n. 1917, 28/7/13.

nos de mineral y cada cargamento vale unos 13 millones de dólares. De estos, entre el 50 y el 75% proviene del cártel, que además cobra a las mineras cuotas de protección y hasta las presiona para que aumenten las compensaciones que deben pagar a las comunidades dueñas de las tierras. Esto último lo hace no por afán justiciero, sino porque sobre estas bonificaciones se lleva un porcentaje. Cuando un ejecutivo de la Arcelor Mithal, la mayor acerera del mundo, denunció las exacciones de los Templarios, fue asesinado<sup>126</sup>. De menor volumen pero alto valor son las exportaciones a China y Taiwán de madera de granadillo o sanguayica, especie en peligro de extinción que el *narco* extrae violando la ley y pasando por encima de la oposición de las comunidades<sup>127</sup>.

Estas exportaciones se hacen abiertamente, mientras que por la misma vía y también a la luz del día se reciben de China y la India cientos de toneladas de los precursores químicos necesarios para producir “drogas de diseño”. Los Templarios importan igualmente llantas coreanas para tractocamiones y ropa de confección china que reetiquetan como Armani, Hugo Boss, Guess y otras marcas de prestigio. El imperio del *narco* sobre Lázaro Cárdenas y su aduana significa el control del segundo puerto del país, que a su vez es enlace con el mayor puerto del mundo, que es el

126 Luis Hernández Navarro, “La empresa Templaria”, *La Jornada*, 5/12/13.

127 Alejandra Guillén y Raúl Torres, “La violencia también por las minas y la madera”, *Proceso*, n. 1946, 16/2/14.

de Shanghai, y con la red ferroviaria de contenedores que opera la Kansas City Southern de México, que conecta nuestro magno embarcadero con el movimiento de mercancías Estados Unidos<sup>128</sup>. El dominio templatario sobre esta parte del comercio exterior se mantuvo hasta el 4 de noviembre de 2013, en que la Secretaría de la Defensa Nacional asumió el control de Lázaro Cárdenas y de la Administración Portuaria Integral. Según el exgobernador Fausto Vallejo el negocio del puerto le dejaba al cártel alrededor de dos mil millones de dólares al año<sup>129</sup>.

Sin embargo, al parecer la intervención del puerto no fue suficiente, pues cinco meses después, el 3 de marzo de 2014, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y otras agencias del gobierno emprendieron una revisión de los patios de acopio durante la que se embargaron 127 máquinas pesadas, se incautaron 120 mil toneladas de mineral, posiblemente de procedencia ilegal, pues no contaban con los permisos correspondientes y fueron detenidas seis personas de nacionalidad china. Las intervenidas son empresas en forma como Golden Container Yard, Global Sheeping, Rock Mineral, PWI Zhong, entre otras<sup>130</sup>.

Si casi medio año después de que la Secretaría de la Defensa había ocupado el puerto de Láza-

---

128 Luis Hernández Navarro, "El salvaje oeste michoacano", *La Jornada*, 18/2/14.

129 Jesús Aranda, "Lázaro Cárdenas, bajo control del ejército", *La Jornada*, 04/11/13 y Carlos Fernández-Vega, "México SA", *La Jornada*, 04/1/14.

130 Francisco García Davish, "Michoacán: golpe al negocio minero ilegal", *Milenio*, 04/3/14.

ro Cárdenas y en momentos en que, como veremos, los Templarios estaban siendo barridos por la acción combinada de las autodefensas ciudadanas y la fuerza pública, se seguían moviendo sin permisos cientos de miles de toneladas de mineral ferroso, todo hace pensar que la ilegalidad no es sólo práctica de los *narcos* sino también de las empresas extractivas formalmente establecidas, lo que se confirma con las violaciones a la ley que reseñamos en el apartado referente a la minería tóxica. La conclusión es que el narconeocio no es más que una forma extrema de la acumulación y que sus procedimientos son sólo un poco más intimidantes, incontinentes y atrabiliarios que los del resto de los capitales.

La narcominería también opera en Coahuila. En octubre de 2012 Humberto Moreira, exgobernador de la entidad, cuyo hijo fue asesinado por los cárteles, denunció que “desde hace un año y meses (...) los narcotraficantes empezaron a cambiar su giro y en lugar de secuestro, levantones y cuotas (...) les dio por extraer carbón. Empresarios de la región (...) están coludidos con los narcotraficantes”<sup>131</sup>.

En el caso de las explotaciones forestales, el grado de penetración del *narco* como operador directo o protector de la extracción ilegal de madera, se mide por el hecho de que en abril de 2014, cuando las autodefensas ya habían golpeado fuertemente el poder de Los Caballeros Templarios, las autoridades federales

131 Carlos Fernández-Vega, “México S. A”, *La Jornada*, 4/1/14.

y estatales clausuraron 13 aserraderos y dos astilleros clandestinos en los municipios de Tacámbaro, Villa Madero, Queréndaro, Charo y Zinapécuaro, lugares en los que fueron incautados 11 vehículos, maquinaria y sierras, la madera requisada equivale a cerca de 10 mil árboles con un valor de casi 15 millones de pesos. La Procuraduría General de Justicia del Estado señaló que el golpe era para contrarrestar el “financiamiento de los grupos delictivos”<sup>132</sup>.

Al negocio de las drogas, de la minería y de la silvicultura el crimen organizado añade otras fuentes de ingresos que, además, les recuerdan a los pobladores quién manda en ese territorio. Los cárteles cobran derecho de piso a los comerciantes, en las zonas silvícolas se hacen pagar un porcentaje por la madera que sale, en las de ganadería por las reses que se venden y en las de agricultura de exportación, donde se cosecha limón, toronja, aguacate, mango, pepino y fresa exigen dinero por cada tonelada producida, mientras que en otros casos cobran por la cantidad de tierra que se trabaja y según el cultivo. Tampoco los municipios escapan a la extorsión y por diferentes vías entregan al *narco* parte de su presupuesto. En el extremo, los Templarios llegaron a cobrar derecho de piso a los funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que trabajan en Michoacán certificando las huertas que exportan a ese país sus cosechas.

---

132 Ernesto Martínez Elorriaga, “Incautan madera y clausuran aserraderos en municipios de Michoacán”, *La Jornada*, 12/4/14.

Los datos sobre montos de las exacciones varían dependiendo del informante, pero en todas las estimaciones son exhaustivos y cuantiosos. Éstas son algunas cifras: la minería de hierro pagaba entre 3 y 5 dólares la tonelada exportada, pero otros sostienen que una empresa como Minera del Norte entregaba hasta 30 mil dólares semanales a cambio de “protección”. Los silvicultores debían cotizar el 10% del valor de la madera cosechada, y hay que considerar que la de Michoacán es la tercera producción forestal del país, con un volumen anual que llegó a ser de un millón de metros cúbicos, aunque la inseguridad reciente lo redujo a la mitad. En el aguacate había que cotizar 1.50 pesos por planta en el vivero, dos o tres mil pesos por hectárea en la plantación y tres o cuatro mil pesos la tonelada después del corte. En el ganado se debían ceder 8 pesos por kilo en las reses en pie y los carniceros entregaban 5 pesos más por cada kilo que venden de carne ya procesada. Los maiceros pagaban mil 500 pesos por hectárea y cien pesos más por tonelada al embodegar la cosecha. Los jornaleros abonaban 20 pesos, de los ochenta que en promedio reciben como salario. El *Comandante Cinco*, de las autodefensas, calcula que sólo en Tepalcatepec, entre lo que les sacaban a los limoneros, los empacadores, los ganaderos y los comerciantes, el cártel de los Templarios obtenía 30 millones mensuales<sup>133</sup>.

133 Ver Ernesto Martínez Elorriaga, “Los templarios se desintegran, afirma líder de autodefensas”, *La Jornada* 24/1/14; y Laura Poy Solano, “El campo michoacano postrado por el narco y los efectos del TLC”, *La Jornada*, 26/1/14.

Y también las alcaldías cotizaban; en la de Chinicuila, por ejemplo, tenían que dar 10% de las participaciones federales, entregado al recibirlas, 60 mil pesos en salarios que se abonaban sin que tuvieran que trabajar a quienes indicara el *narco*, y la obra pública había que contratarla con las empresas que ellos manejaban, además de comprarles los materiales de construcción. Justo Virgen, alcalde de ese municipio, calcula que entregaba a los Templarios medio millón de pesos al mes<sup>134</sup>, y José Manuel Mireles, quien fuera vocero de las autodefensas, sostiene que entre el 15% y el 25% del presupuesto público del estado de Michoacán terminaba en las arcas del cártel. Los alcaldes tributaban y se hacían de la vista gorda con las operaciones del *narco* porque estaban amenazados, pero también porque habían llegado al cargo gracias a los Templarios, que decían por quién había que votar.

Más que sobornos, estos pagos se convirtieron en una suerte de carga fiscal extraordinaria. Así lo reconoció recientemente un productor de aguacate: “No hacemos el pago porque queramos, pero con eso ya no nos roban y dejan que vendamos nuestro producto”<sup>135</sup>. Como ya se dijo, ni los jornaleros — que ganan una miseria — escapaban a la exacción, así en el ejido de Antúnez los cortadores de limón pagaban una cuota de 200 pesos a la semana<sup>136</sup>.

134 Arturo Cano, “Chinicuila, otro ayuntamiento con ‘asesoría’ de Templarios”, *La Jornada*, 5/2/14

135 Antonio Román, “Michoacán en grave caos que puede propiciar un estallido social”, *La Jornada*, 15/8/13.

136 Ernesto Martínez Elorriaga, “Toman grupos de autodefensa poblados

Los testimonios recogidos por el periodista Arturo Cano documentan la omnipresencia de la coacción y exacciones del *narco*:

“Si usted decía que iba a cortar limones, ellos decidían cuando”.

“Si su parcela valía un millón y a ellos les gustaba, quesque se la compraban en 100 mil pesos”.

“Al empaque de pepinos donde yo trabajaba, llegaban los sábados a cobrar cuota”.

“Si querías sacar un camión de toronja tenías que pagar 400 pesos”.

“Cobraban 700 pesos si matabas una vaca y aparte un peso por kilo”.

Una señora que vende birria resume la situación en dos datos: el IVA templario elevó el precio del quilogramo de bistec de 60 a 90 pesos, y el de tortilla de 12 a 16<sup>137</sup>.

Como se puede apreciar, después de la droga y junto con la minería y la silvicultura, la actividad agrícola se volvió importante en el negocio de los cárteles de Michoacán. Y es que el estado, que es uno de los mayores productores agropecuarios del país, cosecha anualmente un millón 300 mil toneladas de aguacate Hass,

---

del municipio de La Huacana, Michoacán”, *La Jornada*, 19/12/13.

137 Arturo Cano, “Sólo el gobierno no sabía dónde estaba El Tucán”, *La Jornada*, 19/1/14.

la mayor parte vendidas a EU por montos próximos a los mil millones de dólares; cerca de medio millón de toneladas de limón; 250 mil toneladas de fresa, además de que es de los más grandes productores nacionales de guayaba, lenteja, melón y papaya, y cuenta con una importante producción silvícola y pecuaria.

En consecuencia los Templarios no sólo controlaban el territorio, también se apropiaban de las tierras. Los Ceballos tenían cinco huertas de aguacate en Cuaramo, El Arapo, Charapóndiro, El Arenal y Cuinío, con un total de 124 hectáreas. Para quitarles sus plantaciones los *narcos* mataron a Alfonso Ceballos, a sus hijos Adrián y Edgar y a dos de sus hermanos. El argumento fue que las huertas “les gustaban”<sup>138</sup>. Al parecer el cambio de manos de las tierras ha sido cuantioso, pues el sacerdote Gregorio López, de Apatzingán, sostiene que sólo en ese municipio 14 mil títulos de propiedad pasaron a manos del crimen organizado<sup>139</sup>.

Y el estado es un camposanto. A la hija del pastor de Codémbero se la llevaron los *narcos*, dos días después la encontraron muerta, pero aun así lo llamaron para exigirle dinero. A Jesús, de Tancítaro, le secuestraron un hijo y para juntar lo del rescate trató de vender su tierra, pero como la operación se tardaba mataron al niño. Los Templarios tienen un código de

138 Ernesto Martínez Elorriaga, “Autodefensas entregan huertas que estaban en poder de los Templarios”, *La Jornada*, 17/1/14.

139 Arturo Cano, “¡Viva Cristo Rey!, nuevo grito contra los Templarios”,

conducta que se han encargado de difundir, pero que no respetan. “Pura mentira – dice José, que fue sicario –. Decían que no se debía maltratar a las mujeres, y lo hacían; que no había que llevarse niñas y también lo hacían; que no se dedicaban al secuestro y secuestraban”<sup>140</sup>.

Desde que el 3 de enero de 2007 –precisamente en Apatzingán, corazón del *narco* michoacano– el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra a los cárteles de la droga, según datos oficiales ha habido 13 mil homicidios dolosos en la entidad, aunque la iglesia católica, a través de la arquidiócesis de Morelia, sostiene que son más de 30 mil muertes violentas, de las cuales dos mil 300 ocurrieron entre 2011 y 2013, desde la llegada de Fausto Trejo al gobierno<sup>141</sup>. Fue la de Trejo una administración controlada por el *narco*, pues hoy sabemos que el hijo del mandatario estaba relacionado con los capos de la droga desde los tiempos de la campaña de su padre y el secretario de Gobierno Jesús Reyna García, que en ausencia del titular del ejecutivo fue gobernador interino, tenía tratos con Los Caballeros Templarios cuando menos desde 2011. Desde el 4 de abril de 2014 Reyna está detenido debido a su presunta vinculación con el *narco*<sup>142</sup> y el 18

---

*La Jornada*, 19/1/14.

140 Arturo Cano, “Ayer templario, hoy autodefensa”, *La Jornada*, 21/1/14.

141 José Gil Olmos, “Víctimas de Michoacán: el recuento imposible”, *Proceso*, n. 1944, 2/2/14.

142 José Gil Olmos, “Los pasos chuecos de Reyna”, *Proceso*, n. 1954 13/4/14.

de junio de ese año Fausto Trejo renunció a su cargo alegando motivos de salud.

La cartelización del estado es de larga data pero hay diferencias de estilo en la dominación delincuencia. Entre la violencia sin adjetivos de Los Zetas, el patriarcalismo armado de La Familia Michoacana y el moralismo salvaje de Los Caballeros Templarios, algunos añoran el autoritarismo ordenado y previsible que mantenía “el jefe”, “el impartidor de justicia” que fue Jesús *El Chango* Méndez, cabeza de La Familia, quien cuando menos sabía mantener el gallinero en paz<sup>143</sup>.

Exdirector de una agencia de inteligencia y conocedor del tema, Guillermo Valdez Castellanos caracteriza así la situación creada en Michoacán:

Esto es lo grave del proceso de captura y reconfiguración del Estado. Estos (*cárteles*) llegan a imponer la normatividad mafiosa, y como no se sabe a quién recurrir para romper esta normatividad del crimen organizado, pues los actores sociales se acomodan, ya sea empresas transnacionales, comisarios ejidales o autoridades portuarias<sup>144</sup>.

Y lo mismo sostienen algunos de los propios afectados, como el agricultor calentano que, entrevistado por

143 Arturo Cano, “Al dividirse La familia la Tierra Caliente pasó a una vida de terror”, *La Jornada*, 20/1/14.

144 Ap, “Reconocen autoridades la incursión de cárteles de la droga en la minería: Ap”, *La Jornada*, 1/12/13.

Arturo Cano, se refiere a los añorados tiempos en que no se habían conformado Los Caballeros Templarios y reinaba *El Chango* al frente de La Familia Michoacana: “Sólo el dinero ilícito se movía en la región. Todos lo aceptábamos. Los narcotraficantes no sólo invertían, sino que evitaban los secuestros, los robos, las extorsiones. Eran un gobierno sobre un gobierno”<sup>145</sup>. Y los descubijados por la vida se hacían *narcos*. “Soy pobre y necesitaba dinero para sacar adelante a mi familia”<sup>146</sup> dice uno que por un tiempo fue *puntero* o *halcón*, el equivalente a topil en el escalafón del cártel.

Según estimaciones periodísticas no comprobadas, citadas por Luis Hernández Navarro, los Templarios contaban con un ejército de 10 mil hombres motorizados, comunicados y bien pertrechados, y una nómina de 30 mil servidores, mientras que en comprar favores de policías, militares, políticos y funcionarios diversos gastaban unos 7 millones de dólares mensuales<sup>147</sup>.

En Michoacán, como en otras entidades federativas, los cárteles de la droga son de hecho un Estado: imperan sobre una población y un territorio determinados, disponen de fuerzas armadas disciplinadas y centralizadas, cobran impuestos y con sus “ejecuciones” pretenden hacer justicia. En algunos casos, como

145 Arturo Cano, “Al dividirse La Familia la Tierra Caliente pasó a una vida de terror”, *La Jornada*, 20/1/14.

146 Arturo Cano, “Ayer templario hoy autodefensa”, *La Jornada*, 21/1/14.

147 Luis Hernández Navarro, “La empresa Templaria”, *La Jornada*, 9/2/14.

el de Los Caballeros Templarios, se dicen portadores de una ideología libertaria y de protección al pueblo, que está registrada en los dos libros de “pensamientos” escritos por Nazario *El Chayo* Moreno, también conocido como *El más loco*, y hasta inspiran una religión en ciernes pues Nazario, presuntamente muerto por la fuerza pública durante el gobierno de Calderón, pero en realidad ejecutado por el ejército en 2014, tiene numerosas capillas por toda la región de Tierra Caliente. La filosofía templaria “Sin riesgo no hay gloria”, – dice uno de los libros de autodesarrollo narco – es ciertamente mentirosa, pero no mucho más que el discurso de los políticos convencionales.

Según Gregorio López, cura de la diócesis de Apatzingán, que los conoce bien, el control templario se basaba en su capacidad de fuego pero también en que dominaban la economía, manejaban los servicios de salud y educación, mandaban en las alcaldías, tenían a su servicio a las fuerzas de seguridad y al ministerio público, y, en el ámbito de las ideas y las creencias, se apoderaban de las conciencias a través de una secta religiosa protestante llamada Nueva Cosecha, y mediante un centro de capacitación al que bautizaron Vida Vital<sup>148</sup>.

A veces los *narcos* de Tierra Caliente incursionaban en espacios federales presuntamente reservados a la política institucional. Así el 17 de octubre de 1913, un grupo de 12 personas que se identifica-

148 Arturo Cano, “No soy el más listo, soy el más hocicón: Padre Goyo”, *La Jornada* 27/2/14.

ba como Michoacanos Paz y Dignidad y después se dijo que estaban vinculados con los Templarios, se apersonó en la Cámara de Diputados para dialogar con los legisladores<sup>149</sup>. Y cuando lo consideraban necesario los Templarios mostraban su poder de fuego golpeando directamente al gobierno federal a través de sus instituciones: el 27 de octubre de 2013 atacaron simultáneamente 18 instalaciones de la CFE, dejando sin energía eléctrica a medio millón de usuarios.

Los cárteles nacidos en Michoacán tienen señas de identidad que los distinguen de otros grupos delincuenciales. Si en regiones menos tradicionales la cultura del *narco* es deslumbrante y ostentosa, en la densa y ancestral sociedad michoacana no deja de rendir culto al *mañoso* emprendedor, pero apela también a valores más profundos y entrañables como la comunidad, la familia y la religión cristiana. Así lo hicieron en su momento los Templarios al tomar su nombre de la orden militar y religiosa fundada en Jerusalén en 1119, y así lo hacen las autodefensas al usar consignas de viejos movimientos católicos mexicanos. En un contexto como el michoacano no sorprende que en el entorno de los grupos armados que desde principios de 2013 combaten al *narco*, se grite “¡Viva Cristo Rey!”<sup>150</sup>, pues cuando menos en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, el de los Cristeros de los años veinte

---

149 Francisco Castellanos y José Gil Olmos, “Las autodefensas se fortalecen y multiplican”, *Proceso*, n. 1934, 24/11/13.

150 Arturo Cano, “¡Viva Cristo Rey!, nuevo grito contra los Templarios”, *La Jornada*, 19/1/14.

del pasado siglo fue un movimiento defensor de las costumbres y encaminado a recuperar los territorios comunitarios y expulsar a los personeros del autoritarismo jacobino del presidente Calles.

El hecho es que cuando menos desde hace diez años el Estado mexicano perdió el control sobre el territorio de esa entidad federativa. Así lo reconoció implícitamente la propia Presidencia de la República en mayo de 2013, cuando Peña Nieto lanzó una “cruzada” para “recuperar Michoacán” y el 25 de ese mismo mes sostuvo:

Ha habido espacios que se han dejado o que ha ganado, lamentablemente, el crimen organizado. Por eso el operativo (...) tiene el propósito, precisamente, de lograr una recuperación territorial de la zona<sup>151</sup>

Pero el verdadero golpe a Los caballeros Templarios no se los dio el gobierno sino las autodefensas ciudadanas, que desde “la fecha del alzamiento”, el 24 de febrero de 2013, se multiplicaron por todo el estado.

Fueron más de 12 años de sufrir en carne propia los secuestros, las ejecuciones y descuartizamientos en la familia de mi esposa; todo esto afecta hasta que llega un momento en que dices

---

151 Citado en José Gil Olmos, “Michoacán, mucha fuerza, nula estrategia”, *Proceso*, n. 1917, 28/7/13, p 14.

“¡ya no!” — explica el médico José Manuel Mireles Valverde—. Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo y elegir la forma en que queremos morir. Todos coincidimos en una sola: morir luchando, no como animalitos en un rastro... Andamos haciendo el trabajo que el gobierno del estado no ha querido hacer o no ha podido, por estar involucrado con el crimen organizado (...) Nosotros para muchos pueblos somos la justicia, no la ley, porque no pretendemos ser la ley<sup>152</sup>.

La aparición en Michoacán de grupos armados formados para enfrentar a los cárteles de la droga tiene como antecedente la emblemática lucha que en abril de 2011 emprendieron los purépechas de Cherán contra los narcotraficantes que arrasaban sus montes. Y aunque el agravio inicial era por tierras comunales usurpadas por pequeños propietarios, también se recuerda que el 14 de junio de 2009, en el pueblo náhuatl de Santa María Ostula, el Congreso Nacional Indígena, ahí reunido, declaró que los pueblos tenían derecho a la autodefensa. Dos semanas después la comunidad recuperó sus tierras ancestrales, —a las que devolvieron el nombre de Xayakalan—, e integró una Policía Comunitaria, reanimando la Guardia Tradicional que

---

152 José Gil Olmos, “Solo el pueblo puede defender al pueblo”, *Proceso*, n. 1934, 24/11/13.

había existido hasta los ochenta del siglo pasado y había sido disuelta por órdenes del gobierno. En mayo de 2010 el Ejército desarma a estos grupos, el *narco* se envalentona y desde entonces se multiplican los asesinatos. Significativamente el 8 de febrero de 2014, apoyados por autodefensas de Coalcomán, Chinicuilá y Aquila, que llegan armados y a bordo de 50 camionetas, exintegrantes de la Policía Comunitaria que habían tenido que abandonar la comunidad, regresan a Ostula, liberan al pueblo de los delincuentes y restauran su cuerpo de autodefensa. Cinco días después ocupan una población cercana, conocida como La Placita, que era bastión del crimen organizado<sup>153</sup>.

Pero estos fueron, en su origen, movimientos locales de base comunitaria y talante indígena, mientras que el proceso organizativo que arranca el 24 de febrero en Tepalcatepec, Coalcomán y Buenavista, donde unos 800 hombres y mujeres se alzan en armas, y que más tarde conforma el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios, que Mireles y otros promueven, es un movimiento ciudadano amplio y representativo del descontento popular incubado durante la larga noche del *narco*, pero encabezado por agricultores pequeños, medianos y grandes, y por un tiempo consentido, si no es que auspiciado, por el gobierno federal. Un movimiento que, por obvias razones de seguridad, primero toma las localidades

---

153 Alejandra Guillén y Raúl Torres, "La violencia también por las minas y la madera", *Proceso*, n. 1946, 16/2/14.

expulsando a los *narcos* y sólo después realiza asambleas donde explica sus motivos y llama a formar comités ciudadanos. Un movimiento que, a diferencia de las policías comunitarias de Guerrero, vinculadas a un Consejo que trabaja por la justicia social, rechaza las minas y apoya a los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no tiene más objetivo que librar de Templarios a Michoacán. Un movimiento en cierta medida concertado por sus principales animadores pero al que se van integrando grupos diversos autónomos y con frecuencia tácticamente divergentes, que a la postre conforman más una federación que un organismo con mando unificado. Un movimiento que dispone de recursos y armas AK-47, R-15, M2 y fusiles de asalto, de las que otros carecen. Un movimiento con luces y sombras, pero de notable eficacia e indiscutible legitimidad social cuando menos en ese estado.

La transición cualitativa que representan las autodefensas respecto de las policías comunitarias está en que el movimiento desplegado en Michoacán durante 2013 no fue —como el de la CRAC-PC en Guerrero—, la pausada construcción de una instancia autogestionaria capaz de restablecer y administrar la seguridad en los pueblos, sino una explosiva insurrección para derrocar el poder establecido. Porque los indignados de Tierra Caliente se alzaron en armas contra el mal gobierno...; contra el mal gobierno tem-

plario, naturalmente, pues es claro que quien mandaba en la región era el cártel y no el Estado mexicano.

El Consejo General de Autodefensas no fue una policía comunitaria como la guerrerense, que combate el delito y hace justicia mediante una estructura autogestionaria permanente. Los alzados de Michoacán emprendieron una guerra que, como ellos mismos han dicho, terminará el día en que erradiquen a los Templarios de su entidad federativa. Lo demás es harina de otro costal. Si los comités ciudadanos que las autodefensas llaman a formar en las asambleas que realizan cuando toman un pueblo, se transforman o no en órganos de gestión autonómica de la vida comunitaria, es cuestión que no depende de quienes los convocaron. Y también es otro asunto si algunos de los grupos armados se asocian a un cartel emergente, se vuelven paramilitares o se someten a los designios gubernamentales de control social. Una guerra se propone lo que se propone y la de Tierra Caliente tenía por objeto derrocar el despotismo tributario de los Templarios. Nada más y nada menos.

Para entender su especificidad puede ser útil diferenciar las policías comunitarias de Cherán y Aquila, de las autodefensas de Tierra Caliente, y compararlas con otras insurgencias rurales ocurridas antaño en nuestro país. Los alzados nahuas de Aquila y los purépechas de Cherán siguen los patrones que por lo general atribuimos a los pueblos indios: son de base comunitaria y territorialmente se circunscriben a ám-

bitos locales; los alzados de Tierra Caliente, en cambio, operan con una lógica mestiza y ranchera, y aun si se anclan en sus municipios de origen, tienen una visión más regional. Los indígenas deciden sus acciones con base en las condiciones que guarda su comunidad, los mestizos tienen presente la totalidad del escenario bélico. Los indígenas responden a previos acuerdos de asamblea, los mestizos actúan con base en lo pactado entre unos cuantos notables, aunque posteriormente convoquen asambleas. Los indígenas pueden sufrir reveses —como los han sufrido los de Aquila— pero se sobreponen gracias a su cohesión comunitaria, los mestizos se dividen, confrontan y tienen posturas zigzagueantes. Los indígenas pueden liberar una comunidad y gobernarla pero no debilitan sensiblemente el dominio estatal del *narco*, los mestizos tienen mayor capacidad de fuego, desarrollan tanto la guerra de posiciones como la más difícil y compleja guerra de movimientos y pudieron quebrar el poder del *narco* en el estado. Los indígenas son tácticamente débiles y estratégicamente fuertes, los mestizos son tácticamente poderosos pero frágiles en la perspectiva del mediano y largo plazos. Los indígenas son ensimismados, los mestizos son extrovertidos.

El objetivo de nuestra guardia es cuidar nuestra comunidad y nuestra gente —declara Octavio Villanueva Magaña, presidente del comisariado de Bienes Comunes de Aquila—. Estamos

en contra de expandirnos y andar conquistando territorios como lo hacen los grupos de autodefensas.

No compartimos la idea de una autodefensa expansiva que conquista territorios — sostiene Francisco Jiménez Pablo, representante en Michoacán de la CNPA Movimiento Nacional—. La concepción de Aquila era de una guardia circunscrita a su territorio (...) que respeta la forma de organización comunitaria<sup>154</sup>.

Los alzamientos indios de Cherán y Aquila se asemejan al de los zapatistas históricos: invencibles en su terruño pero reacios a combatir fuera de su región; el de los mestizos de Tierra Caliente se parece al de los villistas: menos aferrados a sus comunidades y por ello capaces de integrar una fuerza militar de alcance nacional. Podremos tener predilección por el Ejército Liberador del Sur o por la División del Norte, pero es un hecho que sin la convergencia de los *apocalípticos* y los *integrados*, la revolución mexicana de 1910 no hubiera tenido el carácter plebeyo y campesino que finalmente tuvo.

Las autodefensas han ido incorporando a los muchos agraviados por el *narco* que hay en el estado y hasta

---

154 Patricia Dávila, "Los nahuas de Aquila atacados por todos los frentes", *Proceso*, n. 1962, 8/6/14.

a algunos arrepentidos que estuvieron con los Templarios y desertaron. Las cabezas más visibles son pequeños productores rurales como Estanislao Beltrán, conocido como *Papá Pitufo*, que es agricultor y ganadero de Buena Vista. Y ellos mismos confiesan que son sus negocios agropecuarios los que sostienen económicamente el movimiento: “¿Sabe quién financia nuestra lucha? Nuestras huertas” declaró el mismo dirigente<sup>155</sup>. El *Comandante Simón*, también conocido como *El Americano*, dice dedicarse a “la agricultura, la ordeña y la compraventa de queso”<sup>156</sup>; Alberto Gutiérrez, conocido como el *Comandante Cinco*, iniciador de las autodefensas en el municipio de Tepalcatepec, es productor de limón y criador de caballos<sup>157</sup>. Hipólito Mora, de La Ruana, que fue el primero en levantarse en armas, tiene 15 hectáreas de limoneros y se alzó porque los Templarios controlaban las empacadoras y no permitían que los demás sacaran su cosecha<sup>158</sup>. Misael González, exalcalde de Coalcomán, que en febrero de 2014 coordinaba los avances de las autodefensas hacia Lázaro Cárdenas, es un fuerte empresario de la madera al que los Templarios le sacaban hasta 150 mil pesos mensuales<sup>159</sup>. José Manuel Mireles Val-

155 Arturo Cano, “Sólo el gobierno no sabía dónde estaba El Tucán”, *La Jornada*, 19/1/13.

156 Arturo Cano, “Podría vivir tranquilo en EU, pero ¿qué iba a pensar mi familia?: El Americano”, *La Jornada*, 23/1/14.

157 Ernesto Martínez Elorriaga, “Los templarios se desintegran, afirma líder de autodefensas”, *La Jornada*, 24/1/14.

158 Arturo Cano, “Hipólito Mora se alzó en armas por los abusos de los templarios contra los limoneros”, *La Jornada*, 31/1/14.

159 Arturo Cano, “Autodefensas alistan la toma del puerto de Lázaro

verde, conocido como *El viejón*, se aparta de la norma de los demás jefes alzados pero, a cambio, su saga es típicamente michoacana: hijo de migrantes, nieto de braceros y migrante él mismo, es médico cirujano y trabajaba en el hospital de Tepalcatepec.

También participa gente muy pobre, alzados del común que reviran con ironía a la insinuación de que los de las autodefensas están con algún grupo del *narco*. Dice burlona María, esposa de uno de los comunitarios armados de La Ruana, detenido en marzo y acusado de formar parte del cártel Jalisco Nueva Generación: “Sí, cómo no, somos de la delincuencia organizada que vive de cortar pizanes para venderlos a diez pesos la bolsita, de chaponear, de pedir limosna...”<sup>160</sup>

Todo hace pensar que el contingente más numeroso de las autodefensas lo constituyen los jornaleros y empleados diversos que laboran para los agroempresarios. La historia enseña que en el mundo patriarcal de las fincas agrícolas, los trabajadores generan nexos de dependencia con el patrón, que van más allá de las labores del campo. Juan Álvarez, Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero y otros que en el arranque del siglo XIX respondieron al llamado independentista de Miguel Hidalgo, formaron sus ejércitos con los peones de sus haciendas, que cuando

---

Cárdenas”, *La Jornada*, 26/2/14.

160 Fernando Camacho Servín, “Esos perros no merecen comer” dicen custodios a autodefensas encarcelados, *La Jornada*, 25/1/14.

lo ordenaba el amo pasaban de pizcar a guerrear<sup>161</sup>; lo mismo ocurrió durante la revolución de 1910 con los ejércitos de los finqueros conservadores de Chiapas, que se enfrentaron a los ejércitos carrancistas con tropa de luneros y acasillados, y podemos suponer que lo mismo sucede hoy en Michoacán, donde los agricultores convocan a sus peones cuando se trata de poner el cuerpo a favor o en contra de los Templarios. Esto es lo que se desprende de testimonios recogidos por Arturo Cano: “A mí me fueron a exigir (*los Templarios*) que fuera, y que si no, podía mandar a alguien. Y ni modo, *mandé a dos peones míos*”, “Yo mismo fui, con unos de mis peones a plantarme en la carretera con unas camisetas que decían “policía anticomunitaria”, pero todos fuimos obligados”<sup>162</sup>.

Del financiamiento de sus operaciones, dicen las autodefensas que se obtiene de los agricultores afectados por las exacciones y de la venta del limón y el aguacate de las huertas recuperadas a los *narcos*. Reconocen, también, que algunos michoacanos migrados a Estados Unidos envían al Consejo General de Autodefensas una suerte de remesas anti *narco*, que incluyen apoyos en especie como radios, tiendas de campaña, trajes para lluvia... y armas. “Las pagan allá y se recogen en Colima”, le dijo un policía comunitario al periodista. Aceptan, finalmente, que las

161 Ver Armando Bartra. *Guerrero Bronco, Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande*, Ediciones Sin Filtro, México, 1996, p. 16.

162 Arturo Cano, “Al dividirse La Familia la Tierra Caliente pasó a una vida de terror”, *La Jornada*, 20/1/14. Las cursivas son mías.

propias empresas mineras de la región los han apoyado<sup>163</sup>, cosa sin duda preocupante dado el carácter atrabiliario de estas corporaciones, pero que no debiera sorprender a nadie pues los Templarios las saqueaban igual que a los demás y asesinaban a los personeros empresariales que les hacían frente.

Hemos visto con ejemplos que, para bien o para mal, la defensa del territorio es transclasista y los diversos actores de las sociedades locales se unen cuando lo que está en juego son sus ámbitos de reproducción. La composición del frente de los defensores depende, en cada caso, de la naturaleza de la amenaza: donde las mineras son el peligro, es natural que los pobladores converjan para defenderse de ellas, pero donde la agresión proviene de un cártel como los Templarios que extorsiona a todos por igual, incluyendo a las mineras, es entendible que éstas apoyen el movimiento de resistencia.

Las acciones que más tarde darán lugar al Consejo General de Autodefensas y Comunitarios, empiezan en Tepalcatepec, Coalcomán y Buenavista, el 24 de febrero de 2013, extendiéndose después a Aguililla, Aguila, Tomatlán, Chinicuila, Los Reyes y Vista Hermosa. Pero en noviembre de ese año los armados pasan de ocupar posiciones en una expansión que parece errática, a desplegar una calculada *guerra de movimientos*,

---

163 Arturo Cano, "Autodefensas: varias minas de Michoacán son o fueron explotadas por los Templarios", *La Jornada* 2/2/14.

cuyo primer objetivo es tomar Apatzingán, ciudad de 150 mil habitantes y donde tiene su sede la 43 Zona Militar, mediante una estrategia de pinzas que les permita ir cercando la capital del *narco* michoacano.

El 16 de noviembre toman Tancítaro; el 18 de diciembre ocupan La Huacana, El Chauz y Zicuirán; el 29 del mismo mes liberan Churumuco y Poturo; el 4 de enero entran en Parácuaro; el 11 caen Coahuayana, El Ceñidor y Antúnez y el 12 de enero, a bordo de unos 150 vehículos y después de una balacera que no deja víctimas mortales, ingresan en el bastión Templario que es Nueva Italia. Lo que sigue es Apatzingán, donde grupos presuntamente movidos por los Templarios queman tiendas departamentales y cierran caminos con vehículos incendiados, en prevención de la ofensiva anunciada. “Ya está cercadita (...) La queremos tomar pero aún no tenemos fecha. Será en estos próximos días”<sup>164</sup>, declara a principios de 2013 el jefe Hipólito Mora.

Sin duda el gobierno de Peña Nieto estaba enterado de los planes de las autodefensas, pues hay testimonios de que asistieron militares a algunas de las reuniones que se realizaban en Tepalcatepec para preparar el alzamiento<sup>165</sup>. Sin embargo, pese a que —legítimas o no sus motivaciones— era patente que los ciudadanos armados estaban formalmente fuera

164 Ernesto Martínez Elorriaga, “Tras balacera autodefensas toman Nueva Italia, bastión de Templarios”, *La Jornada*, 13/1/14.

165 Arturo Cano, “Sabíamos de los antecedentes criminales de El abuelo, expresa un comunitario”, *La Jornada*, 9/2/14.

de la ley, durante todo 2013 el gobierno federal permanece a la expectativa y dejándolos hacer. Y finalmente cuando a principios de 2014 el presidente de la República decide tomar cartas en el asunto, lo hace con gran impericia política y peligrosa torpeza militar. Así, el 12 de enero el secretario de Gobernación da instrucciones de desarmar a las autodefensas y al día siguiente, en Antúnez, el Ejército dispara sobre un grupo de civiles que se interponían entre los militares y los comunitarios. El saldo es de tres muertos. Al día siguiente los militares y la Policía federal toman el control de Apatzingán, después de desarmar y acuartelar a los policías locales.

Las medidas de la fuerza pública emprendidas contra las autodefensas en enero de 2014, aunque puntuales y discontinuas, tienen antecedentes: en Buenavista 50 autodefensas habían sido arrestados, de los cuales 37 permanecen en prisión y, como dijimos más arriba, en Aquila 45 guardias comunitarios habían sido detenidos en agosto de 2013.

Las acciones gubernamentales orientadas a desactivar al Consejo General de Autodefensas y Comunitarios, o cuando menos de frenar un avance que hasta entonces la federación había consentido, se complementan con la difusión en el principal noticiero televisivo, de un video editado donde el vocero Mireles —hospitalizado por un accidente aéreo y en manos de la Policía federal que presuntamente lo protege— llama a deponer las armas. Los otros dirigentes

y el propio Mireles, que al día siguiente denuncia la manipulación mediática de sus dichos, celebran que por fin la federación se decida a entrar en el bastión *narco*, pero rechazan tajantemente dejar las armas. “Si nos desarmamos y regresan los Templarios nos van a matar como perros”, dicen. Y para convencer a la gente, el autodefensa de Coahuayana, Héctor Zepeda emplea una fórmula semejante: “Yo le digo al pueblo: Si los Templarios vuelven, a nosotros nos van a matar, pero ustedes van a ser esclavos”<sup>166</sup>.

La federación ratifica su presencia en Michoacán nombrando un Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral. Personero del presidente de la República, el poderoso Alfredo Castillo suplanta en los hechos al gobernador y, cuando menos al principio, su atrabiliaria intromisión resulta contraproducente para los fines del gobierno. Así, dos días después de la ofensiva del 12 de enero contra las autodefensas, Castillo y Peña Nieto interrumpen su finta contrainsurgente abandonando por el momento la pretensión de quitarles las armas y la iniciativa político-militar a las autodefensas.

Venían con la intención de desarmarnos, y siempre no — declaró el 15 de enero el *Comandante Beto* —. La situación cambió radicalmente a como lo plantearon en el acuerdo firmado en-

---

166 Arturo Cano, “Si los templarios vuelven, nos matan, pero ustedes van a ser esclavos: autodefensas”, *La Jornada*, 25/1/14.

tre el gobernador y el secretario de Gobernación, en el que prácticamente nos llevaban al precipicio<sup>167</sup>.

Sin embargo, a la vez que se repliega temporalmente en lo tocante al desarme, el gobierno federal emprende una ofensiva en el frente social. El 4 de enero el presidente de la República anuncia un Plan Michoacán, por el que durante 2014 canalizarán al estado 45 mil millones de pesos destinados al desarrollo social y el fomento económico. Y de inmediato los secretarios respectivos se apersonan con sus séquitos en la entidad federativa. Lo cierto es que de los 45 mil millones anunciados, 43 mil ya estaban incluidos en el Presupuesto de Egresos de la federación, pero en todo caso lo que no está en duda es la enésima reedición de la estrategia asistencial y clientelar como instrumento para neutralizar y eventualmente controlar insurgencias sociales que se salen de cauce. En los setenta del pasado siglo fue el Plan Guerrero, para enfriarle el agua a la guerrilla del Partido de los Pobres, así respondió en 1994 el presidente Salinas al alzamiento del EZLN, en Chiapas, y así se hace ahora en Michoacán ante la rebelión ciudadana de 2013. El doctor Mireles, vocero de las autodefensas, descalificó la medida:

Primero tienes que limpiar el estado, después establecer el estado de derecho, y cuando ya

---

167 Olga Márquez y Ernesto Martínez, "Contamos con 25 mil hombres armados, dicen autodefensas", *La Jornada*, 16/1/14.

lo hiciste ya puedes hacer todo lo demás, las inversiones, los cambios (...) Porque mientras esté el mismo sistema cada peso que entre (...) va a ir al crimen<sup>168</sup>.

O, como dijo el siempre claridoso *Padre Goyo*: “Cabrón, nos van a mandar agua potable por la tubería del drenaje; no, pues, no chinguen”<sup>169</sup>.

El hecho es que, pese a la renovada presencia de las fuerzas federales en Michoacán, los grupos armados del Consejo siguieron liberando territorio: el 14 de enero tomaron Úspero, más tarde incursionaron en La Huerta y el 20 del mismo mes entraron en La Cofradía, La Cancita y El Carrizo, el 25 se sumaron a la lista San Pedro, Jucutácato, La Carátacua, Jicalán, Chimilpa y Cutzato, en el municipio de Uruapan, San Juan Nuevo Parangaricutiro, cabecera del municipio del mismo nombre, y Las Yeguas, municipio de Parácuaro. El 16 de febrero entraron en Puruarán del Río, de La Huacana; y en Las Cruces, de Tumbiscatío. El 26 de ese mes tomaron Pátzcuaro a bordo de 90 camionetas y, dos días después, 50 vehículos de las autodefensas ingresaron a la ciudad aguacatera de Uruapan.

Para el mes de abril de 2014 los ciudadanos armados estaban en más de 31 municipios; controlaban totalmente Tepalcatepec, Buenavista, Coalcomán,

168 Arturo Cano, “Falla calendario oficial. Primero se debe desmantelar la estructura de los templarios: Mireles”, *La Jornada*, 1/3/14.

169 Loc. cit.

Chinicuila, Tancítaro, Parácuaro, Peribán y Coahuayana, y tenían presencia importante en La Huacana, Apatzingán, Churumuco, Múgica, Uruapan, Tocumbo, Los Reyes, San Juan Nuevo, Aquila, Ario de Rosales, Tingüindín, Lombardía, Aguililla, Nuevo Urecho, Lázaro Cárdenas, Gabriel Zamora, Pátzcuaro, Jiquilpan, Cotija y Yurécuaro, y también en municipios predominantemente indígenas como Salvador Escalante, Cherán y Paracho. En esos momentos el objetivo explícito de la *guerra de movimientos* de los alzados era cercar y tomar Lázaro Cárdenas, así como poblaciones cercanas, como La Mira y Arteaga, que son nidos Templarios y forman parte del corredor de acceso al puerto. También la capital del estado estaba en sus planes, pero todo hace pensar que la logística necesaria para liberar del *narco* una gran ciudad como Morelia, es algo que aún no tenían claro.

Después de la finta del 12 de enero de 2014 la federación, y con ella el gobierno estatal, renunciaron temporalmente a desarmar y contener a las autodefensas. Al contrario, desde febrero de ese año el Ejército empezó a acompañar sus avances, aunque sin participar directamente en los combates. Coordinación de facto que se pudo constatar el 28 de febrero en la 43 Zona Militar, sita en Apatzingán, donde se reunieron los representantes de las autodefensas y el comisionado federal. Según el boletín emitido en el encuentro se acordó que las autodefensas reportarían a las autoridades sus movimientos antes de realizar-

los, y, en general, que “las autoridades federales y estatales y los grupos ciudadanos trabajarán de manera coordinada”<sup>170</sup>. Un acuerdo quizá necesario y hasta pertinente pero de dudosa legalidad.

Las señales que apuntaban a ese avenimiento empezaron antes. El 23 de enero, desde Davos, Suiza, donde participaba en el Foro Económico Mundial, el presidente Peña Nieto había ofrecido que: “aquellos que genuinamente quieran participar en las tareas de seguridad (*pueden*) ser parte de los cuerpos policiacos”<sup>171</sup>.

Al día siguiente Estanislao Beltrán, líder de las autodefensas, le contestó: “No estamos pidiendo trabajo, estamos limpiando la casa y haciendo lo que le tocaba hacer al gobierno hace por lo menos 12 años”<sup>172</sup>.

Sin embargo, el 27 de enero el gobierno federal y los armados llegaron a un acuerdo por el cual “las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales”<sup>173</sup>, figura que existe en las leyes desde los años sesenta del pasado siglo, pero que había dejado de emplearse. Para los del Consejo lo que en verdad importaba del pacto es que —aunque portarlo sea ilegal por ser de uso exclusivo de ejército— en la práctica el gobierno les permita conservar

---

170 Ernesto Martínez y Andrea Becerril, “Autodefensas acuerdan con Castillo no entrar a Morelia”, *La Jornada*, 1/3/14.

171 Rosa Elvira Vargas, “Alcanza a Peña Nieto en Davos el tema de la violencia, “el gran reto en AL”, *La Jornada*, 24/1/14.

172 Gustavo Castillo y Andrea Becerril, “No estamos pidiendo trabajo”, reviran autodefensas al presidente, *La Jornada*, 25/1/14.

173 Arturo Cano, “Convierten a las autodefensas en cuerpos de defensa

su buen armamento y continuar liberando pueblos en su ininterrumpida campaña contra los Templarios.

De hecho al día siguiente del acuerdo, las autodefensas tomaron las cabeceras municipales de Los Reyes de Salgado y Peribán de Ramos, el 4 de febrero ocupaban Santa Clara y Tocumbo, y el 5 entraron en Lombardía. Mientras tanto en la cabecera municipal de Yurécuaro y comunidades vecinas como El Sabino, Las Palomas y La Joya, se levantaban en armas los pobladores constituidos en policía comunitaria. El *Comandante Cinco* puso en claro su interpretación del acuerdo del 27 de enero: Ahora somos un movimiento legítimo que cuenta con el apoyo de la federación y el Estado para seguir adelante y limpiar de la delincuencia a todo Michoacán<sup>174</sup>.

Por fin, el domingo 9 de febrero las autodefensas, encabezadas por el *Comandante Cinco* y por Estanislao Beltrán, *Papá Pitufó*, tomaron Apatzingán a bordo de 150 camionetas. Lo hicieron armados, pero sin exhibir sus pertrechos y escoltados por la fuerza pública, tanto federal como estatal. Desde el sábado estaban a las puertas de la ciudad esperando ingresar juntos, sin embargo ese día se les adelantó Hipólito Mora, quien con un centenar de hombres desarmados se apersonó en la catedral, donde fue recibido por el sacerdote Gregorio López, el *Padre Goyo*, que frente a

---

rurales", *La Jornada*, 28/1/14.

174 Ernesto Martínez Elorriaga, "Continúa el avance de las autodefensas; ayer tomaron la cabecera de Los Reyes", *La Jornada*, 29/1/14.

unos dos mil fieles ahí congregados celebró un Rosario por la liberación y llamó a conformar un consejo ciudadano que en adelante vigile que las autoridades no se vendan de nuevo al *narco*. Las sudaderas que portaban los hombres de Hipólito Mora traían el distintivo del Consejo Ciudadano Responsable de Impulsar el Sano Tejido del Orden Social, impulsado por el sacerdote, cuyas siglas: CCRISTOS, y consignas: ¡Viva Cristo Rey!, remiten al movimiento impulsado por la iglesia, que en los años veinte del pasado siglo resistió el jacobinismo del presidente Calles.

Apatzingán era templario. Según Estanislao Beltrán “entre 20 y 30 por ciento de la población estaba coludido con el crimen organizado”<sup>175</sup>, apreciación que ratifica de manera más florida uno de los autodefensas: “la delincuencia no sólo compró la yunta, sino todos los bueyes”<sup>176</sup>. La erradicación del cártel será una operación difícil que puede caer fácilmente en una “limpieza” sin reglas claras, en que los vecinos se enfrenten violentamente entre sí. Todo indica que en los cateos y detenciones practicados por policías federales y estatales a los que acompañaban autodefensas, se cometieron arbitrariedades. Paradójicamente las violaciones corrieron por cuenta de la fuerza pública más que de los civiles armados, quienes se deslindaron por boca del *Comandante Cinco*: “Vamos a exigir

175 Arturo Cano, “A claxonazo limpio entran las autodefensas al nido templario”, *La Jornada*, 10/2/14.

176 Arturo Cano y Ernesto Martínez, “Sin disparos, autodefensas toman Apatzingán”, *La Jornada*, 9/2/14.

a los gobiernos federal y del estado que aquellos que son inocentes y que nada tienen que ver con la delincuencia sean liberados de inmediato”<sup>177</sup>.

A mediados de 2014, cuando escribo esto, no es aún claro cómo terminará el alzamiento ciudadano de Michoacán, pero ya se desató el debate sobre el carácter de las autodefensas y la especulación sobre las intenciones de los diversos actores. Para algunos analistas de prensa el Consejo encabeza una emergencia social justiciera y libertaria cuyo ejemplo hay que seguir; otros en cambio consideran que las autodefensas están movidas por cárteles emergentes como el que lleva por nombre Jalisco Nueva Generación, que así se deshacen de la competencia; otros más —entre ellos los propios Templarios y el grupo guerrillero llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR)— ven en el proceso michoacano el principio del paramilitarismo de estado, presuntamente inspirado por el general colombiano retirado Óscar Naranjo, que hasta principios de 2014 fuera asesor del presidente Peña Nieto. Estos últimos podrían abonar a su favor que el 22 de enero, en entrevista, el *Comandante Simón*, reconoció que “son altos mandos (*del Ejército*) los que nos están apoyando”<sup>178</sup>, y un autodefensa de Tepalcatepec manifestó ante el periodista Arturo Cano que “desde

---

177 Ernesto Martínez Elorriaga, “Entran autodefensas a Apatzingán y detienen a 50 presuntos criminales”, *La Jornada*, 10/2/14.

178 Arturo Cano, “Podría vivir tranquilo en EU, pero ¿qué pensaría mi familia?: El Americano”, *La Jornada*, 22/1/14.

meses antes del surgimiento de las autodefensas, el gobierno se comenzó a reunir con gente en *Tepeque* (a las reuniones asistían militares”<sup>179</sup>.

Es también sintomático y preocupante que vean con simpatía a las autodefensas michoacanas, políticos de derecha como el panista Mauricio Fernández de la Garza, que como alcalde del municipio más rico del país, San Pedro Garza García, en Nuevo León, combatió al *narco* recurriendo a informantes que participaban de los cárteles y mediante un llamado “equipo rudo” que operaba al margen de la ley y al parecer se financiaba con cuotas que pagaban con propietarios de los antros<sup>180</sup>.

Lo que está fuera de discusión es que en Michoacán la gente llana libra una batalla por el territorio, una cruenta disputa —las autodefensas calculan seguramente con exageración que en un año han muerto entre mil 200 y mil 800 Templarios<sup>181</sup> y un número de los suyos que no publicitan— en la que la población local se enfrenta tanto a los cárteles como a la corrupción y torpeza de los gobiernos. Combate del todo semejante al que se libra en otras regiones del país.

Ciertamente hay diferencias. El Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducción Comunitaria, depen-

---

179 Arturo Cano. *Sabíamos de los antecedentes criminales de El abuelo, expresa un comunitario*. La Jornada 9/2/14.

180 Luciano Campos Garza. *La autodefensa, opción viable y perfectible*. Proceso, n. 1944, 2/2/14.

181 Arturo Cano. “*Al rato veíamos la zopilotea por todos lados*”, La Jornada 1/3/14.

diente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que surgió en 1995 en Guerrero, es un instrumento al servicio de los pueblos de La Montaña y la Costa Chica, sustentado en las asambleas y regido por reglas claras, que se ha mantenido independiente tanto del gobierno estatal como del federal. El Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana que a principios de 2013 se formó en la misma entidad federativa, tiene bases comunitarias menos sólidas, nace por la iniciativa de la UPOEG, una organización que gestiona recursos públicos, y desde el comienzo se vinculó al gobierno del estado, aunque posteriormente cobró distancia. El michoacano Consejo General de Autodefensas y Comunitarios se confronta, de arranque, con el omiso gobierno local pero no necesariamente con el federal, surge en un medio campirano dominado por agricultores acomodados y adopta sus usos y costumbres. Pero lo que estos y otros procesos tienen en común es la defensa del territorio, la férrea resistencia de las poblaciones locales a poderes externos que las someten y amenazan.

Más allá de los contrastes, pienso que los logros de la autodefensa michoacana son plausibles y, cuando menos en México, inéditos: en un año liberaron de un poderoso cártel a cerca de 40 municipios que representan la mayor parte de la entidad federativa, impusieron su iniciativa al gobierno federal, forzando al Ejército y la Policía a respaldar sus acciones, hicieron posible que el secretario de gobierno estatal y ex gobernador interi-

no — al que desde siempre habían señalado como hombre del *narco* — fuera encarcelado acusado de vínculos con los templarios, forzaron la renuncia del gobernador, propiciaron la caída de una docena de narcoalcaldes, impulsaron la creación de casi un centenar de comités ciudadanos, redujeron dramáticamente la criminalidad y tenían un plan para restaurar el tejido social en las comunidades divididas, mediante tres procesos: reconciliación, justicia y paz<sup>182</sup>.

Nada de todo esto se lo propone la “guerra contra el *narco*” iniciada por Calderón y continuada en lo esencial por Peña Nieto. Y es que las autodefensas, como las policías comunitarias, luchan contra los asesinatos, secuestros y exacciones que hacen imposible la vida de la gente, no contra el narconegocio en cuanto tal. Lo suyo no es la batalla contra el tráfico de drogas hacia el país vecino, tarea que Estados Unidos le impuso a México desde hace más de 30 años, lo suyo es seguridad y justicia para la gente, lo suyo es restaurar el tejido social.

Los claroscuros de una saga inesperada, desconcertante e irreductible a las analogías simplificadoras y a los clichés reduccionistas, se ratifican en los acontecimientos de abril, mayo y junio de 2014 que, a reserva de lo que suceda más adelante, parecen ser el capítulo final de la primera etapa de la insurgencia armada ciudadana en Michoacán. Veamos.

---

182 Arturo Cano, “No soy el más listo, soy el más hocicón”: Padre Goyo, *La Jornada*, 27/2/14.

Como señalamos antes, los acuerdos del 27 de enero para que las autodefensas se transformaran prontamente en Cuerpos de Defensas Rurales no se cumplieron, y por unos meses los alzados siguieron liberando territorios con la anuencia pasiva y el acompañamiento expectante de la fuerza pública, tanto la federal como la estatal. Sin embargo, en ese lapso el Comisionado Alfredo Castillo logró poner cuñas en la precaria unidad de las autodefensas y, cuando en abril anunció de nueva cuenta el inicio del desarme del cuerpo ciudadano y su conversión una Fuerza Rural reconocida y legalizada, tenía ya amarrada la aprobación de una parte de los líderes, entre ellos Estanislao Beltrán, *Papá Pitufó*, y Alberto Gutiérrez, *Comandante Cinco*.

En cambio otros dirigentes como Hipólito Mora —con ambigüedades— y sobre todo José Manuel Mireles, sin desconocer que las autodefensas no pueden seguir indefinidamente como fuerza pública al margen de la ley, seguían subordinando la transición a que Michoacán quede libre de cárteles y los comunitarios presos sean excarcelados. Condiciones que más que constituir una alternativa distinta —que en realidad nunca han esbozado claramente— expresan su profunda desconfianza en el gobierno.

Y la desconfianza se justifica: convenido el desarme entre el Comisionado y una parte del liderazgo, una minoría de los cabecillas destituye a Mireles como portavoz del Consejo General de Autodefensas.

sas. En abril Hipólito Mora es detenido y encarcelado acusado de asesinato por algunos de sus propios compañeros, cargo del que se le exculpa poco después, presumiblemente a cambio de que se incorpore a la Fuerza Rural. En mayo también a Mireles se le señala como responsable de algunas muertes, aunque en ese momento no se le fincan acusaciones formales.

El 16 de mayo 450 ex autodefensas rinden protesta como flamantes policías de la nueva Fuerza Rural. En el acto el Comisionado Castillo resume a su modo el periplo de la policía comunitaria michoacana: “La gente se levantó para solicitar la presencia del Estado y hoy ustedes son el Estado”<sup>183</sup>.

Muy distinta es la visión de los ahora disidentes. El martes 8 de abril, después de una caravana motorizada en la que más de ocho mil autodefensas desarmados recorrieron los 30 kilómetros que hay entre Apatzingán y Nueva Italia, Mireles declaró:

Yo anuncié el 5 de febrero que lo que estaba haciendo el gobierno con las autodefensas era puro teatro, porque jamás iba a cumplir sus compromisos y porque es su *modus operandi*. Nosotros hemos visto a través de la historia que el gobierno jamás ayudó al pueblo; al contrario, lo traicionó todas las veces que tuvo oportunidad y ésta no es la excepción<sup>184</sup>.

183 Ernesto Martínez Elorriaga, *La gente no se levantó contra el Estado sino para solicitar su presencia: Castillo*, La Jornada 11/5/14.

184 José Gil Olmos, “*Seguiremos armados, y seremos una piedra en el zapato...*”, Proceso n. 1954 13/4/14.

Otras voces coinciden con la postura del dirigente. El sacerdote católico José Luis Segura Barragán sostiene que:

...el error de todas las autodefensas fue haberse legalizado, porque al legalizarse el gobierno las puede controlar. Perdieron su autonomía, su sentido, hicieron un pacto con el diablo que no les benefició en nada y ahora están revueltos con narcotraficantes<sup>185</sup>.

Por su parte Francisco Jiménez Pablo, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, en el estado, considera que la creación de las Guardias Rurales:

...pervierte el proyecto comunitario, porque las corporaciones policiacas y militares están corrompidas, en tanto que las autodefensas están partidas: hay unos que apoyan a Mireles y otros a Papá Pitufo. Lo que vemos es que con este planteamiento se está dando paso, a mediano plazo, al paramilitarismo y a comunidades luchando contra comunidades<sup>186</sup>.

---

185 Arturo Cano. *Hay enfrentamientos y no hay muertos, como en las películas*, La Jornada 13/4/14.

186 José Gil Olmos, "Las autodefensas divididas y cooptadas", *Proceso*, n. 1959, 18/5/14.

En abril de 2014 un académico, Salvador Maldonado Aranda, investigador del colegio de Michoacán, hace su propio balance provisional. Para empezar se desmarca de las lecturas obsesionadas en descubrir en todas partes la mano negra del poder político y el poder económico: “Más allá de si surgieron con o sin apoyo gubernamental o de grandes intereses empresariales (...) contribuyeron a abrir un espacio de discusión para atender el problema de la violencia”. En consecuencia asume que el movimiento tuvo un carácter popular: “Sigo manteniendo que estos grupos de autodefensa, sobre todo los de Tierra Caliente, nacieron con un impulso popular y con dos demandas: seguridad y justicia”. Con base en estas apreciaciones considera que la única alternativa viable del gobierno es reconocerlos y negociar con ellos, si no lo hace — o si lo hace con doblez, como parece estar sucediendo — el saldo será nefasto.

Si hay un alejamiento práctico del gobierno federal con las autodefensas (...) no se con quién o con qué otros actores políticos puede estar jugando (...) para contribuir a la pacificación o generar una mayor certidumbre de gobernabilidad (...) Si se desaprovecha esta capacidad, esta fuerza política con la que nació la demanda social de las autodefensas, este tipo de proyectos corre el riesgo de descarrilarse, y esto va a ser lamentable pues podemos regre-

sar a la situación de hace un año... Mireles está haciendo recorridos en varios municipios; estuvo en la costa y está estableciendo una serie de diálogos con otro tipo de autodefensas. Las autodefensas no se pueden borrar de un plumazo y hay que entender que se deben hacer estos acercamientos por bien del estado y de la población<sup>187</sup>.

En Michoacán cualquier cosa puede pasar, pero a diferencia de aquellos a quienes la arrancherada sociedad calentana les genera suspicacias, yo encuentro en las autodefensas la vigorosa presencia de los mestizos del campo: el otro “México profundo”, que en verdad constituye la mayoría de nuestro mundo rural. En particular en el habla de los rebeldes, tal como la recoge el espléndido periodista que es Arturo Cano, escucho la claridosa voz mestiza de los campesinos de por acá: el abrumador sentido común, el realismo, la sensatez, los arcaísmos y otros hallazgos verbales, la ironía y el humor... Una palabra más “a raíz”, menos contaminada por el tallerismo y los clichés de ciertos discursos neoindianistas al uso. Así, algunos hechos y dichos de los líderes cívicos ahora disidentes, me hacen ser optimista.

El 10 de abril de 2014, antes de participar en una reunión con otros dirigentes de las autodefensas,

---

187 Maldonado fue entrevistado por José Gil Olmos en “Las autodefensas en vías de emancipación”, *Proceso*, n. 1953, 674/14.

Mireles encabezó un homenaje a Emiliano Zapata en la glorieta Cuatro Caminos, de Nueva Italia. Mientras tanto en otro mitin michoacano con el mismo motivo, el orador relacionaba certeramente el presente con el pasado: “Madero quería que Zapata se regresara a su rancho, quería que el pueblo se desarmara, pero el Caudillo del Sur continuó luchando”<sup>188</sup>. El día anterior Mireles había dicho en Tepalcatepec:

Aquí todo el pueblo es autodefensa. Antes cometía el error de decir “somos tres mil armados en *Tepeque*”, en un pueblo de 37 mil. Pero cuando regresamos de Apatzingán, el 26 de octubre del año pasado, había cinco mil gentes esperándonos. Jamás volví a decir somos tres mil. Somos el pueblo. (...) El día en que nosotros enfrentemos nuestros temores, nos empezaremos a dar cuenta de nuestra grandeza y, cuando el pueblo se organiza, no lo detienen<sup>189</sup>.

El 26 de junio de 2014, sin pedirle permiso al gobierno y encabezadas por el médico calentano, 300 autodefensas de los no “legalizados” toman La Mira, bastión del *narco* y puerta de entrada a Lázaro Cárdenas. El 27, en un operativo en el que participan el Ejército, la Marina y policías federales y estatales, el médico y 82 de sus

---

188 Arturo Cano, “Aún divididos, autodefensas se unen contra el desarme”, *La Jornada*, 11/4/14.

189 Arturo Cano, “Falla calendario oficial. Primero se debe desmantelar la

compañeros son detenidos. Acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y de narcomenudeo —aunque se presume que tanto las armas largas como la cocaína y mariguana, le fueron “sembradas” por sus captores— Mireles es trasladado al penal federal de alta seguridad de Hermosillo Sonora. De inmediato cientos de personas, entre ellas los que apoyan a la policía comunitaria nahua de Aquila, bloquean en diferentes puntos la carretera costera michoacana. Al día siguiente el consejo ciudadano del Movimiento Nacional de Autodefensas, en proceso de integración, declara:

El levantamiento de autodefensas no es violación del derecho sino restauración del mismo (...) Entre la ley y la vida se privilegia siempre la vida y, en todo caso, las autodefensas no hacen más que defender la Constitución frente al desorden<sup>190</sup>.

El encarcelamiento de Mireles confirmó que desde principios de 2014 la estrategia del gobierno para con las autodefensas de Michoacán había sido cooptar a los dóciles y reprimir a los rebeldes. Por otra parte la postura del líder calentano y el apoyo popular con que cuenta —y que se hizo evidente tras de su aprensión— convencieron a muchos dudosos de que la insurgen-

---

estructura de los Templarios: Mireles”, *La Jornada*, 1/3/14

190 Sanjuana Martínez, “Mireles: no quiero ser un mártir; solo quiero seguir limpiando de criminales a Michoacán”, *La Jornada*, 29/6/14.

cia ciudadana de Tierra Caliente era un movimiento legítimo. Así, desde el 27 de junio en que fue encarcelado, la solidaridad con Mireles ha ido creciendo. A principios de julio, cuando escribo esto, continúan los bloqueos en la carretera federal 200, en la costa de Michoacán, en los que se turnan alrededor de 5 mil personas, entre ellas los nahuas de Aquila. Además ha habido actos públicos de apoyo en Colima, Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Quintana Roo y el Distrito Federal. Adicionalmente se han manifestado por su libertad personajes políticos que hasta ese momento habían mantenido prudente distancia, como Javier Sicilia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional. También una parte de la Iglesia católica ha tomado partido. La Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (Cirm), que agrupa a 400 congregaciones, sostuvo en un manifiesto:

Hay regiones del país donde el Estado ha perdido el control. No es de extrañarse que grupos de autodefensa civil busquen frenar al crimen organizado en sus comunidades y expresen de esta manera su hartazgo ante la inseguridad, los abusos y la desprotección<sup>191</sup>.

---

191 Rodrigo Vera, "Congregaciones religiosas rechazan apoyar reformas; exigen mayor debate", *Proceso*, n. 1965, 29/6/14.

## *Siniestros “naturales”*

Los huracanes y tormentas tropicales no son corporaciones predatoras ni cárteles delincuenciales, pero sus efectos destructivos sobre los territorios comunitarios son semejantes a los que ocasionan el *narco* o el capital y aunque los primeros parezcan naturales, no son ajenos a la codicia de los segundos.

El *holding* que entre el 14 y el 15 de septiembre de 2013 formaron los huracanes *Ingrid* y *Manuel* mató a más de 160 personas, devastó casi medio millón de hectáreas y acabó con alrededor de 100 mil cabezas de ganado arrebatando caseríos, siembras, puentes y caminos a cientos de comunidades de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y otros estados. La arena y el lodo desplazados en los llanos por las crecientes de los ríos y los aludes y avalanchas que las lluvias provocaron en la sierra, no sólo arrastraron o sepultaron gente, casas, sembradíos y animales, también tornaron inhabitables e incultivables terrenos donde antes hubo caseríos, milpas, huertas, potreros...

¿La naturaleza que imita a los capitales? No: los saldos indirectos de la acción de esos mismos capitales que mediante desmontes arrasadores, relleno de humedales, taponamiento de ríos, urbanizaciones irresponsables, carreteras mal hechas y mala operación de presas hicieron más destructivo el impacto de las lluvias que, como siempre, acabaron ensañándose con los más pobres.

Quienes habían perdido parte de sus tierras por causa de minas, presas, carreteras, urbanizaciones... ahora perdieron por el agua enfurecida lo poco que les quedaba. Y también de este despojo se defiende la gente supliendo a la autoridad omisa con heroicas acciones solidarias: con lo que Abel Barrera llama “comunitariedad”. Tal es el caso del Consejo de Comunidades Damnificadas de Montaña y Costa Chica, formado en Guerrero el 22 de septiembre de 2013, a pocos días del temporal.

En la desgracia, los pueblos desentierran sus viejas estrategias de sobrevivencia, así lo cuenta el animador de Tlachinollan:

Es con (...) la fuerza que da la solidaridad, con sus manos (...) tienden puentes entre ellos para ayudarse. (*Hacen*) puentes colgantes volviendo a las técnicas de los vejucos y las varas, improvisan cobertizos, llevan la cocina de la casa al cerro con braseros, hacen guardias (...) para velar el sueño de sus hijos a quienes cubren con *nailons* que los protejan un poco del viento de la noche...<sup>192</sup>

Lo que sigue ocurrió en San José Guatemala, Municipio de San Marcos, Guerrero. El río crecía y la autoridad responsable del auxilio no tenía para cuando.

192 Marcela Turati, “Y la gente se organizó sola”, *Proceso*, núm. 1926, 19/9/13, p. 13.

“Dijeron que venían, pero nunca llegaron”. Entonces José Trinidad Carrillo, sus hijos y unos compadres agarraron una canoa y de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, se dedicaron a sacar gente.

Pasábamos entre las casas, estaba hondo todo. Los recogíamos y los llevábamos al cerro. De a cuatro por viaje, con remos. Cada niño con su mamá. Y así lo hacíamos. Los trajimos seguros, no podíamos perder ni una criatura. Nos pusimos de acuerdo para que no se perdiera ni una familia. Sacamos como 400 personas...<sup>193</sup>

---

193      Loc. cit.



## ARMANDO BARTRA

Tiene estudios en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue profesor en la Facultad de Economía, UNAM, de 1973 a 1980; en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de 1977 a 1982; y en la Maestría en Antropología Social, de 1990 a 1994.

Fue Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya, A.C., de 1983 a 2007. Actualmente es profesor-investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, en la Licenciatura en Sociología y el Posgrado en Desarrollo Rural. En 2011, recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina.

Es autor de 30 libros aproximadamente y cerca de 300 artículos periodísticos, de análisis y divulgación. Entre sus libros más recientes se encuentran: *El hombre de hierro* (2a. edic.), UACM / UAM / Itaca2014, *Hambre/Carnaval. Dos miradas a la crisis de la modernidad* (UAM-Xochimilco, México, 2013), *Campesindios. Aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado* (Bolivia, CIDES-Universidad Mayor de San Andrés, 2010); *Tomarse la libertad. La dialéctica en cuestión* (Itaca, México, 2010); *El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida* (Itaca / UACM, 2006).









Este libro se editó en la Ciudad de México  
en el mes de febrero del año 2019.

Todos los derechos reservados.